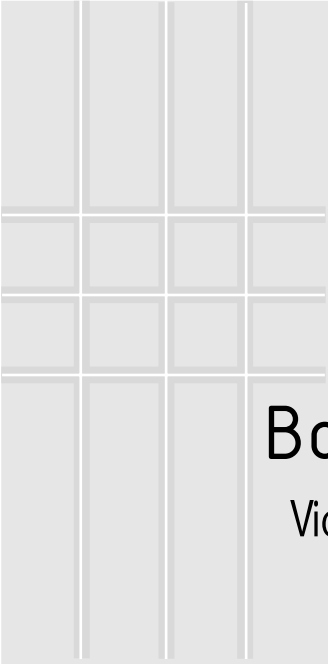




Bojayá, memoria y río

Violencia política, daño y reparación

Martha Nubia Bello

Elena Martín Cardinal

Constanza Millán Echeverría

Belky Pulido Hernández

Raquel Rojas Isaza



Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia

Bojayá, memoria y río : violencia política, daño y reparación / Martha Nubia Bello ...
[et al.] — Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de
Ciencias Humanas, 2005

204 p

ISBN : 958-701-561-4

1. Conflicto Armado 2. Violencia política 3. Desplazados por la violencia
I. Bello Albarracín, Martha Nubia, 1964- II. Universidad Nacional de Colombia
(Bogotá). Facultad de Ciencias Humanas. Programa de Iniciativas para la Paz y la
Convivencia

CDD-21 303.6 / 2005

*Bojayá, memoria y río. Violencia política, daño y
reparación.*

© Universidad Nacional de Colombia
Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz
y la Convivencia, PIUPC
Facultad de Ciencias Humanas
Departamento de Trabajo Social

© Colciencias

© Autoras:
Martha Nubia Bello
Elena Martín Cardinal
Constanza Millán Echeverría
Belky Pulido Hernández
Raquel Rojas Isaza

Primera edición: 2005

ISBN:
958-701-561-4

Impresión:
Universidad Nacional de Colombia
UNIBIBLOS
Correo electrónico:
dirunibiblo_bog@unal.edu.co
Bogotá, D.C., Colombia
2005

Edición:
Martha Nubia Bello

Revisión de estilo:
Ricardo Rodríguez

Diseño de carátula:
Andrea Mejía Cruz
afustama@yahoo.com

Diagramación:
Andrea Mejía Cruz

Fotos carátula:
Constanza Millán Echeverría

CONTENIDO

Introducción	7
I. El proceso de investigación y acompañamiento: enfoque y metodología	13
II. El contexto y los acontecimientos	37
III. Sentido, significado e impacto de la masacre	77
IV. Los mecanismos de afrontamiento: la supervivencia y la búsqueda del sentido	147
Equipo de investigación	175
Anexos	177
Bibliografía	191

INTRODUCCIÓN

“Si algo nos une, y por ello la ética es universal, es que todos somos siempre igualmente víctimas potenciales de la violencia. Todos somos, antes de cualquier otra cosa, un cuerpo frágil, alguien que puede perder su autonomía y su racionalidad bajo la violencia ajena. La fragilidad de nuestro cuerpo es la fragilidad de nuestra identidad y nuestro sentido de moralidad... Y sin embargo, mientras la posibilidad nos abraza a todos como permanente amenaza universal, la realidad nos distingue. Todos podrían serlo pero unos son los afectados y otros no, unos mueren y otros sobreviven. La humanidad está unida y a la vez quebrada en un miedo compartido, en la solidaridad con los hundidos, pero también en el deseo de supervivencia que nos concede alivio cuando es el otro el que muere. El miedo nos une pero el dolor se vive solo” (Taffalla, 2003: 147-148).

Son numerosos los hechos de horror y de barbarie asociados con la llamada violencia política que se han experimentado en el país en los últimos decenios. Las masacres, los asesinatos selectivos, las torturas, las desapariciones, los desplazamientos forzados, se constituyen en acontecimientos cotidianos que, a pesar de su crudeza, pero debido también a su continuidad y permanencia, terminan siendo parte del transcurrir “normal” de la sociedad colombiana.

El asesinato de 119 personas, en un contexto social en donde el horror no se haya “naturalizado”, significaría una catástrofe, una tragedia nacional que obligaría sin duda a cuestionar y a remover las bases sobre las cuales se asienta dicha sociedad. Un hecho de estas dimensiones supondría asumir responsabilidades profundas por parte de quienes están “legítimamente” designados y facultados para garantizar la protección de los miembros de una nación, así como de quienes, desde el lado de la “ilegalidad” o de la “parainstitucionalidad” y en nombre de lo que entienden por justicia, generan estos horrores. Una tragedia como ésta debería suscitar una mirada profunda de la sociedad sobre sí misma, en tanto lesiona su conciencia ética y pone a prueba los principios de convivencia y de respeto sobre los cuales se debe cimentar cualquier sociedad que quier a llamar se civilizada y democrática.

Mapiripán, Machuca, El Salado, el Alto Naya, Trujillo, por mencionar sólo algunos de los nombres que evocan la barbarie de la masacre, irrumpen como lugares de horror en los noticieros y en las páginas de la prensa. De pronto “aparece” el nombre de un lugar desconocido que se hace visible, que existe para los otros y para la sociedad gracias a la muerte. Estos nombres-lugares, sin embargo, quedan registrados en expedientes y con el tiempo se convierten en lugares remotos perdidos entre las páginas de los periódicos y de las revistas, y casi siempre, y con contadas excepciones, se refieren a casos sin justicia, archivados, refundidos, inconclusos.

Las masacres, al igual que otras modalidades de la violencia política, han sido objeto de análisis y de trabajo investigativo en nuestro país, especialmente en el ámbito político desde donde se intenta dar cuenta de su uso como estrategia de guerra, de los actores que las provocan, de los intereses que persiguen, de los costos políticos y de los daños materiales que entrañan y de las vidas humanas que sacrifican. Es decir, la masacre vista desde “la primacía de lo político y lo estratégico” (Semelin, 2004:56).

En este trabajo, el acercamiento a la masacre de Bojayá y al contexto de violencia en que se inscribe, se inicia con una preocupación por sus víctimas, por los daños generados en sus vidas presentes y futuras; por un encargo de acompañar a partir de los recursos profesionales a la comunidad, con el fin de propiciar escenarios que permitan entender y reconstruir lo dañado¹. Es decir, se plantea como un abordaje de investigación-acompañamiento psicosocial, que implica desde la perspectiva investigativa, por un lado, identificar los contextos sociopolíticos y económicos que si bien no explican la violencia política en la región, por lo menos permiten comprender los procesos socioculturales que dan sentido a las dinámicas y relaciones que en el plano individual, familiar

¹ El trabajo psicosocial se realiza entonces con personas *víctimas* de la guerra; subrayamos este aspecto porque este “estatus” define un horizonte metodológico y ético. Las víctimas, aquellos seres humanos a quienes se les arrebató la posibilidad de contar con las certezas y certidumbres mínimas que emergen de cierto ordenamiento institucional y social, a quienes los fantasmas se les aparecen de verdad en la forma de hombres armados, no son por lo tanto “un paciente”, “un doliente”, “un cliente”, con quienes nos podemos relacionar desde la distancia y la indolencia, desde la objetividad y la asepsia. Las víctimas nos interpelan, nos revelan los quiebres éticos de la sociedad de la que hacemos parte, nos reclaman solidaridad y nos demandan “agencia”; nos despojan de seguridades y de confianzas y nos ponen de presente la terrible vulnerabilidad de nuestras vidas, es decir, nos señalan nuestra situación de potenciales víctimas.

y colectivo se establecen en este lugar.

El acompañamiento psicosocial, de otra parte, implica explorar y reconocer los daños que ha ocasionado la guerra en esta región. Indudablemente, el terror que generan las acciones violentas, el pánico que significa estar sometidos a situaciones de riesgo extremas, el dolor por la pérdida de familiares y amigos, la rabia por las injusticias de que han sido víctimas y el temor ante las nuevas amenazas, ocasionan abruptas y dramáticas alteraciones que afectan sustancialmente las formas particulares como las personas comprenden y se relacionan consigo mismas, con el entorno, con los vecinos. Afectan, de igual forma, su lectura del pasado y las perspectivas de futuro.

El trabajo en Bojayá se inició en diciembre de 2002, en el marco de una consultoría para la Red de Solidaridad Social, cuyo objetivo era el acompañamiento psicosocial a esta comunidad afectada por la violencia². El desarrollo de este proceso, según los términos de referencia, estaba previsto para cuatro meses e incluía además, un trabajo en Bahía Cupica y en Napipí³. Los términos del contrato y, por tanto, las condiciones del financiador —en particular en lo que se refiere al desarrollo de acciones tendientes a legitimar obras y procesos que atentan contra la autonomía de las comunidades y que incluso acentúan las difíciles condiciones de vida—, constituyeron enormes contradicciones y dificultades que generaron al mismo tiempo una serie de cuestionamientos frente a la posibilidad de los procesos de reconstrucción y fortalecimiento del tejido social, en contextos en donde además de la violencia, la institucionalidad del Estado es tan precaria y se orienta hacia la obtención de legitimidad y a impedir cuestionamientos de organismos de control tanto internos como externos.

Una vez culminada la consultoría, era indudable la necesidad de continuar el trabajo de cercanía y de profundización que nos permitiera, por un lado, un reconocimiento cabal de la comunidad y por otra, un reconocimiento del equipo de trabajo por parte de ella. De esta forma, y con el propósito de ampliar nuestro conocimiento y compromiso, acudimos a diversos agentes financiadores, quienes en su mayoría, estimaban que en periodos cortos era posible hacer

2 Proyecto de Atención Psicosocial a población de dos municipios afectados por la violencia sociopolítica en Colombia. Red de Solidaridad Social – Universidad Nacional de Colombia. Diciembre 2002 – septiembre de 2003.

3 Bahía Cupica es un corregimiento del municipio de Bahía Solano, Chocó, en la Costa Pacífica. Napipí es corregimiento del municipio de Bojayá, en el Medio Atrato.

diagnósticos, capacitaciones y fortalecimientos comunitarios. No obstante, gracias a la sumatoria de una serie de apoyos fue posible ir construyendo una especie de permanencia y de regularidad en la zona, que nos permitió formular junto con la comunidad las preocupaciones y reflexiones que sólo con el tiempo fueron surgiendo.

El apoyo de Colciencias, a partir de febrero de 2004, se constituyó entonces en una valiosa oportunidad para poder dar trámite —sin las presiones de la “investigación por términos de referencia”— a un proceso de acompañamiento que respondiera, tanto a la demanda de continuidad en el apoyo a dinámicas y espacios generados con diversos grupos comunitarios (mujeres, jóvenes, niños, espacios interinstitucionales, etc.), como a las preguntas de orden académico que fue y sigue suscitando el trabajo.

Este imperativo de garantizar procesos de acompañamiento, junto con la sistematización y el análisis de los mismos, planteó la poca pertinencia, en estos casos, de concebir la investigación al margen o por fuera de las demandas y necesidades que le formula la comunidad a los profesionales. Los procesos de acompañamiento —entendidos como espacios para el trabajo individual y colectivo—, tales como: reconstrucción de historias, elaboración de escenarios posibles, así como las múltiples dinámicas de trabajo (elaboración de murales, expresiones comunicativas, discusión de reivindicaciones colectivas, entre otras) constituyeron la matriz pedagógica del proyecto. Por lo tanto, “devolver los resultados de la investigación” no se tradujo la entrega de “un documento”, sino en un continuo de posibilidades de autorreflexión, de construcción de lazos y de apropiación crítica de saberes acerca de ellos mismos. Al mismo tiempo, aportó el “material” sobre el cual fue posible construir conocimiento.

Las reflexiones que se consignan en este informe, se elaboraron con base en una observación activa llevada a cabo durante más de dos años y registrada en diarios de campo, en la realización de más de 30 entrevistas debidamente grabadas y transcritas, en el desarrollo de aproximadamente 34 talleres, en las conversaciones cotidianas que se suscitaron durante nuestra permanencia en el pueblo —cuatro meses—, en la participación en eventos rituales, de celebración y conmemoración, en la llamadas “audiencias públicas”, además de la

asistencia a numerosas actividades interinstitucionales sobre el tema⁴.

El informe también recoge discusiones y reflexiones del equipo de trabajo acerca de las tensiones, miedos, confrontaciones, dilemas éticos, y los innumerables cuestionamientos que surgen frente al papel de los profesionales, de las universidades y de la investigación en la construcción de escenarios que permitan enfrentar y confrontar la guerra en nuestro país. Por otro lado, este documento se acompaña de dos videos: “El renacimiento” y “Bojayá: memoria y río”, los cuales, con una activa participación de la comunidad, cuentan en su propio lenguaje el proceso de trabajo. Asimismo, se acompaña de una exposición de fotografías y testimonios, la cual recorrerá diversos lugares del país para finalmente retomar a la comunidad de Bellavista como un “documento” testimonial.

El presente texto se encuentra organizado en cuatro capítulos. El primero, titulado “El proceso de investigación y acompañamiento: enfoque y metodología”, expone los antecedentes, el desarrollo y los criterios teóricos y metodológicos que orientaron el proyecto. El segundo capítulo, denominado “El contexto y los acontecimientos”, presenta un análisis de las dinámicas del conflicto en la región, identificando los factores históricos y coyunturales que lo animan; de igual manera se hace una descripción detallada de los acontecimientos del 2 de mayo de 2002 y de las acciones institucionales que se desplegaron a raíz del mismo. El tercer capítulo, “Sentido, significado e impactos de la masacre”, describe las interpretaciones y significados que las personas, las familias y el colectivo construyen alrededor de la masacre y de la violencia, así como los impactos que ésta ha generado. Finalmente en el cuarto capítulo, “Los mecanismos de afrontamiento: la supervivencia y la búsqueda del sentido”, se analizan las diversas estrategias que la comunidad y las instituciones han realizado para hacer frente a los daños y fracturas ocasionadas por la guerra, destacando las tensiones y contradicciones que se expresan en este

4 El presente documento contiene apartes y reflexiones planteadas en el marco de los siguientes proyectos: Proyecto de Atención Psicosocial a población de dos municipios afectados por la violencia sociopolítica en Colombia. Red de Solidaridad Social – Universidad Nacional de Colombia. Diciembre 2002 – septiembre de 2003; Proyecto Fortalecimiento de las capacidades locales de las organizaciones sociales en Bellavista, Bojayá. Consejería en Proyectos- ACNUR-Universidad Nacional. Octubre 2003- enero de 2004; Proyecto Evaluación de los procesos de retorno conducidos por el Estado colombiano. Instituto Latinoamericano de Estudios Legales Alternativos, ILSA – Universidad Nacional. Diciembre 2004 – Junio 2005.

proceso, así como las posibilidades de reconstrucción y de transformación a partir de las mismas. El documento cierra con la presentación de una serie de consideraciones que recogen las diferentes reflexiones planteadas a lo largo del texto.

Finalmente, queremos reconocer el valioso apoyo humano y profesional que durante el proceso de acompañamiento e investigación en la zona, nos brindaron todas y cada una de las personas de la comunidad, de las organizaciones comunitarias y de las instituciones locales, nacionales e internacionales. Un especial agradecimiento a las mujeres, hombres, jóvenes, niños niñas y ancianos de Pueblo Nuevo y Bellaluz, quienes siempre estuvieron dispuestos a acogernos y a acompañarnos; al equipo misionero por su generosa hospitalidad; al Comité Dos de Mayo y al Subcomité en Quibdó por abrirnos sus puertas para el acercamiento; al Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia, a la Organización Indígena Embera Wuounaan, Orewa, y a sus juntas directivas, por permitir espacios para el intercambio; a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, y a Project Counselling Service, PCS, por apoyar el acompañamiento; y a la Diócesis de Quibdó por su solidaridad y disposición al diálogo.

I. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO:

ENFOQUE Y METODOLOGÍA

“Los procesos son como una fiesta a la que hemos sido invitados pero llegamos tarde. Al entrar, nos encontramos con que las personas mantienen animadas conversaciones sobre toda una variedad de temas. Nos acercamos con una copa de vino en la mano, y empezamos a escuchar las conversaciones. Muy pronto comenzamos a participar en ellas. Antes de concluir la velada, ya estamos apasionadamente envueltos en algunas de las conversaciones; sentimos que hay algo que debemos expresar, que hay algo que debemos decir, que no podemos dejar sin cuestionar lo que alguien ha dicho, pero se hace tarde y tenemos que partir. Y nos vamos, aunque la fiesta sigue y las conversaciones también”.

Kenneth Burke¹

En las siguientes líneas se exponen brevemente los aspectos de orden teórico y metodológico que caracterizan el proceso de acompañamiento psicosocial realizado por el equipo de trabajo en la población de Bellavista, en el departamento del Chocó.

Los relatos se refieren a las bitácoras de viaje, es decir, a la manera como se reconoce el contexto de llegada, a cómo se definen el comienzo y los derroteros, a la metodología que implica la composición de la danza en la que participamos para sintonizarnos con el proceso; a cómo se entrecruzaron los caminos para construir los ritmos que asumió el trabajo en los diversos momentos que se consideraron centrales.

Este texto recoge las voces de mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes, ancianos, miembros de organizaciones y funcionarios institucionales que circularon durante el tiempo que requirió el trabajo. Intenta narrar el proceso de construcción de conocimiento, es decir, de cómo se fue concertando el acompa-

¹ Citado por John Shotter en “El lenguaje y la construcción del sí mismo”, en Marcelo Pakman, (comp.), *La construcción de la experiencia humana*, vol. I y II, 1997, p. 218.

ñamiento con los participantes, de cuáles fueron los impactos psicosociales de la violencia y cuáles los sentidos y significados de éstos en sus propias vidas.

También intentamos dar cuenta del resultado final, de la aleación de pensamientos, saberes, razones y emociones, los cuales están siempre presentes en un proceso de investigación y de acompañamiento de una manera compleja y contradictoria.

1. Los referentes y el enfoque de trabajo

El acompañamiento psicosocial supone que los daños y las nuevas dinámicas provocadas por la guerra se articulan a los procesos históricos de configuración particular de la comunidad —en este caso caracterizados por la exclusión, la discriminación y la pobreza—, a las condiciones de vida que marcan el presente (un presente de amenazas, hostigamientos, pobreza, desocupación) y, de manera especial, a los aspectos culturales que dotan a la comunidad de formas particulares para leer, entender, explicar y actuar frente a los hechos.

Las situaciones vinculadas a la violencia política, articuladas con las dinámicas mencionadas, provocan sufrimiento y malestar emocional, por lo que el acompañamiento psicosocial debe aportar mecanismos que los disminuyan a partir de la identificación y el despliegue de recursos (apoyos) individuales y colectivos, internos y externos. Si partimos de que la guerra provoca daños y sufrimientos, es necesario entonces tomar distancia de los enfoques que ubican el problema en los individuos y que por lo tanto asimilan daños y sufrimientos a “enfermedad mental”, a una incapacidad o disfuncionalidad de las personas y de sus familias. Asumimos con Martín Baró (1990), que un enfoque que reconoce las raíces histórico-sociales en las cuales se desarrollan la guerra y sus secuelas, no puede patologizar a sus víctimas, ni medicalizar su sufrimiento. Se trata más bien de ubicar, de entender, junto con las víctimas, aquellas dinámicas que atentan, amenazan e impiden que las personas (individual y colectivamente) puedan vivir el tipo de vida que quieren vivir, que pierdan la posibilidad de conducir sus vidas y de incidir sobre el entorno en las que ellas transcurren. De esta manera, debe entenderse la forma como los eventos de violación sistemática de los derechos humanos menoscaban su dignidad, deterioran los soportes sociales y espirituales y, en consecuencia, colocan a las personas y a sus comunidades en condiciones de extrema desprotección y vulnerabilidad.

Es necesario destacar que los acontecimientos violentos ocurridos en Bojayá, generan daños no sólo al nivel individual, sino también al nivel colectivo; estos últimos no se expresan por la sumatoria de los impactos individuales, sino por la capacidad de los eventos violentos para desestructurar las redes y vínculos sociales, para poner en cuestión los aprendizajes, sentidos y significados que constituyen el *nos*. La masacre en particular, por su capacidad devastadora, provoca crisis en los referentes de sentido y de protección de la comunidad y los despoja de los recursos comúnmente utilizados para explicar y afrontar los acontecimientos.

La masacre y los eventos de violencia, anteriores y posteriores a ella, tienen la capacidad de desestructurar el mundo dado por supuesto, generando enormes y diversas rupturas, las cuales se asilan a las enunciadas por Janoff-Bulman (1992) citado en Pérez Sales (2000:33):

Ruptura en las creencias respecto a uno mismo:

- Ruptura de la creencia de seguridad o creencia en la invulnerabilidad de uno mismo. Ruptura en la creencia de plenitud. Convencimiento de que en el futuro habrá un bienestar personal derivado de poseer un sistema de valores, un proyecto vital, realizar con satisfacción las pequeñas rutinas cotidianas.

Ruptura en las creencias respecto a los demás:

- Ruptura de la confianza en los demás o bondad: la creencia en la bondad de las personas y su tendencia al altruismo y a la ayuda.
- Ruptura de la comunicación o intimidad.

Ruptura en las creencias respecto al mundo: predictibilidad y propósito

- Ruptura de la creencia de predictibilidad, de la creencia en que vivimos en un mundo ordenado y predecible, donde los hechos son controlables y donde hay unas reglas que adecuadamente utilizadas llevan a las consecuencias anticipadas.

- Ruptura en la creencia de propósito. La creencia de que la vida tiene un significado o un fin determinado. La capacidad de control sobre la propia vida.

En consecuencia, para identificar, comprender y ayudar a mitigar los impactos que genera la violencia política, es necesario reconocer que las interpretaciones, los significados y las acciones individuales y colectivas, generadas por y para enfrentar la violencia, se construyen en densas y complejas tramas y redes que dan lugar a particulares maneras de estar y percibir el mundo, por lo que se asume que el daño (por qué se sufre y cómo se sufre, qué se pierde) y la manera de afrontarlo (qué se hace, para qué, cómo y con quién se hace) no se pueden establecer a priori, medir según estándares universales o deducir por referencia a otro acontecimiento en otro lugar, o a otras personas. Las consecuencias de un evento de violencia no dan lugar automáticamente a procesos de traumatización o a enfermedades mentales, como en ocasiones se supone. Las respuestas, así como los daños y transformaciones en las vidas de las personas y de las comunidades, no tienen sólo que ver con las características del hecho violento, sino con las de quien(es) lo experimenta(n), con su historia e incluso con el trámite personal y colectivo, interno y externo, que se desencadena frente al hecho violento.

De esta manera, lo psicosocial, aquello que alude al bienestar emocional de individuos y comunidades, a su salud mental, "... está íntimamente ligado a la cultura porque la forma en que las personas expresan, experimentan y dan significado a sus aflicciones, está relacionada con contextos culturales y sociales específicos. Las perturbaciones psicológicas y los traumas tienen una dimensión social y cultural. La manera en que las personas interpretan sus aflicciones, está indudablemente conectada con las creencias acerca de los orígenes de dichas aflicciones. Estas creencias son básicas para crear estrategias terapéuticas apropiadas para aliviarlas y eliminarlas. Debido a que las diferentes culturas tienen diferentes creencias acerca de la causalidad y el tratamiento de las enfermedades, habrá diferencias en la forma de conceptualizar la salud y la salud mental, como también en la manera de tratarlas" (Honwana 2001:103-118).

A ello se agrega la necesidad de advertir que tampoco es posible homogeneizar el daño, el sufrimiento y la respuesta para todos los miembros de la

comunidad (no todos y todas los sufren y enfrentan de la misma manera), pues hombres y mujeres adultos, jóvenes, niños y niñas, aunque comparten un mundo de significados —que les permite reconocerse y ser reconocidos como parte de una comunidad—, son seres únicos, con trayectorias y experiencias vitales particulares que los dotan de más o menos recursos y soportes, y que les permiten incorporar de diversas maneras la experiencia en sus vidas.

Desde esta perspectiva, se intenta romper con las dicotomías y separaciones radicales propias del pensamiento cartesiano, que diferencian y hasta contraponen las categorías cuerpo-alma, salud mental-salud física, individuo-colectivo. Decimos esto con la conciencia de que nuestros procesos formativos nos hacen hijos de nuestra época, del pensamiento moderno que “...concibió lo humano dividido en compartimentos estancos” (Najmanovich, 1995:52). Para el caso de esta comunidad étnica afrocolombiana e indígena, “estar bien” significa: “compartir el plátano y el pescao con los vecinos y parientes, compartir dulce de coco, piña, papaya y papa en semana santa, el día de las madres y en navidad, no tener que estar en casa ajena y poderla construir, modificar y desarmar de acuerdo a lo que la naturaleza dispone y al crecimiento de la familia; estar en el propio territorio, poder trabajar duro para no alimentar la pereza y poder enseñar el bien a los hijos, con conseguir las cosas que uno tiene a partir del propio esfuerzo, con estar con la comunidad de uno, no vivir en incomunidad², con poder respetar el lugar de los vivos y los muertos, el lugar de las creencias, del espanto y de los secretos, el lugar para enterrar el ombligo, para enterrar a los muertos, con poder dormir porque los muertos están en paz, con no vivir asustados, ni con tristeza. [En medio de este intercambio de palabras levantan la mano y la voz dos mujeres] Para nosotras estar bien tiene que ver con poder tener el propio espacio para desempeñar sus labores de cocina, tener intimidad, no ver a los hijos mal, ni a los esposos desesperados”³.

Estas narraciones plantean cómo en contextos como los de Bojayá, las categorías “occidentales” para entender y tratar los daños —los cuales generalmente son asimilados a traumas o a enfermedades mentales—, así como los

2 Término utilizado por los participantes en taller realizado en Bellavista, para referirse a la pérdida de comunidad.

3 Sistematización de taller, Bellavista, junio de 2004.

instrumentos para identificarlos y medir los —tales como los test de síntomas, que han sido elaborados desde una perspectiva de corte individualista—⁴, resultan particularmente inútiles, por las dicotomías y contraposiciones que los caracterizan. Si bien estas separaciones no operan para ninguna persona o colectivo humano, para las comunidades afrocolombianas, entre otras, es mucho más evidente esta profunda unidad entre cuerpo y espíritu, entre individuo y colectivo. Estamos por tanto frente de una comunidad “no occidental” para la cual “...El yo no es entendido como un ser aislado de la colectividad. El control y la autonomía sobre el propio cuerpo-mente y la salud, trascienden los límites del individuo... Aquí no solamente se le da un gran énfasis al individuo mismo como tal, sino también al amplio grupo colectivo que puede interferir y afectar la salud y el bienestar de la persona de una forma que ésta no puede controlar” (Honwana, 2001:103-118).

Nos enfrentamos, entonces, con un mundo desconocido y en ocasiones incomprensible para nuestra lógica; reconocemos una gran ignorancia y distancia frente a estos *otros* (los bojayaceños). Asumimos que nuestro rol de “agentes/acompañantes” del trabajo psicosocial no va más allá de intentar generar espacios para que las personas, colectiva e individualmente, puedan relacionar acontecimientos, puedan construir y reconstruir sentidos acerca de lo sucedido en sus vidas, puedan expresar (a su manera y con sus lenguajes) las cosas que quieren y necesitan compartir, puedan sentir una escucha respetuosa y un dato o una pregunta que les ayude a comprender, a conectar o a contemplar escenarios posibles. Se trata de posibilitar procesos para que se produzca “...un acto reflexivo a través del cual esos grupos humanos se ven a sí mismos, definen un campo de intereses, formalizan sus preocupaciones y sus prácticas, sus lengua-

4 “Este enfoque se centra en que los comportamientos humanos producen desórdenes psicológicos, y se preocupa por los comportamientos por fuera del rango del comportamiento humano normal. En la mayoría de los casos un experto evalúa la conducta de una persona para identificar si está mostrando un comportamiento fuera de lo normal o anormal. En muchos casos el comportamiento anormal es observado y luego analizado. Se realiza un diagnóstico de desórdenes psicológicos, para saber si el comportamiento encaja con una serie de descriptores preconcebidos. Comúnmente se utilizan dos sistemas de clasificación para determinar el diagnóstico correcto: el *Manual de Diagnóstico y Estadísticas (MDS)*, por su acrónimo en inglés), *MDS-IV*, y la *Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE)*”. Loughry Maryanne, “Los paradigmas psicológicos dominantes en la literatura del refugiado y las intervenciones humanitarias”, en *La experiencia del refugiado. Manual de entrenamiento psicosocial*, Centro de Estudios sobre Refugiados, Universidad de Oxford, Queen Margaret University Collage, vol. 1, 2001, pp. 140-144.

jes y sus estrategias, trazan un borde o una frontera alrededor de sí mismos, se proponen objetivos, distribuyen funciones, se fundan, en fin, a sí mismos, diferenciándose de otros. De más está decir, que motivaciones económicas, políticas, sociales, de control de territorios reales o simbólicos pueden descubrirse con facilidad en el empeño por trazar esas fronteras...” (Pakman, 1995:297).

“Si se considera que el bienestar psicosocial es la habilidad para desplegar recursos efectivamente y así dar forma a su propio mundo, entonces el principal propósito de la intervención psicosocial deberá ser brindar apoyo a este proceso de compromiso. Fundamentalmente, es una tarea de facilitación, por lo tanto, también se puede incluir la disposición de recursos” (Strang y Ager, 2003). Como agentes externos y en cierta medida familiarizados con el mundo de los derechos y de las instituciones, intentamos aportar elementos que permitan ubicar su historia particular en un contexto más amplio y hacer visible para otros su riqueza y su tragedia. Este proceso de visibilización “hacia fuera” surge de la convicción de que a la sociedad colombiana le compete una responsabilidad de presión, de acción y compromiso con la transformación de las diversas condiciones que hacen posible que en este país sucedan estas situaciones. En este sentido y como se plantea en el texto, la reparación y la atención integral a las víctimas de la violencia es un asunto que les compete no sólo a ellas, sino a la sociedad colombiana que, al asumirlas, se reconstruye y se hace viable a sí misma.

El reconocimiento de la gravedad de los hechos de Bojayá tiene la peculiaridad de “deshacer” el mundo dado, supuesto (creencias, referentes de protección) por sus habitantes; tiene la capacidad de cuestionar profundamente nuestro rol social como académicos, como ciudadanos de este país, y debería tener también la capacidad de deshacer este “orden” atroz que permite que una tragedia oculte otra.

2. Bitácora de viaje

Durante el primer semestre de 2003, la Universidad Nacional de Colombia emprendió un viaje al departamento del Chocó con la convicción de poder brindar, a partir de la experiencia acumulada en el tema del desplazamiento forzado y del conflicto armado, aportes para la construcción de alternativas y espacios de atención psicosocial para las comunidades y agentes institucionales, habitantes y acompañantes en esta zona del país.

En Quibdó, los primeros olores de la tierra húmeda y cálida, el bullicio de la gente en el puerto y en las calles abarrotadas de puestos de pescado, de frutas y verduras de intenso colorido y nombres extraños fueron haciendo parte integral de este viaje y de la historia que se plasma en este texto.

Para ese entonces Bojayá —lugar donde se desarrollaría la propuesta— era ya un nombre sonoro en el mapa de la confrontación armada nacional. A través de los medios de comunicación se conoció de manera confusa el suceso trágico ocurrido en la iglesia de Bellavista en el mes de mayo de 2002. Esta realidad conmocionó por lo que produjo, pero sobre todo por la inexplicable impunidad en medio de la cual se concretaron las acciones violentas, a pesar de los varios llamados que se hicieron previamente a diferentes instancias solicitando protección para la comunidad.

El viaje desde Quibdó, río Atrato abajo hacia Bojayá, estuvo tan cargado de preguntas como de vueltas y brazos el río. A medida que la embarcación avanzaba, con el paso de las horas nos encontramos, tanto a derecha como a izquierda, con largos caseríos de madera sobre la ribera en los que mujeres y hombres, grandes y chicos, pescaban, lavaban, contemplaban, danzaban, cocinaban, se bañaban, conversaban y jugaban en lo que denominaban como “su río”. Era difícil pensar que luego de ese trágico 2 de mayo esos y otros lugares: San Martín, Puerto Conto, Buchadó, San Miguel, Murri, Tagachí, El Tigre, La Loma, Vigía del Fuerte quedarán desolados porque los cerca de 4.284 habitantes debieron salir hacia Quibdó⁵ buscando seguridad para sus vidas⁶.

El miedo fue un permanente compañero de viaje. Paradójicamente, parte de nuestro trabajo consistía en fortalecer a la comunidad, en construir estrategias para valorar y afrontar el riesgo, pero la experiencia de estar pisando los terrenos del conflicto (ya no solamente de leer o de escribir sobre él); de estar atravesando los dominios de los diferentes actores armados y la posibilidad de ser retenidos o atacados, nos situaba como objetivos de nuestras propias estrategias terapéuticas. El apoyo brindado por la Diócesis de Quibdó y por Cocomacia sin embargo nos generó confianza y aprendimos que es impensable transitar por estas tierras sin su aprobación y respaldo, si de proteger la vida y de respetar los procesos comunitarios se trata.

5 RUT, Boletín especial Bojayá, julio de 2002.

6 Constanza Millán, notas del diario de campo, enero de 2003.

3. El comienzo y los derroteros

Al cabo del recorrido, el punto de llegada fue Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, donde, como su nombre lo dice, el cauce del Atrato es más ancho y despejado; desde allí se alcanzan a divisar algunas estribaciones de la serranía del Baudó y al frente, en diagonal, se encuentra el municipio de Vigía del Fuerte (en territorio antioqueño).

Recién llegados al pueblo, la desconfianza era el lente a través del cual se percibían todas nuestras acciones y propósitos como institución y como Universidad; las primeras conversaciones que pudimos intercambiar con algunos integrantes del equipo misionero, con las hermanas agustinas, con el personal del centro de salud y con los pobladores expresaban frustración frente a los procesos de intervención institucional vividos:

“Después de lo ocurrido estamos peor, las ayudas no llegan y eso que todo el mundo supo lo que nos pasó [...]. El Gobierno nos dijo que iba a invertir muchos millones en proyectos, en trabajo, en casas nuevas, en el colegio, en la escuela y no vemos que eso se cumpla tampoco, muchos intentan ayudar nos desde que estuvimos en Quibdó, pero las ayudas de unos y otros se tropiezan entre sí, se pisan, compiten y al final esto se volvió una calentura y un desorden”. Mujer, Bellavista, 2003.

Aquí, en medio de la escucha permanente de lo que cada persona enunciaba sobre su vida, del conocimiento de su región, de sus reclamos, de su situación, fue donde pudo ubicarse lo que se denominaría en el proceso como el inicio. Sin embargo, este no puede definirse como un único instante; fue el encuentro y la combinación de situaciones y de historias que previamente se conjugaron entre quienes querían hacer parte del mismo. Por un lado, estábamos quienes llegábamos de otros territorios con historias previas que nos permitían construir deseos, intereses y orientar nuestras vidas hacia el lugar de destino -agentes externos-, y por el otro, estaban quienes nos recibieron, inmersos por decenios en una o en varias historias que permitían construir una identidad particular, una pertenencia a un colectivo, a una etnia y a un territorio-comunidad.

El origen del proceso resultó siendo entonces un continuo de historias previas, de situaciones y emociones que evocaban a otros y, que al unirse,

da ban for ma de manera particular al comienzo y a los propósitos que guiaron un proceso social.

En este sentido, al llegar como agentes externos a Bojayá, los propósitos y los objetivos, se construyeron a partir de una negociación, de un diálogo, que implicó poner a circular nuestras voces, nuestros intereses y saberes y recoger las distintas voces de la comunidad, las pérdidas, las que han sido protagónicas y las que andan por ahí, desparramadas; así como los distintos saberes y los diversos prejuicios que evocan la presencia de un agente externo en una comunidad.

Fue necesario romper la desconfianza inicial de la población con todo aquél que representa la institucionalidad, en una región históricamente “manoseada” por la ejecución de proyectos inconclusos y carentes de procesos participativos que incluyan a quienes en estos esquemas son llamados como *población objeto de intervención*. Luego de la masacre, han llegado a Bojayá toda clase de instituciones, algunas de ellas presionadas por protagonismos a ultranza o por lógicas que no reconocen las necesidades y demandas propias de la población. El abordaje utilizado en este tipo de intervenciones también ha generado impactos psicosociales sobre la población, en particular porque han dado lugar a procesos de revictimización o victimización secundaria⁷, propiciados tanto por nuevos maltratos y abusos, como por la exposición pública, permanente y recurrente que debe hacer la población de su tragedia y de su dolor. A continuación se presentan apartes de algunos de los relatos de la población durante la negociación que construimos con ellos:

“ Hay mucha tristeza en el pueblo, es necesario trabajar juntos para reconstruir la vida que tenemos. Ahora hay mucha soledad, el pueblo se siente como vacío, y qué me dice usted de la desunión, antes no era así . . . pero desde que llegaron las instituciones nosotros no sabemos para dónde coger”. Hombre, Bellavista, 2003.

⁷ La victimización secundaria o revictimización se genera por acciones, omisiones y acontecimientos posteriores al hecho violento, los cuales acentúan los sentimientos de vulnerabilidad, injusticia y desprotección de las víctimas, al ser éstas nuevamente maltratadas, ignoradas o estigmatizadas.

“ Yo les digo, si ustedes quieren trabajar aquí, les cuento que la gente no cree en esos procesos de las instituciones, es que ya nos han pasado varias cosas, vienen es a averiguar qué nos pasa, hacen unas actividades y con eso dicen que ejecutaron un super proyecto, o si no, vienen a prometernos cosas que nunca van a cumplir”. Mujer, Bellavista, 2003.

“ Hay gente que viene ya con sus proyectos escritos y dicen que los construyeron con nosotros; eso no es así, uno no entiende lo que dicen esos documentos. Hacen una reunión para darnos a conocer lo que pretenden y por eso dicen que es un proyecto participativo”. Líder de Cocomacia, 2003.

“ Aquí muchos vienen a decir que van a ejecutar un proyecto de atención psicosocial porque aquí todo el mundo está traumatizado, y pues lo que uno ve es que no todo el mundo está traumatizado, pues ¿quién no se va a sentir mal por lo que pasó? Hay psicólogos que vienen a ver dónde está la enfermedad, incluso a for mular remedios, ¿será que es una enfermedad sentir miedo, o que los niños se orinen cuando están en medio de un combate? Así la gente que viene no es la más preparada, creen que por tener un psicólogo o un trabajador social, ya están trabajando lo psicosocial y eso no es así necesariamente, o a veces encuentra uno hasta administradores de empresas o comunicadores sociales haciendo un taller sobre el duelo con la gente, y pues para lo que ha pasado aquí, ese tipo de intervenciones han maltratado mucho a la gente”. Miembro Diócesis de Quibdó.

El diálogo, el encuentro y el reconocimiento mutuo entre los que deseaban involucrarse en el proceso —profesionales de la Universidad Nacional de Colombia y habitantes de Bellavista—, organizaciones comunitarias, instituciones, Iglesia, grupos de jóvenes, mujeres, niños y niñas, permitieron definir como der rotero:

El desarrollo de procesos de acompañamiento psicosocial con la población que ha sido víctima directa e indirecta del conflicto armado, que posibilite disminuir los impactos generados en la salud emocional y en el tejido social.

Para lograr este propósito se plantearon los siguientes objetivos:

- Identificar los impactos generados en el tejido social y en el ámbito emocional de las personas, las familias y las comunidades afectadas por los hechos violentos desencadenados por el conflicto armado.
- Fortalecer a través del trabajo de los profesionales, los recursos que ha construido la comunidad para afrontar la situación de violencia que vive.
- Afianzar el tejido social de apoyo (redes formales e informales) que incentive la capacidad colectiva para emprender acciones que permitan reconstruir los proyectos de vida.
- Brindar herramientas psicosociales a los agentes sociales (funcionarios de instituciones gubernamentales y no gubernamentales) que intervienen en la situación, con el fin de posibilitar reflexiones sobre el impacto que tienen sus intervenciones y redefinir la manera en que desarrollan sus procesos.
- Generar procesos de gestión y coordinación interinstitucional con entidades gubernamentales y no gubernamentales que tienen presencia en la zona.

4. Metodología: la forma de trabajar en el proceso . . . una danza permanente

Lo metodológico, es decir la reflexión acerca de cómo fue el proceso, cómo se participó en él, cómo se construyeron las actividades, tiene que ver con lo que alguien de Bellavista planteó: “eso es como bailar cuando hay una música con la que todos nos emocionamos y estamos sintonizados; si en el baile no participamos todos, y usted pone una música y un ritmo que no conocemos, pues usted resulta bailando solo y nosotros mirándolo sin entender qué es lo que está haciendo. Uno se aburre y ni siquiera le interesa aprender nuevos pasos”⁸.

8 Constanza Millán, notas del diario de campo, febrero de 2003.

El proceso se cumplió, entonces, en la creación permanente de los pasos de una danza; el ritmo y el compás variaron constantemente, el tiempo de ejecución del trabajo no fue el mismo tiempo nuestro, tuvo su propio tiempo, dependió de la música que se escuchaba en la comunidad, la que se logró componer, y la que invitamos a conocer.

4.1. *¿Qué es lo psicosocial?*

Reconstruimos una conversación que tuvo como elemento primordial el ámbito de interés que evoca el término psicosocial:

“Eso es como cuando uno se siente triste, se siente alegre, o se siente traumatizado, o cuando a uno le duele el corazón y se atraganta por dentro”.

“Pero no sólo con la de una persona sino también con la de todos, eso que le pasa a usted también me pasa a mí; por ejemplo, mire lo que pasó aquí en Bellavista: todos nos sentimos muy mal, no pudimos hacer nada para impedirlo, no nos respetaron como población civil, ni las autodefensas, ni la guerrilla, había como un sentimiento común de miedo, impotencia, injusticia, eso no era sólo de uno, sino de todos”.

Esto quiere decir que las personas viven con otros con quienes comparten situaciones, espacios e intercambian el sentido, el significado de lo que ocurre en las diversas situaciones que participan. Lo psicosocial se refiere a cómo se sienten las personas, las familias y la comunidad en las relaciones que establecen y en las que los afectan.

“Para mí fue muy duro salir después de esa calentura del 2 de mayo, y no poder enterrar a mis familiares. Qué me dice usted de los niños y niñas a los que no se les pudo hacer el Gualí”.

“Para mí las pérdidas no estuvieron ahí solamente, también cuando volvimos después del desplazamiento; qué me dice usted cuándo encontramos que ya no teníamos nada de lo que habíamos comprado durante años, se robaron las cosas, nuevamente vuelve uno a sentir ese vacío, no saber por dónde empezar”.

Los significados otorgados a las situaciones son diversos y dependen de la edad, de la historia personal que ha vivido cada uno y también de la cultura, de cómo están acostumbrados a vivir y a expresar el dolor, la alegría y los duelos que experimentan.

“ Pero menos mal nosotros los atrateños somos muy solidarios y así pudimos salir adelante, gracias a la solidaridad de los otros corregimientos y gracias a los familiares que teníamos en Quibdó, y al apoyo de nuestra organización, la Cocomacia. Y qué me dice usted de cómo se han inventado canciones con lo que sucedió, ahí está Domingo, Noel o los alabaos que se ha inventado Moira contando nuestra historia”.

En la cultura también se han construido recursos que permiten enfrentar las situaciones vividas. Por ejemplo, recrear la memoria de lo sucedido para que no quede en el olvido y transmitir lo vivido mediante la enseñanza de los cantos, para evitar la repetición de los hechos de violencia y comprender así la situación actual y la forma de enfrentarla.

Al acercarse a la población afectada por la violencia política con un enfoque psicosocial, se reconoce la estrecha relación que existe entre el campo de lo individual y lo colectivo, de lo subjetivo y lo social, lo político, lo cultural y lo psicológico. Este cruce de dimensiones, permite comprender:

- Que la violencia produce daños en la salud mental⁹ de las víctimas, en tanto las somete a situaciones extremas de riesgo y de amenaza y las deja desprovistas de los mecanismos de protección y de interpretación que permiten el transcurrir de la cotidianidad dentro de los parámetros que se construyen de estabilidad, normalidad, continuidad.
- Que el daño (las pérdidas, rupturas, vejaciones, etc.) es una construcción social (por ende cultural), que su magnitud e importancia dependen del significado y del sentido que los individuos y los colectivos le otorguen.

9 Asumiendo que la salud mental es una construcción social y cultural y que por lo tanto se experimenta según parámetros y marcos comprensivos que permiten la existencia de diversas concepciones acerca de relaciones tales como cuerpo-mente-espíritu, individuo-colectivo, persona-naturaleza, entre otras.

- Que los daños, las pérdidas y las transformaciones son en consecuencia heterogéneos, pues el sentido y la significación que se les otorgan, estarán mediados, no sólo por las características de los eventos violentos, sino por las características de las personas afectadas, sus recursos internos, su género, ciclo vital, etnia.
- Que la violencia política altera drásticamente las relaciones históricamente construidas entre las personas, las familias y las comunidades, en tanto obliga a modificar roles, estatus, lenguajes, formas de transacción, solidaridad y reciprocidad. Y a construir relaciones establecidas a partir del cálculo racional de la protección y la sobrevivencia.

Las conversaciones nos permitieron reafirmar que lo psicosocial en condiciones de conflicto armado tiene que ver con "...entender cómo los hechos de violencia afectan a las personas, teniendo en cuenta que los individuos son seres sociales, es decir [que] viven en relación permanente con otros (familia, comunidad, entorno) en diversos espacios, políticos, económicos y culturales. En este sentido, lo que suceda en sus emociones, en la manera como se perciben a sí mismos y en su bienestar será siempre el resultado de las relaciones que establecen con los otros en diversos espacios, y de la manera como les otorgan un significado particular a las situaciones en las que participan" (Bello, 2001b).

El acompañamiento psicosocial que se desarrolló entonces, involucró a los individuos, a los grupos y al colectivo en general. Buscó develar y comprender las interpretaciones que las personas de Bellavista les han dado a los hechos de violencia que vivieron y que viven, la manera como los afrontan y, en este sentido, el significado que éstos han tenido para sus vidas. El trabajo psicosocial intentó disminuir el sufrimiento vivido por las personas al favorecer espacios que les permitan otorgarle un sentido a lo vivido, prevenir mayores procesos de fragmentación social, fortalecer la comunidad y los grupos a partir de recomponer sus relaciones de confianza, solidaridad y apoyo; potenciar los recursos de que disponen quienes han sido víctimas para reencauzar nuevamente su proyecto de vida y brindar espacios y herramientas que permitan a las personas y a la organización social gestionar y agenciar los recursos a los que tienen derecho, en el marco de las acciones de reparación integral.

En este sentido, el acompañamiento psicosocial propendió, a pesar de las adversidades, a que las personas superaran la victimización, para que pudieran asumirse nuevamente como sujetos valorados, reconocidos y autónomos. Recuperarse emocionalmente no sólo implicó la posibilidad de darle un trámite a los duelos y reelaborar los eventos del pasado (a pesar de la importancia que ello tiene); significó sobre todo la posibilidad de controlar el presente, de ganar nuevamente la capacidad para “poder controlar la propia vida”, lo cual supone, a la vez, superar las situaciones que dan lugar a los sentimientos de indignidad, incertidumbre, exclusión y estigmatización social” (Bello, 2001a).

Trabajamos así con el Consejo Comunitario, las mujeres y la Asociación de Jóvenes de Napipí, mujeres de Pueblo Nuevo, el Comité Dos de Mayo, Cocomacia, jóvenes de Pueblo Nuevo, la Unión y Bellaluz, los niños y niñas de la escuela de Bellavista, los docentes, el equipo misionero y diversos representantes de entidades acompañantes. Con todos ellos y ellas realizamos talleres, conformamos grupos de apoyo, hicimos visitas domiciliarias, conversatorios, jornadas lúdicas, participamos en distintas dinámicas cotidianas, elaboramos diarios de campo, efectuamos reuniones de coordinación institucional, videos, muestras fotográficas, periódicos y murales, con el objeto de darle forma en el proceso a los siguientes componentes:

Componente psicoterapéutico

Este abordaje involucró la creación de espacios que permitieran la elaboración de los hechos a través del encuentro, la verbalización y la escucha de lo sucedido. Propició dinámicas para que las personas a través del diálogo reconstruyeran sus biografías. La escucha facilitó el conocimiento y la comprensión de las maneras particulares (de hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas) de sentir y de vivir el dolor; permitió también identificar lo que cada uno y una señalan como daños y pérdidas y el significado que ellas tienen para sus vidas.

Reconociendo, entonces, la particularidad y también la vivencia individual del sufrimiento y de las formas de enfrentarlo, se diseñaron espacios para reflexionar acerca de cómo la violencia transforma la visión, los lenguajes y por ende la autodefinición de sí mismos: de quién era, quién soy y quién seré. Asimismo, se plantearon interrogantes para indagar por las responsabilidades, “culpas”, fortalezas, recursos, debilidades, atributos y posibilidades que cada cual identificó de sí y para sí.

Para abordar estos aspectos se diseñó una guía con los siguientes interrogantes que orientaron la realización de talleres, entrevistas y actividades lúdicas, entre otros:

- ¿Cuáles son las explicaciones que hombres, mujeres, niños y niñas les dan a los hechos violentos?
- ¿Cuáles son los daños y las transformaciones que la violencia ha ocasionado en cada uno?
- ¿Qué han hecho para afrontar los daños y pérdidas?
- ¿Quiénes y por qué son las víctimas de la violencia?
- ¿Qué sentidos y significados circulan alrededor de las situaciones que generan miedo, desconfianza, incertidumbre? ¿Cómo se relacionan los individuos, las familias y el colectivo a partir de ellos? y ¿Qué potencia y qué limita estas situaciones?
- ¿Cómo se expresan los duelos vividos, cómo se superan? ¿Cómo se ubica cada individuo frente a las pérdidas experimentadas? ¿Cómo se intenta reparar el hecho vivido?

Componente socioterapéutico

Las actividades y procesos realizados desde la perspectiva socioterapéutica, plantearon como objetivos el fortalecimiento del tejido social, de la identidad colectiva y cultural, y la recuperación de la confianza, el apoyo y la solidaridad entre las personas. En este sentido se buscó dinamizar la creación de narrativas colectivas que permitieran a la comunidad afectada crear mecanismos de apoyo y contingencia frente a los eventos violentos, recrear relatos que facilitaran la reconstrucción colectiva de la memoria y potenciaran la organización social.

Desde esta perspectiva, el trabajo comunitario en Bojayá no se limitó a verificar cuáles eran los recursos colectivos —tanto primarios como secundarios— e institucionales que se encontraban presentes en cada caso; buscó más bien, avivar mecanismos que permitieran crear vías de contacto entre cada uno de los miembros de la red social afectada, reeditando así su contexto de opera-

ción al sostener un accionar facilitador de conexiones que estimularan paralelamente grados de independencia y autonomía. De esta manera podemos mencionar la creación de dos escenarios:

Dinamización de narrativas para fortalecer procesos de identidad colectiva: una premisa importante al respecto fue considerar que las experiencias de violencia vividas sólo pueden expresarse, abordarse y compartirse desde un lugar de enunciación legítimo, cuando se abre un espacio en las relaciones interpersonales y en la sociedad para reconocer lo sucedido. Para ello, fue necesario facilitar espacios sociales de carácter simbólico (jornadas lúdicas, encuentros culturales, caminatas colectivas) que permitieran en primera instancia, exteriorizar los hechos y generar el encuentro entre las personas afectadas, y entre éstas y las otras, para que pudieran reconstruir sus propias historias, construir nuevas historias con los otros y vincularse a redes sociales más amplias. Se trató no solamente de resignificar y de reorientar desde los afectados su propio proyecto vital, sino también de construir pactos sociales, nuevas narrativas alrededor de la situación, de tal forma que las víctimas lograran un lugar, un sentido y un discurso afirmativo y reivindicativo de la trama social a la que pertenecen.

Estos espacios se orientaron a reconstruir relatos que articularan el evento vivido con una memoria colectiva, de tal forma que en lugar de conducir a la inmovilidad y al aislamiento procurara una percepción de capacidad y de voluntad propias, susceptibles de dar lugar a una postura agenciadora. Una memoria que reconstruye el pasado a partir de los intereses y los marcos de referencia presentes en el grupo y de las formas particulares en las que la población integra a su identidad la historia colectiva que experimenta a través de ritos, mitos, cantos y danzas.

Este acompañamiento se articuló a la constitución de espacios colectivos para la generación de lazos de confianza, solidaridad y reivindicación de las personas afectadas por el evento, y su correlación con las redes de apoyo informales —vecinos, familiares, amigos— así como con las redes formales —instituciones gubernamentales y no gubernamentales— incluidas en la atención.

Fortalecimiento de la organización social: comprender la dinámica organizativa, sus intereses y motivaciones fue un factor que generó constantes interrogantes en el equipo. La comunidad de Bellavista era definida inicialmente por los diferentes agentes institucionales como una “población sin tradición organizativa”, puesto que no asistía a reuniones, no formulaba proyectos, no estaba integrada activamente al proceso que llevaba a cabo Cocomacia en la región del Medio Atrato. El equipo, en este contexto, se planteó inquietudes, interactuó con la dinámica cotidiana de la población, se dejó movilizar por los retos que implicaba entender otras lógicas organizativas de la comunidad.

De esta manera entendimos que, por ejemplo, las prácticas rituales son una clara evidencia de la capacidad de sobrevivencia de la memoria histórica y de organización del pueblo negro; las principales celebraciones, rituales mortuorios, el bautismo y las fiestas patronales (la fiesta de la Virgen del Carmen, la del santo Ecce Homo, la Semana Santa) son hechos de gran importancia para la continuidad de las tradiciones y para la expresión de la comunidad; son espacios y ocasiones para invocar y ofrendar a los santos y a los muertos y por lo mismo son preparadas con especial atención. Las comunidades celebran diferenciadamente estos hechos y para ello han establecido dinámicas organizativas responsables de velar por el buen desarrollo de las celebraciones: las “Juntas de las fiestas”, los comités, los “devotos”, “encargados” o “fiesteros”, los músicos. Hasta en las circunstancias en las que aparentemente no hay tiempo para organizar, todo tiene una lógica intrínseca manejada por la comunidad que la comprende y asume (por ejemplo en un velorio, el jefe de mortuoria, los rezanderos, las cantaoras, todos se articulan de manera efectiva en un solo conjunto). Mujeres, hombres y niños saben qué rol desempeñan en esas dinámicas específicas, tanto que, a pesar de la evangelización, las prácticas no son orientadas por la Iglesia sino por la propia comunidad; es ella la que determina de qué manera se integra la institucionalidad religiosa.

Además de estos espacios, se presentan dinámicas organizativas en torno a aspectos puntuales, alguna emergencia local o acción solidaria. “Por lo menos aquí hubo una casa que fue un signo porque allí existía el hogar infantil y ese día se hizo un incendio terrible. En cuestión de segundos llegó la gente con su balde y se organizaron. Así todo el mundo pasaba el balde en una fila que era por donde pasaba el balde con el agua y la otra por donde pasaba el balde

solo y lo apagaron, todos llorando porque por aquí prende una casa y se quema todo el pueblo”¹⁰. Para el cuidado de los enfermos, cuando se acompaña de manera permanente a la persona que va a morir; o para hacer algún trabajo a través de variadas maneras de colaboración (mano cambiada, trabajo asociativo o familiar).

En esas situaciones la organización se manifiesta a través de diversas dinámicas articuladoras que emergen en lo cotidiano. Sin embargo, paralelo a lo anterior y de manera más reciente se adelantó el proceso de organización étnico-territorial de las comunidades campesinas del Medio Atrato. Una estructura más formal que trabaja en la reivindicación de derechos sobre el territorio, el logro de mejores condiciones de vida y el reconocimiento político de su identidad. Aunque jurídicamente Bellavista no es el epicentro de la asociación, es decir, no cuenta con un Consejo Comunitario¹¹, no puede deslindarse ese proceso de la dinámica local. Por el contrario, el suceso trágico del 2 de mayo obliga a mirar los numerosos eventos violentos en toda la región y por lo tanto las dinámicas organizativas que tratan de afrontarlos.

Las preguntas que orientaron y dinamizaron la reflexión en este componente fueron las siguientes:

- ¿Cómo se incorporan a la memoria colectiva los eventos violentos vividos? Qué narraciones existen al respecto, cómo circulan éstas en la tradición cultural de la comunidad (cantos, música, danza, pintura). Cómo definen los hechos, las causas, las consecuencias. Qué dinámicas, versiones y contradicciones se generan entre las diferentes narraciones (las de la comunidad y las establecidas por agentes externos) acerca de la interpretación de los hechos.
- ¿Cómo se autodefine la comunidad a partir de las situaciones vividas? Quiénes representan el nos, quiénes los otros, quiénes se

10 Constanza Millán, notas del diario de campo, abril de 2003

11 Según la ley 70 de 1993 y el decreto 45 de 1995, solamente las áreas rurales son susceptibles de titulación colectiva. Lo anterior no implica que no puedan existir consejos comunitarios urbanos. En la trayectoria de Cocomacia hasta el momento, sólo han existido consejos comunitarios rurales, incluidos en la titulación colectiva.

integran y quiénes se excluyen. Cómo se define la cohesión y la conflictividad.

■ ¿Cómo se reconoce la cotidianidad? Cómo se asumen las transformaciones y continuidades de las actividades que desempeñan hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes y ancianos en las actividades de encuentro y organización colectiva, en las actividades de producción y reproducción.

■ ¿Qué dinámicas expresan el tejido social? Cómo se vinculan las redes de parentesco, vecindad, amistad e institucionalidad. Qué dinámicas establecen las redes de comunicación (circulación de información y rumor) y las redes de transacción (movilización de los recursos, utilización de intermediarios, tramitación y resolución de conflictos). Cómo circulan los apoyos alrededor de la salud, la muerte, los nacimientos y el sostenimiento familiar.

■ ¿Qué dinámicas se expresan sobre el territorio? Cómo se define y qué significa, qué continuidades y transformaciones plantea su uso, qué actores incluye.

■ ¿Qué procesos organizativos se plantean? Qué tipos de organización existen, formales e informales, tradicionales, coyunturales, políticas, económicas, sociales; qué intereses convocan. Qué actividades de participación plantean, cómo se desarrollan, continúan o fracturan los liderazgos, qué relación establecen con las organizaciones externas al lugar.

■ ¿Cómo se incorpora al nivel colectivo la noción de sujeto de derecho frente a la situación del conflicto armado? Cómo se reconocen los derechos existentes, qué conocimiento hay sobre la oferta institucional. Cómo se relacionan las dinámicas institucionales (de atención humanitaria, reparación y restablecimiento) que plantean la ejecución de proyectos para el ejercicio de los derechos de la población con las dinámicas organizativas y culturales de la región.

- ¿Qué mecanismos de afrontamiento se reconocen al nivel colectivo? Qué acciones convocan, qué sentidos y significados circulan en ellos.
- ¿Cómo se reconoce lo que se tiene, lo que se puede y lo que se quiere hacer? Cómo se agencian los recursos para retomar la autonomía frente al proyecto colectivo.

Componente de formación

La formación fue un componente fundamental en el proceso de acompañamiento, en la medida en que involucró la reflexión, la capacitación y el apoyo de los agentes sociales que atendieron la problemática.

En este sentido, pretendió aportar conocimiento sobre los impactos psicosociales a los que se ve enfrentada la población víctima, así como brindar herramientas de este tipo que permitieran desarrollar procesos más cualificados y pertinentes a la problemática que enfrentaban.

A través de este componente se construyeron igualmente espacios de apoyo emocional a la afectación y al desgaste que enfrentaban los agentes institucionales que atendieron la situación.

A continuación presentamos algunas de las preguntas que orientaron la realización de los espacios de formación:

- ¿Cómo entienden los agentes externos los impactos psicosociales vividos por la comunidad?
- ¿Qué perspectiva psicosocial asumen los proyectos de acompañamiento que desarrollan?
- ¿Cómo se entienden los impactos psicosociales que genera el accionar institucional?
- ¿Cómo se construyen herramientas de abordaje psicosocial en interacción con las particularidades étnicas de las poblaciones?

Componente de gestión

Entendemos por tal, la capacidad que tiene un grupo humano para crear vínculos con redes sociales que le permitan fortalecer el desarrollo de las propias potencialidades, tanto en el corto como en el largo plazo. En este sentido, esta estrategia buscó crear las condiciones necesarias para la alianza con diversas instituciones de carácter gubernamental y no gubernamental que viabilizaran de manera más efectiva, el flujo de recursos destinados a la atención de la población afectada por la violencia. De esta forma, el componente consideró desde una perspectiva psicosocial, el apoyo a la construcción y consolidación de procesos organizativos y de coordinación interinstitucional.

II. EL CONTEXTO Y LOS ACONTECIMIENTOS

1. Las dinámicas socioeconómicas y del conflicto armado en la región

El devenir histórico y la geografía del conflicto armado permiten relacionar la dinámica de los desplazamientos forzados y de los despojos como parte de una lógica de control territorial en la que, por razones estratégicas, compiten los diferentes grupos armados, en un marco en el que se suceden cambios apresurados en el control de los objetivos disputados, se intensifican las acciones militares y se vulneran cada vez más los derechos de la población civil.

Del continuo aumento de las acciones violentas —múltiples, simultáneas y sistemáticas— resulta el fenómeno del desplazamiento forzado, el cual se incrementó tanto en el número de personas como en el de áreas geográficas afectadas¹. La localización de los desplazamientos obedece, de manera inequívoca, al acaparamiento de tierras, al control de territorios considerados estratégicos por sus recursos, a la perspectiva de los beneficios derivados de una potencial instalación en ellos de proyectos de desarrollo de gran envergadura, o a su significación política y militar dentro de la confrontación armada².

De esta forma, el desplazamiento forzado, junto con otras acciones y consecuencias propias de la guerra, coloca al país entre los primeros en el mundo en este tipo de atropellos contra la población civil³. Estas acciones son el resultado ampliado de las formas de apropiación y valorización del suelo, articuladas con las estructuras del poder político, en particular en sus expresiones regionales y locales, y con el valor militar atribuido a las zonas en disputa.

1 De acuerdo con el informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, del año 2004, desde 1995 a 2004 el número de desplazados en Colombia es de 1.565.765 personas. En el año 2004 se desplazaron 287.581, un 38.5% más que en el 2003. Datos tomados de “Desplazados en el limbo. Informe Codhes 2004, Bogotá, 1° de febrero de 2005.

2 Acnur *et al.*, *El desplazamiento por la violencia en Colombia*, Memorias del foro “Desplazados Internos en Antioquia”, Medellín, 27 y 28 de julio de 1998, pp. 36-37

3 Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, Colombia ocupa el tercer lugar en el mundo con respecto al número de desplazados; solamente superada por Sudán y República del Congo en este aspecto. Informe Acnur, enero de 2003. En www.acnur.org/index

1.1. La dinámica social en la zona

El departamento del Chocó se encuentra inmerso y afectado por la dinámica del conflicto armado interno. Ubicado entre la cordillera Occidental y la zona norte del Pacífico colombiano, el Chocó cuenta con una extensión de 46.530 kilómetros cuadrados. Limita al norte con el mar Caribe en el golfo de Urabá, al noroccidente con la República de Panamá, al occidente con el océano Pacífico, al oriente con los departamentos de Antioquia y Risaralda, y al sur y al sureste con el departamento del Valle del Cauca. El departamento está dividido en 31 municipios, 147 corregimientos y numerosos caseríos y poblados. Quibdó es la capital departamental.

En su mayor parte, el territorio chocoano es selva ecuatorial húmeda y está conformado por las cuencas de los ríos Atrato, San Juan y Baudó. Se caracteriza por las escasas vías de comunicación con los departamentos vecinos de Antioquia, Risaralda y Valle, por la alta precariedad económica de su población, por la débil o casi inexistente atención del Estado y por ser el departamento con mayores niveles de exclusión social. Su territorio sirve de corredor entre la costa Pacífica y el interior del país y es considerado además, como punto estratégico para el comercio ilegal de armas y de drogas.

El municipio de Bojayá, a su vez, se ubica en el Pacífico colombiano, en la subregión central denominada Medio Atrato. Bojayá limita al norte con el municipio de Carmen del Darién, al oriente con Vigía del Fuerte en el departamento de Antioquia, al occidente con Bahía Solano y al sur con Quibdó y el Alto Baudó. Se caracteriza por ser una planicie aluvial que conforma un valle en donde predominan las ciénagas y un gran número de ríos: Bojayá, Napipí, Opogadó, Buchadó, Cuía, Pogue, Uva, Partadó y Gengadó.

La situación de exclusión social de las poblaciones que habitan el departamento se evidencia en las siguientes cifras: los indicadores de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) aumentaron en el 2002 a un 62.2% y la miseria presentó un índice del 23.5%. De otra parte, la pobreza por ingresos registra un índice del 75.3% y la indigencia es la mayor del país con un 47.4%. En el departamento del Chocó se registran los niveles más altos de analfabetismo en todo el país con un 23.3% de la población. El índice de condiciones de vida sólo

llega al 55.3%⁴. De cada mil niños que nacen en este departamento, 89 mueren a edad temprana, mientras que el promedio nacional es de 25.8 por mil. Aún persiste una altísima proporción de madres que mueren de problemas de parto —160.35 de cada cien mil—, lo cual representa casi el doble del promedio nacional (89.76 muertes entre cada cien mil mujeres que dan a luz).

Actualmente, en el Chocó habitan alrededor de 542.962⁵ personas con una alta heterogeneidad cultural: afrodescendientes, indígenas y mestizos. La población indígena está conformada por cerca de 40 mil personas distribuidas en 252 comunidades pertenecientes a las etnias tule, wounaan, embera dóvida, embera katío y embera chamí. Esta población representa entre el 8.7% y 9.2% de la población total del departamento. La población negra está conformada por aproximadamente 369.558 personas que representan el 88% del total de los habitantes del departamento, ubicados en las partes bajas de los ríos, de manera especial en los afluentes del Atrato, San Juan y Baudó.

Los indígenas ubicados por lo general en las cabeceras de los ríos se han organizado en cabildos y resguardos, y están representados por la organización indígena Orewa, históricamente la primera asociación de base del Chocó, cuyos objetivos son el logro de la autonomía y la autodeterminación de sus comunidades.

Las comunidades negras se han organizado en Consejos Comunitarios desde la década de 1980 con los Comités Locales de comunidades negras en el Pacífico y el Chocó, integradas en una red a lo largo de los ríos. Con el desarrollo de la Ley 70 de 1993 los Consejos Comunitarios son actualmente propietarios de Territorios Colectivos. Estos asentamientos están en las partes bajas y las desembocaduras de los ríos.

En la zona media del río Atrato se encuentran varias organizaciones comunitarias. Las comunidades negras están agrupadas en Cocomacia, organismo representativo de 120 comunidades, cuyo objetivo es la lucha por el

4 RUT Informa, Boletín trimestral sobre desplazamiento forzado en Colombia, publicado por las Diócesis de Quibdó e Istmina-Tadó. Pastoral Social, Boletín especial, estudio de caso 2, diciembre de 2001.

5 Cifra que resulta por contrastación de las siguientes fuentes: www.etniasdecolombia.org, www.dane.org y El cultivo de palma africana en el Chocó. Legalidad ambiental, territorial y derechos humanos", Human Rights-Diocese de Quibdó, 2004.

reconocimiento de la propiedad de sus territorios ancestrales, el desarrollo comunitario, la cohesión social y el pronunciamiento político frente al conflicto armado y el abandono del Estado. Su actividad se ha centrado en la titulación colectiva de su territorio, así como en la promoción de experiencias de economía solidaria, el rescate de la medicina tradicional y la alfabetización de adultos, entre otros.

Las principales actividades económicas de la población se inscriben en la producción tradicional: agricultura, pesca artesanal, aprovechamiento forestal y cría animal de especies menores. Esta cultura de extracción sostenible de recursos naturales está amenazada por la tala indiscriminada de bosques, el desarrollo de proyectos estratégicos en la región y la sobreexplotación de ecosistemas que afectan los esquemas comunitarios de alimentación y supervivencia.

1.2. El mapa del conflicto armado

Desde la década de 1990, con el auge de las políticas neoliberales que pusieron en primer plano la apertura económica como la única alternativa viable para procurar el desarrollo de los países, y en el contexto de la globalización como el escenario en donde se hace patente el nuevo orden mundial, el departamento del Chocó empezó a adquirir una cierta importancia estratégica en las agendas de los gobiernos de turno. La zona se define, entonces, desde tres perspectivas que indican la orientación que se le quiere imprimir a la región desde el punto de vista de una economía extractiva que le permita insertarse en la economía global. En primer término, la región del Pacífico es considerada como una zona productora de materias primas; en segundo lugar, se asume como una plataforma privilegiada para acceder a los mercados de la cuenca internacional; y en tercer lugar, es reconocida por el inmenso potencial extractivo de recursos biológicos dada su rica diversidad.

El enfrentamiento armado en esta región se explica por los evidentes intereses económicos que están en juego, los cuales se vinculan con obras y proyectos relacionados con la culminación de carreteras transnacionales, con la creación de nuevos puertos o con la ampliación de los ya existentes y con los proyectos hidroeléctricos de los ríos Murri y Baudó.

La región del Pacífico está en el nudo de los megaproyectos e inversiones continentales contemplados en el Plan Puebla Panamá (PPP), el canal Atrato-

Truandó y la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de Sur América (IIRSA). Se estima que estos complejos unirán a América Latina con los Estados Unidos e interconectarán desde las carreteras y las vías fluviales hasta las redes eléctricas, para el paso hacia el exterior de recursos como el petróleo, el gas, la electricidad, los recursos genéticos y las especies tropicales.

De acuerdo con lo anterior, el canal interoceánico Atrato-Truandó es la conexión del PPP y el IIRSA, un proyecto estratégico de alto perfil que intenta doblegar la titulación colectiva de las comunidades y se vuelve un detonante del desplazamiento⁶. Un modelo que se viene aplicando en diversas áreas estratégicas: Atrato-Truandó, el río Meta, el río Putumayo, la proyectada carretera Urabá-Venezuela, los proyectos hidroeléctricos y las zonas petroleras⁷.

Las disputas territoriales se asocian además con las dinámicas que generan en la región el aumento de los cultivos de uso ilícito⁸, la proliferación de monocultivos como la palma africana⁹ y la explotación maderera.

6 En la región del Pacífico, la segunda zona más rica del mundo por su diversidad biológica, los desplazamientos están ocurriendo en áreas en las que a los afrodescendientes e indígenas les son reconocidos sus derechos a la propiedad colectiva de los territorios ocupados ancestralmente, a los recursos naturales renovables y a los mecanismos especiales de consulta.

7 En declaraciones de un jefe paramilitar (Bloque Centauros), éstos aceptan estar aplicando una táctica de tierra arrasada mediante la que han conseguido arrebatar a la guerrilla amplias porciones de territorio, ejecutar proyectos de inversión infraestructural a través de licitaciones ganadas a través de terceros y estar generando empleo con la creación de empresas de exportación de alimentos. "Para contener el retorno de la guerrilla a esas zonas arrebatadas planeamos sembrar palma africana, una especie de muro de contención en el que trabajarían madres cabeza de familia, ex cocaleros, desplazados y familiares de combatientes; sería una forma de reinserción y de resarcimiento a nuestras propias víctimas". Desde esta perspectiva, el cultivo de grandes extensiones de palma sería un modelo de sustitución del cultivo de coca para lavar la imagen en relación con la captura de dineros provenientes de dicha actividad, implementando un proyecto "legal" que respondería a objetivos militares –de contención– y político-sociales estratégicos, como un "pequeño proyecto de sociedad propia, sin oposición, ni disidencias, una manera de legalizar lo hecho en las zonas bajo control". Entrevista a Miguel Arroyave, jefe de las AUC, Bloque Centauros, *El Tiempo*, 29 de mayo de 2004.

8 Incluyendo la extracción de riquezas minerales (oro y carbón, entre otros).

9 Al respecto consultar: "El cultivo de palma africana en el Chocó. Legalidad ambiental, territorial y derechos humanos", Human Rights-Diócesis de Quibdó, 2004.

En este contexto adquiere mayor fuerza la estrategia de desplazar, expropiar y utilizar dichos territorios para responder a cabalidad con pactos externos que poco o nada dejan en términos de “desarrollo” y equidad social. Este tipo de “acuerdos”, liderados por las grandes compañías multinacionales, evidencian primero: un claro ejemplo de la contradicción existente entre el desarrollo capitalista y la cosmovisión de las comunidades que han habitado ancestralmente estos territorios, ya que el territorio es el lugar en el que se han construido a través de prácticas sustentables, sin existir dicotomía entre Tierra y Ser (ser es “ser en el territorio”). Y segundo, una estrategia de los grandes poderes mundiales para apropiarse de las riquezas biológicas y culturales del país¹⁰.

La “limpieza” del territorio y el posterior uso del mismo para responder a los intereses estatales y privados en función del capital, se hace indispensable. De tal manera, como lo señalan varios estudios, el cruce entre estos dos aspectos: la imposición de megaproyectos y la expansión del dominio de algunos de los actores, es altamente coincidente. No sólo se persigue el control territorial, sino además el control estratégico.

Uno de los factores que más ha incidido en la intensificación y degradación de la confrontación armada en la región es la llegada del narcotráfico, que desde la década de 1970 determinó esta zona como de gran importancia estratégica por su privilegiada posición costera y fronteriza; la tierra se concentró en manos de los narcotraficantes y esto agravó la crisis de la economía campesina. En la década de 1980, la compra masiva de tierras por parte de narcotraficantes provenientes de Antioquia y Risaralda aumentó hacia el interior del departamento¹¹.

Por esta época irrumpe en el Chocó el frente 57 de las Farc-Ep proveniente de Córdoba y Antioquia (zona de Urabá y del occidente), y posteriormente,

10 Un ejemplo de ello es el esquema intervencionista del Plan Colombia que, con la excusa de debilitar el negocio del narcotráfico, ha fortalecido el control extranjero en regiones especialmente estratégicas y que ha causado, entre otras cosas, fenómenos como el desplazamiento, la pérdida del sustento alimentario, la contaminación de las fuentes de agua, el menoscabo de la salud de las comunidades locales, etc.; debido entre otras cosas a las fumigaciones aéreas con herbicidas que tienen un bajo impacto en la erradicación de los cultivos de uso ilícitos.

11 Datos tomados del informe “Colombia, conflicto armado, regiones, derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, 1998-2002”, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República, 2002.

el frente 34 y el Eln. Dicha presencia, al parecer, obedeció a que esta zona resultaba clave para la circulación y el contacto con el océano Pacífico. De los dos frentes de las Farc con presencia en el Chocó, el 57 tiene mayor influencia en Bojayá, Ríosucio y Juradó, desde donde ha tratado de mantener el control del tránsito por el Atrato y por el norte del departamento. De menor tamaño y capacidad militar, el Eln tiene presencia en el departamento con dos frentes guerrilleros, así como también el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), cuyo campo de acción se localiza hacia el suroccidente antioqueño y el occidente de los departamentos de Risaralda y Caldas.

Las autodefensas armadas provenientes del Urabá antioqueño (ACCU) llegaron posteriormente a la zona, “creciendo con el narcotráfico que ha invertido en tierras, especialmente del litoral, con miras a proyectos de gran potencial económico relacionados con el turismo, las actividades marítimas de pesca, el cultivo de camarones y las rutas comerciales hacia el Pacífico”.¹² Paulatinamente, fueron extendiéndose hacia el Urabá chocoano, a la altura del Medio y Bajo Atrato; luego de tomar el control del eje bananero entraron a Ríosucio, Turbo y el litoral (Bajo Baudó) y a Bahía Solano. En la zona opera el bloque Élmer Cárdenas (Bec), con mayor fuerza hacia el norte, así como en Bojayá y Quibdó.

En el período 1995-2000, durante el cual se expandió de manera planificada el proyecto paramilitar, se produjo en la región una fuerte militarización operativa y estratégica por parte de la fuerza pública mediante el desarrollo de numerosos operativos militares: la instalación de puestos de policía en casi todos los municipios, particularmente los situados en el Bajo y Medio Atrato; la creación y/o refuerzo de brigadas del ejército (como en el caso de Ríosucio pasada la incursión paramilitar de 1996), batallones fluviales, batallones contraguerrilla, batallones aerotácticos y compañías de combate, entre otros.

Junto con la presencia de efectivos del ejército, de la armada nacional y de comandos de la policía en los cascos urbanos de los municipios ribereños del Atrato, los paramilitares acentuaron el control sobre las zonas rurales y las localidades de Vigía del Fuerte (Antioquia) y Bellavista (Bojayá), a donde

¹² Ibidem.

Mapa No.1 Dinámica poblacional por el fenomeno del desplazamiento forzado en el departamento del Chocó ¹³



13 Los mapas de este documento han sido elaborados por el equipo de investigación con base en fuentes secundarias.

- Desplazamientos por acciones de grupos paramilitares.
-
- Desplazamientos por acciones de grupos guerrilleros.

●

○

●

●

Dinámica del desplazamiento 1995 a 2000

- 1
- Enero de 1995. Incursión de grupos armados en la región.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

llegaron en mayo de 1997¹⁴, como sobre otros afluentes del río, destacando bases fijas en Murindó, Beté y Quibdó. “Desde diciembre de 1996 sucedieron varios desplazamientos masivos en el departamento de Chocó debido a la presencia paramilitar en la zona del Bajo Atrato, a los combates entre guerrilla y paramilitares en enero de 1997 y a los bombardeos indiscriminados efectuados por el ejército en el marco de la *Operación Génesis* iniciada el 23 de febrero de 1997, a lo que se sumó el control del abastecimiento de alimentos y medicamentos por parte del ejército y los paramilitares como forma de combatir a la guerrilla. Como consecuencia de los hechos reseñados, entre 15.000 y 17.000 personas se vieron forzadas a salir de la zona, la mayor parte en los primeros cuatro meses del año”¹⁵.

En el año 2000, en el marco de una estrategia contraofensiva de la guerrilla, se vio afectada la infraestructura militar e institucional de los municipios de Vigía del Fuerte (Antioquia) y Bellavista (Bojayá). Al siguiente año, las acciones entre paramilitares y guerrilla se intensificaron, trasladándose hacia el Alto Atrato. En la región del Alto Baudó, un alto número de habitantes de la región se desplazó forzosamente hacia Quibdó y otros lugares. Para entonces, los paramilitares lograron asegurar sus fuentes de financiación y de logística en la mayoría de los centros urbanos del Pacífico y del litoral en particular, conjugando sus intereses con la estructura del narcotráfico. La guerrilla, por su parte, hizo presencia en varios puntos de la zona rural.

Uno de los acontecimientos más sobresalientes, y que dada su estrecha relación con la presente investigación se profundizará más adelante, fue el

14 “En el mes de julio de 1997, en el municipio de Vigía del Fuerte, una comisión interinstitucional compuesta por la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo Regional Antioquia, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONG de Derechos Humanos de carácter nacional e internacional y la Diócesis de Quibdó fue amenazada por los paramilitares, quienes le dieron un plazo de doce horas para desocupar la zona, hecho que fue bien conocido por la opinión pública en aquel momento dada la amplia difusión que los medios le dieron al acontecimiento. Desde el 22 de mayo y mucho tiempo después de aquella amenaza, el centro de operaciones de los paramilitares se encontraba a escasos 100 metros de la estación de policía, en el centro de Vigía del Fuerte”. Citado en carta abierta al Presidente de la República, 18 de mayo de 2004, en reiteración a otra comunicación del 24 de abril del mismo año. Diócesis de Quibdó, Cocomacia y Orewa.

15 Datos tomados del informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, diciembre de 1997.

ocurrido a partir del 17 de abril de 2002, cuando los paramilitares al mando de alias “El Alemán” incursionaron en la zona del Medio Atrato, específicamente en los municipios de Vigía del Fuerte y Bellavista¹⁶, desembocando en los luctuosos hechos del 2 de mayo de 2002, en el que además del alto número de muertos de la población civil, casi la totalidad de los habitantes del municipio debió desplazarse hacia Quibdó y otros corregimientos.

Luego de este grave suceso, que pareciera representar un retroceso estratégico y operativo dentro de los objetivos de control de la zona, disminuyeron los enfrentamientos entre autodefensas y guerrillas por un corto período de tiempo.

Sucedida la masacre, la fuerza pública llega de nuevo a la zona el 7 de mayo de 2002, haciendo presencia en las cabeceras municipales de Vigía del Fuerte y de Bellavista, así como en otros corregimientos del Atrato. Paradójicamente, su presencia se convierte en un elemento más de zozobra para las comunidades en razón de las medidas adoptadas para el control de personas y de alimentos, y por los operativos realizados en algunos caseríos¹⁷. Los paramilitares, por su parte, iniciaron un operativo de arremetida y reposicionamiento en la zona desde el Bajo Atrato, demostrando mayor capacidad en pie de fuerza y logística militar. Al mismo tiempo, las Farc buscaron acentuar su presencia en la región para no ceder el control militar al punto de que varias comunidades indígenas y afrodescendientes (los más de 12.000 habitantes de los municipios de Bojayá, Murindó, Vigía del Fuerte y Medio Atrato) quedaron atrapadas en medio de una invasión masiva de tropas de

16 La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un informe presentado el 20 de mayo de 2002 sobre la Misión de Observación al Medio Atrato, luego de los hechos ocurridos en Bojayá, escribió lo siguiente: “Los paramilitares se establecieron en los cascos urbanos, en donde requisaron y amenazaron a la población, mientras las Farc-Ep permanecieron en el área rural”. En una nota de pie de página referente a la llegada de los paramilitares a la zona, dice: “Entre los días 21 y 30 de abril, arribaron a Vigía del Fuerte varias avionetas, una de ellas identificada con la sigla AUC. En ellas se movilizaban integrantes y jefes del grupo paramilitar, algunos de los cuales fueron reconocidos por la población local debido a su presencia en el municipio en años anteriores, como el señor Wilson Chaverra, ex alcalde de Vigía del Fuerte (1995-1997), el comandante paramilitar de Quibdó alias “El Brujo” y el comandante de las ACCU y miembro del estado mayor de las AUC, alias “El Alemán”.

17 Como en el caso de Caimanero, donde 22 familias (66 personas) fueron forzadas a desplazarse por una acción militar del ejército, el 26 de octubre de 2003.

ambos bandos¹⁸. Frente a esta situación, varias instituciones y sectores de la sociedad buscaron protección para las comunidades sin obtener respuestas oportunas y eficaces; y por el contrario, se ha tratado de soslayar las evidencias del peligro y de desprestigiar a los autores de las alertas¹⁹.

Los lugares donde se ejerce mayor presión armada son importantes no solamente por la proyección de varios megaproyectos, sino también por el manejo de cultivos de uso ilegal (como en la zona de Murindó y Ríosucio), y por la movilización y circulación de tropas y armas. A la par con el operativo adelantado por la fuerza pública desde la zona limítrofe en la costa Pacífica (Juradó, Bahía Solano y Punta Ardita) se desarrollan las acciones paramilitares en el Medio Atrato²⁰.

Durante el año 2004, los paramilitares ocuparon territorios habitados tradicionalmente por resguardos indígenas embera y tomaron el control de varios ríos afluentes del Atrato y arterias importantes de comunicación como los ríos Bojayá y Opogadó, así como de algunos corregimientos ubicados sobre la ribera del Atrato (como el caso de Napipí). Entre febrero y marzo del 2004, se produjo el desplazamiento de las comunidades indígenas de Playita, Unión Baquiza, Egorókerá, Unión Cuití y Hoja Blanca. Un total de 1.200 habitantes que luego de soportar las precarias condiciones de los Centros Humanitarios de Bocas de Opogadó y La Loma de Bojayá, retornaron sin garantías. Posteriormente, entre mayo y junio del mismo año, la prolongación de los combates, las operaciones militares en algunas zonas rurales y la connivencia de miembros

18 Desde septiembre se denunció la llegada de unos 600 hombres de las AUC a las cercanías de Opogadó. Ese mismo mes se desplazaron las comunidades afrodescendientes de Carrillo y Amburividó en el río Napipí. Comunicado a la opinión pública, Orewa, febrero de 2004

19 Véase Anexo No. 3

20 "Nos interesa cerrar el paso que la guerrilla tienen con el Pacífico, lugar en donde lograban el abastecimiento de armas, la salida de droga y la circulación humana hacia otras zonas claves...". Entrevista con el jefe del bloque Elmer Cárdenas (BEC-AUC), *El Colombiano*, 29 de marzo de 2004.

de la fuerza pública con el actuar de los paramilitares²¹ provocaron el desplazamiento de más de 3.000 habitantes de los corregimientos de Sagrado Corazón de Jesús, Napipí, Piedra Candela y, por segunda vez, Caimanero y Carrillo, hacia Bellavista y Vigía del Fuerte.

1.3. La responsabilidad estatal en el escenario de la guerra

Los enfrentamientos entre la guerrilla y las autodefensas se han localizado en zonas específicas como el Bajo y Medio Atrato, Medio San Juan, Juradó y el eje vial Quibdó-Medellín. En estas zonas la población ha sido fuertemente golpeada por encontrarse en medio de la disputa armada de posiciones que representan un elevado valor estratégico para los actores del conflicto.

Desde hace ocho años, distintos organismos del orden internacional como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y nacionales como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Diócesis de Quibdó y varias organizaciones de derechos humanos han venido denunciando y corroborando públicamente el recorrido de muerte, terror y barbarie en la región. La confirmación de la gravedad de los hechos ocurridos durante todos estos años, como de la crisis humanitaria que afrontan los pueblos afrocolombianos e indígenas debido a la confrontación armada y a la imposición de la lógica guerrillera, no han logrado desplegar ninguna acción

21 Sobre la connivencia entre la fuerza pública y los grupos paramilitares, "numerosas comisiones de observación y verificación han podido constatar el hecho, varios pronunciamientos e informes se refieren a este problema y exigen investigaciones serias, correcciones y sanciones a los responsables. Las comunidades indígenas, al igual que sus vecinos afrodescendientes, a diario son testigos de cómo los paramilitares mueven grandes cargas de abastecimiento con plena libertad ante la vista de la Fuerza Pública, cómo se relacionan amistosamente con los soldados y oficiales y cómo, en ocasiones, reciben apoyo logístico de la Armada y el Ejército Nacional". Carta abierta al Presidente de la República, 18 de mayo de 2004, en reiteración a otra comunicación del 24 de abril del mismo año. Cocomacia, Orewa y Diócesis de Quibdó.

contundente, ni respuesta efectiva por parte del Estado para que cesen los crímenes y se ponga freno a la impunidad²².

Por el contrario, el 18 de noviembre de 1999, los paramilitares cometieron un atentado contra una comisión humanitaria de la Diócesis de Quibdó, en el que resultaron muertos el sacerdote Jorge Luis Mazo y el cooperante español Iñigo Eguiluz. El día 30 del mismo mes, el jefe paramilitar Carlos Castaño le dirigió una carta a monseñor Jorge Iván Castaño Rubio, obispo de Quibdó, en la cual negaba el atentado presentándolo como un accidente. En esta carta, Castaño reconoció de paso que las Accu tenían una base en Vigía del Fuerte y se abastecían regularmente desde Quibdó por el río Atrato.

El 9 de febrero de 2001, con ocasión de la “Marcha por la vida y la paz con justicia social”, diversas organizaciones²³ le dirigieron una carta abierta al Presidente de la República en la cual se manifestaban: “en contra de la impunidad y la complicidad por acción u omisión de algunas autoridades y estamentos de la sociedad cuando se presentan asesinatos de campesinos y jóvenes indefensos”. En esta misma comunicación proponían: “que se investiguen y sancionen los nexos que se presentan en algunos lugares entre autoridades gubernamentales y grupos armados ilegales”.

En lo que respecta a Bojayá, existe constancia de numerosas alertas tempranas y llamados en demanda de protección para la población que no fueron

22 Durante los días 2, 3 y 4 de noviembre de 1999 una Comisión de Verificación creada para acompañar el retorno de las comunidades de Pueblo Nuevo y Mesopotamia, en el municipio de Bojayá, conformada por delegados de la Red de Solidaridad Social, la Procuraduría Departamental del Chocó, la Defensoría Nacional del Pueblo, la Defensoría Regional del Pueblo, las Diócesis de Istmina y de Quibdó, los embajadores de Austria y Alemania, el Departamento de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea y varios organismos no gubernamentales de Derechos Humanos, corroboró la instalación del retén paramilitar en Vigía del Fuerte desde mayo de 1997, fecha que marca el principio del terror en el Medio Atrato; y presentó además una denuncia pública por la persistente y sistemática violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario donde la población afrocolombiana e indígena del Medio Atrato ha sido afectada de manera sistemática.

23 Gobernación del Chocó, Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba (UTCH), Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diócesis de Quibdó, Organización Indígena Embera Wuounaan (Orewa), Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), Organización Barrios Populares (Obapo), Cámara de Comercio, Red de Mujeres Chocoanas, Sintrenal, Sintradin, Sintraelecol, Seguro Social, Red de Solidaridad e Incora.

tomados en cuenta, y que arrojan datos importantes sobre el análisis que se quiere establecer desde la perspectiva de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.²⁴

1.4. Tendencias del conflicto armado en la zona:

El planteamiento de la evolución del conflicto armado y de sus efectos sobre la población civil, así como el papel del Estado en dicho escenario, pone de presente algunas tendencias de la guerra actual que se viene desatando en la región chocoana; los contenidos son hipotéticos y no determinantes para el análisis:

- Es notorio el incremento en el número e intensidad de las acciones militares de todos los grupos armados que tienen presencia en la zona. Lo anterior se relaciona con que pese a que dicha presencia tenía niveles diferenciales respecto al tiempo y a las zonas de dominio, en los últimos años las acciones armadas han venido ejecutándose de manera similar y los límites territoriales —aparentemente dominados— vuelven a ser campos de enfrentamiento. En esa disputa retoman fuerza los argumentos respecto a la ubicación estratégica-militar de las zonas (vías de circulación, conexiones comerciales e intercambios logísticos), que a su vez son de alta relevancia geopolítica (fuentes de financiación y escenarios de operación).
- Un mayor involucramiento de la población civil en la guerra, en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” del actual gobierno y el impulso de la política de Seguridad Democrática bajo el esquema de fortalecimiento de la fuerza pública. En consecuencia, se presenta una amplia militarización de la región por parte de la fuerza pública que, a partir del año 2003, hace presencia en casi todos los corregimientos y centros urbanos del Medio Atrato y del litoral, desplegando mecanismos de inteligencia, participación directa y cooptación de las comunidades como parte activa en el conflicto (la red del “millón de informantes” y soldados campesinos). Asimismo, el logro de la

24 Véase Anexo No. 1.

“seguridad” se plantea en detrimento de los principios de autonomía y autoridad propias de las comunidades, no sólo por la presencia militar, sino por las sutiles formas de relación que se establecen entre civiles y actores armados (relaciones afectivas por noviazgos, lazos de familia, etc.), las cuales constriñen esta distinción y a la postre se traducen en desconfianzas y señalamientos que obstaculizan los procesos de reconstrucción y de reintegro (en el caso del retorno) al tejido social.

Los actores armados expresan algunas lógicas sistemáticas y continuas que persiguen el control territorial y que, al igual que en otras zonas del país, permean las estructuras administrativas y sociales de la región:

- Inicialmente, la no adhesión a las negociaciones que se adelantan con el gobierno, por parte del bloque paramilitar (BEC) que opera en la zona, le facilitó una mayor capacidad operativa, dado que no estaba sujeto a treguas o compromisos²⁵. Desde esta lógica, algunos bloques (los que operan en las zonas más controladas) estarían en condiciones de “negociar” mientras que otros (los de zonas estratégicas y en disputa por el control) quedarían en la retaguardia, garantizando el despliegue de la capacidad operativa y militar de la fuerzas armadas en aras de mantener la hegemonía del territorio²⁶.
- En el caso de las Farc, inciden varios aspectos que en el momento de la confrontación complejizan la situación y ponen en juego su capacidad como grupo militar: las consecuencias sociales y políti-

25 “No despojaremos a nadie: el DIH no es ni pretende serlo, un remedio o vacuna contra la guerra... y ningún principio se impone para que los combatientes no acampen en los únicos lugares disponibles para ello... lo que sí es violatorio es que algunos miembros de las Farc permanezcan viviendo dentro de los caseríos simulando el estatuto civil o de no combatiente...”. En *El Colombiano*, Entrevista al comandante del Bec, 30 de marzo de 2004.

26 Recientemente (marzo de 2004), el Bec manifestó la intención de incorporarse a la negociación en el marco de lo que denominó el “PASO”, un proyecto de alternatividad social que condiciona proyectos productivos y sociales para los “desmovilizados”. Véase *El Colombiano*, entrevista al comandante del Bec, 30 de marzo de 2004. Entre tanto, el fin de la disputa por el control de una zona valorada como una de las más ricas y estratégicas parece no darse en el corto plazo, y sin dejar de lado los trágicos saldos humanos de población civil que desde hace años aporta el mayor número de víctimas de la guerra. Nota de las autoras.

cas de los hechos del 2 de mayo de 2002 en Bellavista, los cambios en aspectos de su esquema operativo, la avanzada del proyecto paramilitar y los evidentes golpes de la fuerza pública, entre otros. Frente a esta situación se ha presentado un repliegue de tropas en algunos caseríos y se ha privilegiado la movilidad constante²⁷.

De otro lado, y debido tanto a situaciones históricas como al actual papel desempeñado por el Estado en la región, existe una grave crisis de legitimidad, expresada en varios aspectos:

- La señalada connivencia de la fuerza pública con los paramilitares en la región, la cual se ha afianzado desde hace algunos años en aras del control socio-territorial. Durante esta última etapa, la articulación de las dos fuerzas pareciera ser mayor por la coincidencia en el objetivo de “vencer a un enemigo común”. Los operativos paramilitares han sido facilitados por la fuerza pública que opera en la zona comprendida desde Turbo hasta Quibdó, permitiendo la entrada de alimentos y brindando el apoyo logístico requerido²⁸.
- Una acción decreciente del Estado en materia de protección y defensa de los derechos de las poblaciones negras e indígenas que habitan la zona. Pese a que después de mayo de 2002 la zona ha sido objeto de observación permanente, las alertas tempranas no se tienen en cuenta, no se aplican las medidas preventivas, la implementación de los mecanismos contra la impunidad se omiten, las autoridades continúan evadiendo responsabilidades administrativas y militares, y la atención a las víctimas se brinda de manera insuficiente por las entidades responsables del tema. En general, existe una subestimación de la crisis humanitaria que se vive en la región. No se observa de parte del Estado un esquema de ejecución de responsabilidades integral, planificado y coordinado. Es decir, no logra trascenderse la etapa de emergencia, por lo que se

27 “La guerrilla se encuentra en una fase de repliegue táctico... busca forzar al Estado a que estire sus líneas de combate para luego contraatacar... dejan aparecer el momento para romper esa línea...”. Entrevista a “Carlos Plotter” en *El Tiempo*, 16 de junio de 2004.

28 Carta abierta al Presidente de la República, 18 de mayo de 2004, en reiteración de otra comunicación del 24 de abril del mismo año. Cocomacia, Orewa, Diócesis de Quibdó.

reproduce un esquema de dependencia y debilitamiento de las comunidades afectadas al no encontrar opciones sostenibles. En contraposición, se realiza un fuerte ejercicio militar con el cual se aspira a pacificar la zona, ganar el control y garantizar la “seguridad”.

En este contexto, no es casual el desconocimiento y la displicencia del gobierno nacional frente a instancias como las Naciones Unidas, así como hacia otras entidades de defensa y promoción de los Derechos Humanos, incluso hacia algunas organizaciones étnicas y organismos de control. Este proceder busca encubrir las causas y los efectos de la violación de los derechos de las poblaciones, facilitar la evasión de sus responsabilidades, y descargar buena parte de éstas en las víctimas o en las instituciones acompañantes.

Para las comunidades indígenas, afrocolombianas y para las organizaciones acompañantes la sistemática y vertiginosa dinámica de la guerra dificulta la capacidad de afrontamiento individual y colectivo y merma las posibilidades de organización y de acción. Sumado a lo anterior, las diversas manifestaciones de impunidad incrementan el nivel de malestar emocional y promueven la destrucción del tejido social.

■ Las diversas maniobras o acciones que desarrollan los actores armados en la zona —en el marco de operaciones de corto plazo— pueden ir desde el confinamiento y la utilización de la población civil como escudos humanos hasta el desplazamiento forzado, la persecución, el señalamiento y los asesinatos selectivos en los lugares de llegada. Estas acciones, que se suceden de forma intempestiva o simultánea de acuerdo con los objetivos e intereses de los grupos, menoscaban los principios de autonomía y de pertenencia al territorio de las comunidades. Las continuas situaciones de violencia generan una alta sensación de incertidumbre y de impotencia, así como otras fisuras sociales y organizativas que limitan la capacidad de resistencia y agotan los canales de comunicación y los espacios de trabajo. Lo anterior incide a la hora de pensar en el quehacer en la zona y en el desarrollo de los planes de vida étnico-territoriales. Incluso para las organizaciones internacionales implica una evaluación crítica de su intervención, ya que si no pueden modificarse de alguna manera las condiciones estructu-

rales que genera el conflicto armado, son pocas las posibilidades de impacto social de los proyectos tanto locales como regionales que agencian.

- Las numerosas familias de Bellavista y de otros corregimientos y/o municipios de Bojayá que se encuentran en Quibdó en situación de desplazamiento (algunas incluso antes de los sucesos del 2 de mayo de 2002), se ven obligadas a resolver las necesidades básicas de subsistencia por su cuenta, al igual que lo hacen los “retornados”, para quienes aún no se concretan las ayudas promocionadas por el gobierno. La precariedad de la atención genera tensiones entre la misma comunidad, estimula concesiones y “alianzas” con quienes ofrecen algo concreto y, desde luego, disputas por el acceso a las mismas.

- El retorno, en lugar de representar el comienzo de una nueva vida en condiciones de seguridad y dignidad, reafirma la continuidad de la población en medio de la guerra, sin garantías para evitar ser objeto de nuevos desplazamientos. En este sentido, dicha opción se desgasta, dando lugar a que la reubicación se convierta en la única “opción” para los desplazados.

- Dada la evidente relación entre la violencia y los megaproyectos, la discusión sobre este tema ha involucrado, además de los expertos, a las organizaciones comunitarias de la zona, quienes según su concepción de desarrollo, estiman que dichos megaproyectos no están orientadas a resolver sus problemas de pobreza. Incluso, varios están implementándose, no obstante la legislación existente, sin haber sido consultados con las comunidades, lesionando de esta manera la autonomía y los ordenamientos culturales y ambientales que se construyen en el territorio.

“Los pueblos y comunidades del Medio Atrato no se niegan a que haya presencia de capital y procesos de desarrollo. Sólo piden que se les incluya en la planeación, ejecución y generación de riqueza de los proyectos contando con sus modelos de desarrollo y planes de vida, en armonía con la cultura y con el medio ambiente; que estos no sirvan para incrementar la violencia, producir divisiones y conflictos en el interior de las organizaciones y que,

además, reviertan en inversión de recursos para la región”. Líder de Cocomacia, Quibdó.

La expropiación y utilización del territorio pervierte de este modo, el sentido ancestral y sagrado que le ha sido asignado durante años; el territorio no es sólo el área física tangible y medible, es el espacio de articulación de la vida y la muerte, de lo humano y lo divino, de la reproducción material, social y cultural.

- El desplazamiento, ya sea dentro de la región o hacia la ciudad capital, altera las prácticas productivas y ocasiona pérdidas concretas de bienes, herramientas, cultivos, animales. A la vez genera pérdidas simbólicas y afectivas que amenazan y deterioran la identidad de las comunidades. La salida forzosa de “su lugar” interrumpe el equilibrio de todo el territorio, dado que en él existen otras comunidades que requieren para vivir de la relación social, del intercambio y del apoyo intergrupal e interétnico establecido por años. Al ser interrumpido el reconocimiento y el manejo del entorno lo mismo que la interrelación, se dificulta la recuperación armónica hombre-territorio. De otro lado, cuando se llega a un nuevo lugar no se tienen los espacios y los símbolos que representan la relación permanente y continua con los muertos (lugares de encuentro y los “ombligamientos” con animales o plantas de la región).

- La dinámica del conflicto se alimenta y se sustenta además en los cultivos de uso ilícito y en los megaproyectos, actividades productivas que por lo general conllevan desorden social, migración desenfrenada, prostitución, inflación económica, despilfarro, daños ambientales y corrupción político-administrativa. Esto, sumado a los problemas estructurales de exclusión y a los incipientes procesos de desarrollo socioeconómico, contribuye a la espiral y a la degradación de la violencia en la región.

En este contexto, los afrodescendientes e indígenas chocoanos tienen hoy que superar las profundas desigualdades económicas y sociales que les impiden llevar una vida digna; mantener y recuperar sus territorios, fortalecer y desarrollar su identidad cultural, defender su derecho de participación y autonomía, y encontrar mecanismos y estrategias para hacer frente al despla-

miento forzado y a las consecuencias sociales, culturales, económicas, políticas y psicológicas que en general conlleva la violencia.

2. Reconstrucción de los hechos violentos de mayo de 2002



“Ahora, en la calma del tiempo, podemos conocer la historia de Macaria, que quedó bajo los escombros de la capilla y pasó toda la noche del 2 de mayo despidiendo uno a uno a los heridos graves que iban perdiendo la vida. O la de Mirelia, la loquita de Bellavista, que también se quedó en el pueblo en esa noche de combates y silencios, juntando el rompecabezas de cuerpos desmembrados frente a la puerta de la iglesia, tratando de averiguar a quién le pertenecía aquella mano o este pie. En la mañana, cuando se encontró con los que regresaron a recoger los cadáveres, atinó a decir llena de lucidez: *Esto es todo lo que nos han dejado*”²⁹.

Antes y después de la masacre del 2 de mayo de 2002 en Bojayá, fueron observadas innumerables irregularidades con relación a la omisión, connivencia y evasión de responsabilidades de varios servidores públicos, incluyendo la fuerza pública.

La Defensoría del Pueblo, la Personería de Murindó, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Diócesis de Quibdó, emitieron varias alertas a partir del 21 de abril de 2002 que

²⁹ Fotografía y texto tomados del documento “La segunda muerte de Bojayá”, de Paco Gómez, en <http://www.revistacambio.com/html/cronica/articulos/931>

advertían la llegada de 400 paramilitares a Vigía del Fuerte y Bellavista. Los integrantes del grupo salieron en diez lanchas rápidas de Necoclí y subieron por el río Atrato, pasando sin problemas por los puestos de control de la Armada y la Policía Nacional en Turbo y Ríosucio. Los jefes paramilitares viajaban en avionetas desde Urabá y Quibdó hasta Vigía del Fuerte y abastecían sus tropas por aire desde Turbo.

El bloque “Élmer Cárdenas” de las Auc estableció su base de operaciones en Bellavista con un destacamento en la otra orilla del río Atrato. Las Farc (frentes 57 y 5, bloque “José María Córdoba”) habían bloqueado el paso de alimentos desde el 21 de abril de 2002; ese mismo día las Auc se tomaron temporalmente Vigía del Fuerte y Bellavista hasta el 1° de mayo, cuando los guerrilleros regresaron para combatirlos. Ese día las Farc llegaron a Vigía del Fuerte y Bellavista iniciando los enfrentamientos. Al sentir la presencia de la guerrilla, los paramilitares que permanecían en Vigía del Fuerte cruzaron el río y se atrincheraron en el sector de Pueblo Nuevo en Bellavista, 400 metros al norte de la iglesia³⁰.

En la mañana del 2 de mayo, en medio de los combates, la gente corrió a refugiarse en el templo de San Pablo Apóstol, por que sus paredes eran de cemento y podían resistir mejor. Entre 300 y 500 personas³¹ intentaban protegerse de las balas que podían entrar por las ventanas. Los padres Antún Ramos, nombrado párroco de Bojayá 17 días antes, y Janeiro Jiménez, procuraban calmar a los campesinos.

Los paramilitares se habían escondido detrás y alrededor del templo, cuidando a los heridos que tenían en el hospital. Entre las 10:15 y 10:45 de la mañana, según diferentes versiones, estalló un cilindro lleno de explosivos y metralla en la iglesia. A los cinco minutos se detuvo el tiroteo y la gente salió corriendo. Varios sobrevivientes huyeron hacia la ciénaga, donde estuvieron durante casi tres días sin comer, en medio de los zancudos y del agua.

30 RUT, Conferencia Episcopal de Colombia, Boletín especial sobre Bojayá, julio de 2002.

31 Según *El Tiempo* fueron 300 personas, otras fuentes hablan de 500. Al respecto véase anexo No. 2, “Balance de víctimas: muertos, heridos y desaparecidos en la masacre”. Cuadro comparativo por fuentes.

Otros sobrevivientes huyeron en embarcaciones hacia Vigía del Fuerte en medio de los enfrentamientos, sin sus pertenencias ni alimentos. El primer bote que salió hacia el municipio vecino llevaba heridos, que desde allí fueron trasladados hasta Quibdó y los más graves a Medellín, conducidos por la Brigada Aérea de Salud³². Ese mismo día las Farc lanzaron dos pipetas más sobre algunas casas de Bellavista.

El 4 de mayo empezaron a llegar las primeras misiones humanitarias y durante los cuatro días siguientes al 2 de mayo, los pocos habitantes que quedaron en Bellavista³³ atendieron a los heridos, recogieron los cadáveres y los órganos mutilados. El 6 de mayo abrieron una fosa común y los enterraron en la zona sur de Bojayá, en el único lugar seco que encontraron. Miembros de la Diócesis de Quibdó en compañía de algunos pobladores elaboraron un listado de 82 muertos y se encargaron de las primeras labores de remoción de escombros.

El 7 de mayo arribaron una nave nodriza de la Armada Nacional, varias lanchas tipo “piraña” y helicópteros. Luego de sobrevolar y bombardear la zona, el 8 de mayo el ejército entró formalmente al pueblo y tomó el control, mientras que las AUC aún permanecían allí saqueando las casas³⁴ que habían sido abandonadas. La gente que permanecía en la cabecera municipal temía otro ataque de la guerrilla debido a la permanencia de la fuerza pública y las AUC.

El 9 de mayo también se realizaron operativos militares con ocasión de la visita del presidente Andrés Pastrana, quien estuvo en la zona de la tragedia y se comprometió a garantizar la seguridad de la comunidad y a reconstruir las poblaciones. Diferentes representantes de organizaciones y entidades estatales también se hicieron presentes por estos días, mientras que la población continuaba desplazándose hacia Vigía del Fuerte y Quibdó, por temor a retaliaciones de los paramilitares y a la agudización de los enfrentamientos.

32 Dentro del Programa Aéreo de Salud de Antioquia (PAS).

33 Sesenta según *El Tiempo*, mayo de 2002.

34 Los habitantes manifestaron que les quitaron ropa y comida de sus casas, y que tomaron sus embarcaciones para que los paramilitares sobrevivientes de los enfrentamientos pudieran cruzar a Vigía del Fuerte como civiles.

Ese mismo día y por petición del presidente, se conformó una Misión Humanitaria de las Naciones Unidas para verificar los hechos y evaluar la situación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en el Medio Atrato. La misión finalizó el 12 de mayo y presentó un informe a finales del mismo mes. Las conclusiones frente a las responsabilidades de las Farc, las AUC y el Estado se detallan en las páginas 12 a 14 del informe que presentó la Misión Humanitaria de la ONU al gobierno colombiano³⁵.

La evaluación de los daños sobre la infraestructura física de la población dio como resultado cinco viviendas destruidas y dos más con daños en su estructura. El Centro de Salud sufrió daños en techos, paredes y ventanas, al igual que la Escuela de Bellavista con daños en su estructura y muros, destrucción de un aula y del depósito de material didáctico. El Colegio César Conto reportó daños en su cubierta y muros de construcción. En general se estimó que las viviendas para reubicar correspondían a 180 y 20 edificios públicos³⁶ y que el número total de tierras abandonadas ascendía a 6.498 hectáreas.

A partir del 8 de mayo, en cercanías de Bellavista, unos 150 paramilitares fueron abastecidos con alimentos y municiones desde Vigía del Fuerte y posteriormente evacuados hacia Urabá.

2.1. Trayectoria del éxodo en Bojayá

Los hechos perpetrados el 2 de mayo de 2002 en Bellavista causaron el desplazamiento de prácticamente todos sus habitantes. Mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes y ancianos tras haber perdido aproximadamente 119³⁷ miembros de su comunidad—45 de ellos niños y niñas—, y más de 95 personas heridas, iniciaron un éxodo masivo en medio del fuego cruzado que mantenía la guerrilla de las Farc con los grupos paramilitares. Esta población, en búsqueda de refugio y atención, se dirigió inicialmente al municipio vecino de Vigía del Fuerte. Luego de seis días de estar allí, se desencadenó uno de los despla-

35 Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia sobre su Misión de Observación en el Medio Atrato, Bogotá, 20 de mayo de 2002

36 *Ibid.*

37 La ausencia de acciones para la reparación, la verdad y la justicia, ha permitido que aún tres años después de haber ocurrido la tragedia no se tenga certeza del número de personas muertas en este enfrentamiento.

mientos forzados más grandes durante el año 2002 en el país³⁸, debido a las acciones militares de recuperación del territorio llevadas a cabo por la fuerza pública ante la presencia de los grupos armados en la zona y ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos. Por vía fluvial se dirigieron a la ciudad de Quibdó 5.771 personas, unas 1.744 familias³⁹ provenientes no sólo de Bellavista, sino también de los corregimientos de San Martín, Puerto Conto, Buchadó, San Miguel, Murí, Tagachí, El Tigre, San José de la Calle, Veracruz, San Antonio de Padua, Palo Blanco, Arenal, Vuelta Cortada, hecho que significó el abandono territorial⁴⁰.

De acuerdo con el censo realizado por la sección de movilidad humana del Secretariado Nacional de la Pastoral Social, las características sociodemográficas de la población desplazada en Quibdó eran las siguientes: el 50.71% lo constituían hombres y el 49.29% mujeres, de los cuales el 43.29% eran niños y niñas menores de 13 años, el 11.89% eran jóvenes, el 40.38% adultos y el 2.92% ancianos. La jefatura del hogar se ubicó en un 59.39% en cabeza de los hombres y en un 40.61% a cargo de las mujeres⁴¹.

La recepción de la población desplazada en Quibdó la llevaron a cabo la Diócesis de Quibdó, la Cruz Roja Internacional y la Red de Solidaridad Social. Debido a que el albergue de Minercol se encontraba ocupado por los desplazados del Bajo Atrato desde hacía más de dos años, los desplazados del Medio Atrato debieron buscar apoyo en las redes de parientes y amigos. Quienes no lograron insertarse en estas redes fueron alojados en el auditorio del Gimnasio anexo a la Universidad Tecnológica del Chocó.

Durante cuatro meses de estadía en Quibdó, las personas se vieron obligadas a contar una y otra vez sus historias a los distintos voluntarios, curiosos y ávidos de noticias que deseaban saber de tan horrenda masacre. En septiembre y noviembre de 2002 se efectuaron dos retornos masivos al Medio Atrato. Aproximadamente 2.000 personas retornaron a Bellavista, apenas un 60% de la población sobreviviente.

38 De acuerdo con los indicadores del Sistema Único de Registro de la Red de Solidaridad Social, Bojayá fue el principal municipio expulsor de la región.

39 Red de Solidaridad Social, "Informe sobre desplazamiento forzado en el Medio Atrato", 14 de junio de 2002.

40 Rut Informa, Boletín especial Bojayá, estudio de caso 4, julio de 2002.

41 *Ibíd.*

“Nosotros nos tuvimos que regresar, me acuerdo que el padre Antún empezó a ayudarnos a organizar. Con la Diócesis decidimos agradecer al pueblo de Quibdó tomándonos de las manos y rodeando la ciudad, asistimos a una misa para que nos fuera bien, había mucho miedo, nos íbamos a encontrar de nuevo con nuestro pueblo, sin saber cómo estaría todo. Viajamos en tres barcos, el Arca de Noé, el Niño Chévere y Fanny María, también había canoas grandes. Yo creo que por la pena varios hombres tomaron biche durante las 9 horas de viaje por el río, en el camino se fueron quedando las personas que habían salido de otros corregimientos: San Martín, Puerto Conto, Murri... cada uno se fue quedando en el camino... yo me sentía muy mal por llegar a un pueblo casi desocupado, llegamos apenas como el 60% de los que vivíamos aquí y también por saber que nos tocaba volver a empezar con el dolor en el alma”. Hombre, Bellavista, 2003.

De acuerdo con los informes de seguimiento presentados por la Diócesis de Quibdó, la Procuraduría General de la Nación, la Acnur y la Defensoría del Pueblo, la población del Medio Atrato se vio forzada a regresar porque no encontró en Quibdó unas condiciones de vida dignas. Además de las graves deficiencias en la atención humanitaria y la inexistencia de alternativas viables para retomar el control de sus vidas. El retorno se dio además porque muchas personas fueron seducidas por las promesas de la Red de Solidaridad Social que ofreció más ayuda humanitaria a condición de retornar.

En septiembre, después de cuatro meses de miradas contemplativas, de campañas de solidaridad, de registros, inscripciones y confrontaciones, la población regresó a Bojayá, pero no todos; algunos se quedaron porque dijeron no soportar la ausencia de sus seres queridos, otros porque prefirieron la incertidumbre y el desarraigo en un lugar extraño, a cambio de la certeza de la amenaza y el miedo en su lugar de origen. Los que volvieron, los retornados, no soportaron la ciudad, el hacinamiento y el destierro, regresaron con sus familias a medias, con nuevos dolores y sueños. Volvieron con la promesa de un pueblo nuevo anunciado en la voz de funcionarios del gobierno; un pueblo reubicado, donde no los amenazara la furia del Atrato (el río con el que por años han convivido), un pueblo con casas de concreto tan bonitas como las de la ciudad (y tan seguras como las paredes de la iglesia), un pueblo soñado, con agua, luz, escuela y fuentes de trabajo.

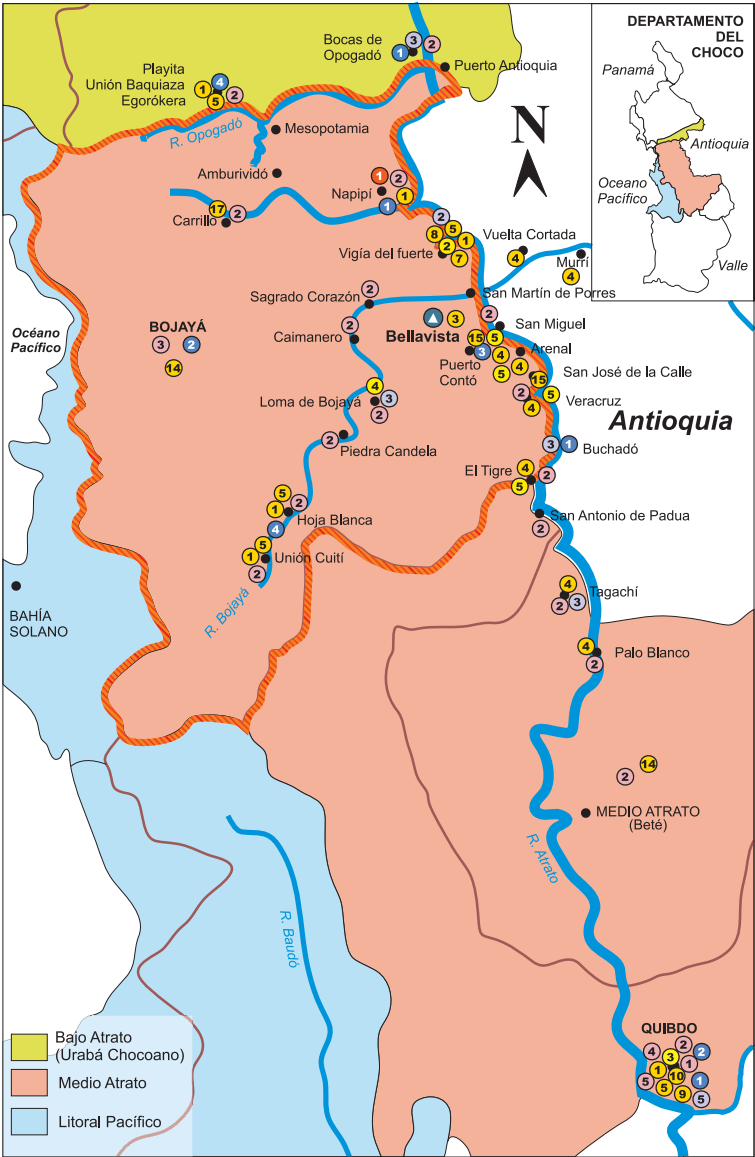
Volvieron también pensando en los millones, en los gramos oro o salarios mínimos que se anunciaban por cuenta de los derechos que les asisten como víctimas de la guerra. Las cifras impensadas que algún día pueden venir a causa de los daños materiales y morales, cifras que por momentos los paralizan, los detienen y hasta los hacen entrar en conflictos.

En Bojayá encontraron escombros y saqueos. Aún estaban las huellas de la muerte y poco o nada quedaba de sus pertenencias: enseres, animales, ropa. Llegaron con la protección del ejército, que tomó posesión del territorio con cientos de hombres armados, buques y naves. Ahora Bojayá es distinto, no están todos los que eran y están muchos que no son. La comunidad debe moverse y relacionarse de acuerdo con las reglas diseñadas por las fuerzas militares para su “protección”: no circular por el río entre las 6 p.m. y las 6 a.m., registrarse con documentos de identidad cada vez que salen o entran de la zona y controlar el ingreso de alimentos. La población en calidad de civiles, debe obedecer las normas que imponen según su estado de ánimo, los sargentos y comandantes de turno, y que no acatan los actores armados.

En Bojayá ahora se habla de talleres, audiencias, comisiones humanitarias, visitas de verificación; hay que lidiar con funcionarios mesiánicos y arrogantes, tratar de comprender y asimilar demasiada información, compleja y confusa. De repente, el lenguaje cambió, ahora hay que pensar en planes, proyectos, programas, documentos oficiales, ordenamiento territorial; hay que organizarse, que formarse, pese a que después de muchos meses de haber retornado, hay que continuar sin agua, sin luz, sin salud, sin educación, sin vivienda y sin alimentación. La vida digna sigue siendo una promesa.

En medio de tanta “imaginativa institucional” y gente nueva, los moradores enfrentan el dolor a su manera, embriagan los recuerdos, y cantan y bailan su tragedia. Ocultan con el estruendo del vallenato y la champeta, los llantos y lamentos, los ruidos de los disparos y descargas. La tragedia está viva, cualquier conversación conduce de nuevo a la masacre, se cuentan una y otra vez los horrores, como si al hacerlo los exorcizaran. El dolor está ahí, no hay cierres, porque los muertos siguen sin tumba y sin nombre propio, porque los rituales van a medias. La violencia destruyó no sólo el templo y las casas, se llevó a quienes cantaban, ¿cómo hacer celebraciones y rituales sin ellos y sin ellas?. La masacre para muchos robó el sentido de la vida, la confianza, la alegría. La masacre y la arbitrariedad cotidiana de quienes detentan el poder de las armas, genera rabia e impotencia.

Mapa No.2 Instituciones presentes en el Atrato Chocoano (2002-2004)



- 

Sistema de las Naciones Unidas.
- 

Instituciones estatales nacionales.
- 

Instituciones estatales locales.
- 

Fuerza Pública.
- 

Empresa Privada.
- 

Instituciones Universitarias.
- 

ONG's Nacionales.
- 

ONG's Internacionales.
- 

Corregimiento de Bellavista.
- 

Instituciones con presencia en todo El territorio

Presencia Institucional en la Zona:

- 



Alcaldía Local, Bellavista.



Alcaldía Local, Vigía del Fuerte.





Gobernación del Chocó.



Gobernación de Antioquia.



Dasalud.





Codechocó.





Red de Solidaridad Social.





Defensoría del Pueblo.





Fiscalía.





Procuraduría.





ICBF.





Planeación Nacional.





Ministerio de Protección Social.



Ministerio del Interior.





Ministerio de Minas.





Ministerio de Comunicaciones.





Ministerio de Transporte.



Ministerio de Agricultura.





Plan Pacífico-Min. Ambiente





Fondo de Inversión para la Paz.



Banco Agrario.



Coldeportes.





Sena.



Fuerza Pública.





Viva Antioquia.





Antioquia Presente.



Procco.





Minuto de Dios.





Niños Gestores de Paz.



Agencia Internacional de Ayuda Humanitaria.





Catholic Relief Service.



Cruz Roja Internacional.





Médicos del Mundo.





Paz y Tercer Mundo.





Sistema de las Naciones Unidas SINU.





ACNUR – ACNUDH.



Unicef.



OIM.





Universidad Nacional de Colombia.





Universidad Tecnológica del Chocó.





Pontificia Universidad Javeriana.





Caracol.





Sociedad de Ornato y Mejoras de Bogotá.



Diócesis de Quibdó - Diócesis de Apartadó.



Orewa (Organización de Comunidades Indígenas).



Cocomacia (Organización de Comunidades Afrodescendientes).

65

3. Las respuestas institucionales

“ Si usted me pregunta qué fue lo que hicimos en Quibdó, pues le cuento manita que eso fue una confusión; en un mismo día asistíamos a reuniones de todo, yo me acuerdo que hasta estuve en una reunión que yo creo que eso eran como evangélicos, ellos nos cogían y nos llevaban a todos los del albergue a una casa, ellos decían que nosotros habíamos sufrido mucho, se ponían hacer un poco de oraciones y cha, cha, cha [...] ellos decían que si llorábamos, el mal que teníamos se nos iba a quitar”. Mujer, Bellavista, 2003.

Ocurrida la masacre del 2 de mayo de 2002, Bellavista —la cabecera municipal de Bojayá—, emerge en el escenario nacional. Su existencia y visibilidad, al igual que otros municipios del país, hace parte de la geografía de la violencia y el conflicto armado. Esta visibilidad y posibilidad de permanencia dentro del contexto nacional, parece depender del desarrollo de la guerra y, por consiguiente, de la continuidad de la presencia institucional externa en la zona.

De acuerdo con el mapa institucional, desde el 2 de mayo de 2002 se ha presentado un amplio despliegue de instituciones de diverso orden: estatales (civiles y armadas) y no estatales (descentralizadas, no gubernamentales), públicas y privadas, de alcance local, regional, nacional e internacional. En este sentido, la masacre marca un precedente que convoca en bloque a las instituciones, las cuales aparecen en escena y se revelan a la comunidad. De manera sorpresiva, la población, acostumbrada al abandono y al olvido, es testigo de avalanchas institucionales temporales y esporádicas antes no vistas o imaginadas: presidente, ministros, periodistas, funcionarios, comisiones internacionales, entre otros.

“Acá no llegaban que comisiones, por decir algo el CTI, la Fiscalía, nunca, muy poco, si pasaba alguna visita era para Riosucio, acá nunca... ahí fue donde yo vine a saber que hay una defensoría, porque yo no sabía, imagínese. En tantos años de vida y no sabía que había una institución así”. Mujer, Bellavista, 2003.

“El presidente Pastrana nos visitó ayer pero poco o nada fue lo que yo le vi prometer a las víctimas de la tragedia, puesto que yo

vi su alocución por la televisión anoche, y se limitó a decir que lo único que él quería frente a la unidad europea, era que sin duda alguna que metieran a las Farc entre los grupos terroristas del mundo, pero nada más”. Video “Bojayá: un crimen de guerra”.

Podrían plantearse cuatro momentos diferenciados con relación a la presencia institucional en la zona: el primero, ligado a los años anteriores a la agudización del conflicto (antes de 1996), en donde lo institucional está limitado a las instancias locales básicas del municipio; el segundo, con el recrudecimiento del conflicto en la región por la entrada paramilitar (de 1996 en adelante), por la presencia ocasional de comisiones humanitarias y de observación tanto de la Iglesia como de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales; el tercero, con la masacre (2002), caracterizado por una presencia más coyuntural, puntual y masiva del orden gubernamental y no gubernamental, nacional e internacional; el cuarto, transcurrido un año del hecho violento hasta la fecha (2005), momento en que nuevamente la acción institucional del orden nacional se retrae sobre las entidades locales y la institucionalidad internacional es más esporádica, dependiendo de las dinámicas y efectos del conflicto (en el caso de las misiones de observación y asistencia, por ejemplo), y de los intereses y compromisos específicos de cada organismo

Cabe mencionar además que, a diferencia de las instituciones locales (alcaldía, juzgado, escuela, Iglesia), que tienen una presencia permanente en la zona, desde antes de los hechos del 2 de mayo la mayoría de las instituciones externas que aparecen en escena tras el suceso no tienen una sede propia en el lugar; su presencia es ocasional o esporádica y sus acciones son puntuales y focalizadas principalmente en la atención humanitaria después de la masacre, durante el desplazamiento masivo a Quibdó y el retorno a la zona, y posteriormente frente a los sucesivos desplazamientos masivos de comunidades indígenas y afrocolombianas en los corregimientos rurales del municipio de Bojayá.

Esta presencia-intervención institucional, mayoritariamente de tipo asistencial-humanitaria, se ha prestado de acuerdo con los objetivos y lineamientos de acción de cada organismo y ha tenido como radio de acción la cabecera municipal, afectada por los impactos de la masacre. En la zona rural del municipio de Bojayá, donde se producen desplazamientos continuos por la presencia de los actores armados, los enfrentamientos y hostigamientos. Otras acciones relacionadas con la masacre y no propiamente de intervención, se han efectuado a menor escala y están definidas desde competencias institucionales

para esclarecer y definir responsabilidades, generar espacios de discusión y mantener cierto seguimiento sobre la situación de crisis humanitaria y conflicto armado en la zona. Tal es el caso, entre otros, de los informes, audiencias y pronunciamientos de instancias de control y organismos de derechos humanos gubernamentales y no gubernamentales, y del cubrimiento dado por los medios de comunicación⁴².

3.1. La atención estatal a las víctimas

A solicitud del entonces presidente de la República, Andrés Pastrana, a los pocos días de ocurrida la masacre se realizó en la zona una misión de observación de la ONU. Resultado de ésta en el informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al gobierno, se concluye que la responsabilidad de la masacre recae sobre la guerrilla, por lanzar el cilindro de gas y ocasionar la muerte y dejar heridos a decenas de civiles; sobre los paramilitares, por poner en peligro a la población al escudarse en ella; y sobre el Estado, por desatender los llamados de alerta⁴³ y no tomar las medidas necesarias frente a los actores armados y el posterior desplazamiento masivo de cerca de 2.600 hombres, mujeres y niños sobrevivientes, que huyeron en medio del miedo y el dolor hacia Vigía del Fuerte y Quibdó.

Según lo estipulado en la Ley 387 de 1997 sobre desplazamiento forzado en Colombia, “el Estado debe formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos”, y para ello debe disponer de un Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada, SNAIPD, que garantice el cumplimiento de los compromisos mencionados y permita superar la condición de desplazado forzado en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento.

Así, en el caso del Estado, éste debió atender no sólo la prevención de la posible ocurrencia del hecho y las consecuencias generadas por el mismo —

42 Véase Anexo No. 3.

43 A partir de diciembre de 2001, tanto la Defensoría del Pueblo como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, hicieron llamados de alerta sobre la situación. En “Bojayá: Investigación a autoridades del Chocó”, *El Tiempo*, 18 de mayo del 2002.

como fue el desplazamiento forzado masivo—, sino también garantizar las condiciones de un retorno y reestablecimiento dignos en la zona.

De igual modo, la masacre ocasionó no sólo el desplazamiento forzado de los sobrevivientes, sino también daños materiales y morales ocasionados por las pérdidas humanas y las heridas físicas de muchos de los pobladores, por lo que el Estado como principal garante del Estado de derecho, debió de adelantar todas las medidas necesarias para la reparación integral de las víctimas.

Frente a esta situación, la respuesta del Estado en cabeza del gobierno de entonces (Pastrana Arango, 1998-2002) estuvo orientada, en un primer momento, hacia la atención humanitaria de emergencia de la población de Bellavista y Vigía del Fuerte, que permaneció en situación de desplazamiento forzado durante cinco meses en Quibdó, en instalaciones dispuestas para atender la emergencia. Esta atención la encabezó la Red de Solidaridad Social, entidad coordinadora del SNAIPD, y fue reforzada con recursos e intervenciones de diversas entidades nacionales e internacionales⁴⁴.

Luego de soportar durante varios meses la avalancha dispersa y descoordinada de ofertas y recursos institucionales que atendieron la emergencia, y en medio de las condiciones de vulnerabilidad generadas por el desplazamiento forzado en Quibdó⁴⁵, la comunidad debió tomar la decisión de retornar a Bojayá o permanecer en la capital chocoana.

“Retornamos en septiembre; nos prometieron tres meses de alimentación y no nos dieron ni un día de alimentación, nos prometieron mucha cosa, que nos iban a apoyar proyectos productivos, incluso a nosotros nos tocó presentar un proyecto de ebanistería y que en quince días nos aprobaban eso y hasta hoy van dos años y nada”. Hombre, Bellavista, 2003.

44 Véase Anexo No.4

45 Según varios informes de seguimiento, la población del Medio Atrato se vio forzada a regresar porque no encontraron condiciones de vida dignas, se presentaron graves deficiencias en la atención, no había alternativas viables para retomar el control de sus vidas y porque su retorno estaba condicionado por la promesa de la RSS de acceder a más ayuda (prolongación de tres meses más de ayuda humanitaria y consecución de financiación para 15 proyectos productivos).

La decisión del retor no estuvo sujeta también a las expectativas acerca de la inversión del Estado en la zona, ya que el gobierno en un acto reflejo de respuesta coyuntural frente la situación de inundación que se vivía en el momento de la visita presidencial —la cual obedece a causas naturales que se repiten anualmente durante las épocas de invierno—, condiciona dicha inversión a la reubicación del pueblo en un lugar no inundable. Es así como desde el punto de vista institucional se regresa al mismo territorio con el objetivo de la construcción de un nuevo pueblo y del cumplimiento de indicadores de eficiencia e impacto de la política de atención.

“La comunidad dice haber aceptado la reubicación porque la alternativa que dio el Estado en pleno momento de conmoción tras la matanza fue eso o nada”⁴⁶.

Desde el compromiso mismo de la reubicación del pueblo se expide el documento Conpes 3180 de julio de 2002, con el cual se apropian recursos del presupuesto nacional que son entregados a Planeación Nacional para ser ejecutados por Fonade, y se somete a consideración el Programa de reconstrucción y desarrollo sostenible del Urabá antioqueño y chocoano y Bajo y Medio Atrato.

Según el Conpes, el Programa, bajo coordinación de la Presidencia de la República, Planeación Nacional y la Red de Solidaridad Social, dará prioridad a los municipios de Quibdó, Bojayá, Carmen del Darién y Ríosucio en el Chocó y Vigía del Fuerte, Murindó, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba y Uramita en Antioquia. Para iniciar la ejecución del Programa, el estudio de reconstrucción de la cabecera municipal de Bojayá y la construcción del equipamiento urbano básico y viviendas, se asignaron \$2.500 millones del rubro total.

El documento, referido básicamente a la reubicación de la cabecera, define las competencias institucionales para tal fin⁴⁷ y la necesidad de que cada entidad apropie presupuesto para el apoyo técnico requerido.

46 Paco Gómez, reportaje “La segunda muerte de Bojayá”, revista *Cambio*, 21 de abril de 2004.

47 Las entidades comprometidas por el Conpes son los ministerios de Hacienda, Desarrollo, Salud, Educación, Interior y Comunicaciones, el IGAC, Ingeominas e IDEAM; Plan Pacífico, RSS, Fondo de Inversiones para la Paz, IPSE, Aeronáutica Civil, Fondo Nacional de Regalías, Sena y Policía Nacional.

Posteriormente, en el mes de agosto, los compromisos adquiridos por el gobierno en ejercicio son delegados al gobierno entrante (Uribe Vélez, 2002-2006), hecho que coincide con el retorno condicionado de gran parte de la comunidad (septiembre y noviembre de 2002), dadas las difíciles condiciones de permanencia en Quibdó, y con la decisión de permanencia en la capital chocoana de cerca de 1.100 personas que no fueron incluidas en los proyectos productivos ni en la reubicación⁴⁸.

Bajo el gobierno de Álvaro Uribe se inició la implementación del Programa definido en el documento Conpes 3180, y como ampliación de las estrategias diseñadas en el documento Conpes 3169, de mayo de 2003, “Política para la población afrocolombiana”, se destinan \$5 mil millones⁴⁹.

En un balance presentado por la RSS sobre las acciones del gobierno (representado por 25 entidades nacionales y regionales) en Bojayá, Vigía del Fuerte y Medio Atrato a los dos años de la masacre (marzo 2004), los resultados son calificados de manera favorable en tres frentes: protección, fortalecimiento de la participación comunitaria y reubicación. En ese mismo sentido, un comunicado de la RSS y de la Presidencia de la República del mismo año destaca que el acompañamiento social del reasentamiento contribuyó al empoderamiento de la comunidad y a la comunicación fluida entre el gobierno y el municipio gracias a la presencia de profesionales *in situ*.

Sin embargo, dos años después de la masacre, tanto los informes de seguimiento realizados por diferentes instancias⁵⁰, como los sucesivos desplazamientos forzados que reflejan la agudización de la crisis humanitaria en la

48 Informe de la Procuraduría General de la Nación, “Bojayá un año después de la tragedia”, abril de 2003.

49 El gerente del Programa señaló que la intención del gobierno es la reconstrucción social, económica y física de Bojayá, mediante la implementación de tres etapas simultáneas (emergencia, reconstrucción y planificación, y gestión y desarrollo) y como una experiencia piloto de reasentamiento de familias desplazadas por la violencia. “Reubicarán a Bojayá”, *El Tiempo*, 2 de junio de 2002.

50 Entre los informes de seguimiento se encuentran: Informe sobre los resultados del ejercicio de control realizado sobre el caso Bojayá: “Bojayá un año después de la tragedia”, Procuraduría General de la Nación, 2003; “Informe defensorial sobre la situación de derechos humanos y desplazamiento forzado en el municipio de Bojayá, Atrato Medio”, Defensoría del Pueblo, 2003; “Bojayá, un año y medio después la tragedia continúa”, Cinep-Justicia y Paz, 2004; “No es corrínche, es nuestra regular realidad”, informe presentado por la comunidad de Bellavista en la Audiencia defensorial de mayo de 2003.

región y la falta de superación de las causas que la ocasionan, demostraron una baja respuesta del Estado frente a los compromisos adquiridos y a la situación de vulnerabilidad de la zona en su conjunto. Según la Defensoría del Pueblo, “la integralidad esperada y necesaria de la intervención estatal en la región del Medio Atrato es insuficiente. La presencia de la Fuerza Pública no ha estado acompañada de inversión social ni del apoyo suficiente, en términos de asesoría, asistencia técnica y recurso humano a las administraciones municipales. El drama humano que ha sido esta tragedia sin precedentes en el país parece no ser suficientemente entendido por el gobierno nacional, pues a la fecha no ha desarrollado acciones de atención psicosocial par a la reparación emocional de la comunidad”⁵¹.

Por su parte, el gobierno ha defendido en diferentes escenarios su gestión institucional, centrada básicamente en la reubicación de Bellavista. Ocasiones como la conmemoración del 2 de mayo, así como foros y audiencias que concentran la atención nacional e internacional, han servido para mostrar la gestión del Estado y legitimar la política de reubicación⁵².

Pese a ser la reubicación el estandarte de la gestión estatal, el Informe defensorial señala que “el proceso de reubicación de Bellavista como respuesta estatal a la situación del municipio de Bojayá no responde integralmente a la problemática de la región, porque no cambia la vulnerabilidad de las comunidades de las zonas rurales ante la presión de los actores armados ilegales, ni incide sobre factores estructurales como las condiciones de pobreza y marginalidad de las mismas”. En cuanto a los proyectos productivos señala el informe que “no han cubierto a la totalidad de la población retornada o en riesgo de desplazamiento, tampoco se ajustan a los planes territoriales y de manejo de los territorios étnicos porque no fueron consultados con los cabildos y consejos”. En este sentido, el enfoque de restablecimiento desarrollado en la zona ha sido prioritariamente urbano y de construcción de infraestructura,

51 Según comunicado “Defensoría presenta acción para reclamar indemnización a afectados por la masacre de Bojayá”, Defensoría del Pueblo, 29 de abril de 2003.

52 El gobierno estima en \$31 mil millones el costo aproximado de la reubicación de Bellavista. Declaración hecha en el marco del foro: Etnocidio en Bojayá. Dos años y medio después, Bogotá, 16 de noviembre de 2004.

limitando los demás compromisos adquiridos por el Estado a los avances en el proyecto de reubicación⁵³.

“La gente cedió en la propuesta de reubicación por la presión que hubo porque el gobierno dijo que si no se reubicaban no invertirían por ser Bellavista zona de alto riesgo de inundación. Entonces la gente dijo: ‘para que la plata se la lleven a otro lado, pues firmamos’. Pero si es por eso tendrían que reubicar a todos los pueblos del Atrato porque aquí todos se inundan” (citado por Zapata, 2004:75).

“Y el problema es que con el cuento de la reubicación no invierten en el pueblo. Las viviendas afectadas están sin reconstruir. Por ejemplo, aquí el verano es muy largo, pasan meses que no sabemos lo que es coger agua, y sin acueducto porque dicen que como van a reubicar el pueblo entonces no se puede invertir” (citado por Zapata, 2004:76).

La importancia otorgada a la reubicación habla de un proceso que pretende, desde la prioridad dada a la construcción de infraestructura, restituir los derechos económicos, sociales y culturales negados históricamente a esta población. El manejo institucional, marcado por presiones y manipulaciones, conlleva a que las personas sean nombradas como “beneficiarias” o “usuarias” del proyecto y que en este sentido figuren como demandantes de servicios y no como agraviados, indignados, como víctimas de un hecho violento. En este contexto se explica la centralidad que ha adquirido la reubicación en el restablecimiento, pues reduce la atención de las víctimas a un asunto de “pobres y vulnerables” que pueden sobrevivir con algún ingreso, habitar alguna vivienda y acceder a ciertos servicios públicos. En consecuencia, la reparación queda equiparada al derecho que tienen todos los ciudadanos de acceder a bienes y servicios.

53 De hecho, después de tres años de sucedida la masacre, no se ha iniciado la construcción del nuevo pueblo –fuera de la remoción y adecuación del terreno y la construcción de la casa modelo en el actual Bellavista– ya que se aducen retrasos en los compromisos del gobierno debido, entre otros, al invierno, la baja compactación de arenas y el rediseño concertado con la comunidad sobre el modelo urbanístico. Lo anterior resulta más crítico sumado al hecho de que la mayoría de las acciones y recursos concertados bajo documento Conpes, están sujetos a la reubicación del nuevo pueblo.

En esta medida, las acciones orientadas a facilitar el restablecimiento de la población en Bellavista, así como el resarcimiento de sus derechos y la reparación de los daños materiales y morales de las víctimas, se han dado de manera insuficiente e irregular. Es el caso de algunos recursos para la reconstrucción de la infraestructura institucional que provienen de agentes privados y otros destinados mediante documento Conpes a salud y educación⁵⁴. Las acciones institucionales desarrolladas hasta el momento no han permitido el acceso real de las víctimas al derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Los responsables del hecho no han sido capturados, las acciones de la fiscalía han sido lentas en la identificación de los cadáveres y en la evaluación de los daños físicos sufridos por varias personas de la comunidad. Tres años después del hecho, no se ha pagado a todas las personas el auxilio por muerte a que tienen derecho los familiares de las víctimas. Y, como si fuera poco, en agosto de 2003 fue rechazada por el Consejo de Estado la Acción de grupo entablada por la Defensoría del Pueblo en nombre de las víctimas de la masacre del 2 de mayo⁵⁵.

Frente a esta providencia emitida por el Consejo de Estado, los familiares de las víctimas se pronunciaron en el siguiente sentido: “Para nosotros es claro que ha habido negligencia por parte del Estado para llevar a cabo el proceso de identificación de las víctimas, más aún cuando rechazó el ofrecimiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Hum-

54 La Procuraduría General de la República adelantó investigación a Dasalud Chocó por irregularidades en la prestación del servicio a desplazados y retornados; así mismo, según informe del ICBF, varios de los hogares comunitarios creados en Bojayá dejaron de funcionar en diciembre de 2002. Y en el caso de la energía, para esta época, a pesar de que el IPSE destinó recursos para el suministro, la empresa local –Electrobojayá– estaba quebrada y sin combustible para garantizar el servicio.

55 Una reciente providencia del Consejo de Estado rechazó la apelación interpuesta por la Defensoría del Pueblo en nombre de las víctimas, frente al auto proferido el 15 de julio de 2003 por el Tribunal Administrativo del Chocó mediante el cual se declaró la nulidad del proceso que la Defensoría presentara como Acción de Grupo en contra del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército Nacional, la Armada y la Policía Nacional. La argumentación básica del Consejo de Estado para sustentar el rechazo reside en que las personas debían de estar constituidas como grupo antes de la acción violenta. Un argumento de esta naturaleza no se compadece con los términos en que la ACCIÓN DE GRUPO está definida en la Constitución Nacional (art. 88). Nadie entiende con qué derecho el Consejo de Estado exige que previamente se hayan constituido como grupo, a no ser que la invención de requisitos, inexistentes en la ley, busque negar el derecho a grupos a los que no se quiere proteger. Citado en el Informe “Bojayá, año y medio después la tragedia continúa”, caso tipo 1B. Noche y Niebla, Cinep, Diócesis de Quibdó, febrero de 2004.

nos con sede en Bogotá, para ayudar al mencionado proceso. ¿Cómo es posible que frente a la importancia del caso y con todos los avances científicos técnicos la fiscalía esté actuando con tanta lentitud? ¿Es que las víctimas de la tragedia de Bojayá no merecen ser tratadas con diligencia como se ha dado en otros procesos de identificación? A través de los medios de comunicación conocimos el caso del atentado al club El Nogal donde la identificación de las víctimas y la indemnización a sus familiares no demoró más de dos meses. ¿Es que hay ciudadanos de primera y segunda categoría?”⁵⁶.

De otro lado, frente a la dinámica de la reubicación impuesta por el Estado, las mismas instituciones oficiales de la localidad han terminado haciendo eco de esto según sus intereses, y hasta la misma comunidad ha resultado por insertarse en esa lógica bajo la esperanza, por un lado, de lograr construir un pueblo nuevo con mejores condiciones que las actuales, y por otro, bajo la expectativa de conseguir recursos para la subsistencia al trabajar en las obras adelantadas (adecuación del terreno, generación de bloques de cemento, etc.). Todo esto, pese a que las mismas fuentes de empleo están sujetas a la temporalidad de la ejecución del proyecto, y a que esta dinámica ha afectado la construcción de una idea de futuro como colectivo y ha dado paso a divisiones y fragmentaciones en la comunidad.

En la dinámica de la ejecución de proyectos, obras y presupuestos de las diversas instituciones estatales, la comunidad figura además como un “objeto de disputa” que bien puede legitimar su acción o aprobar la evaluación estatal ante los medios de comunicación, la comunidad internacional o los organismos de control, pese a que las acciones institucionales carecen de coordinación y se distancian de las necesidades, ritmos y dinámicas comunitarias, a las cuales van dirigidas.

A manera de conclusión, puede plantearse que la respuesta e intervención estatal en la zona para superar la crisis humanitaria y garantizar la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto, se ha caracterizado por:

- La inexistencia de una perspectiva regional, integral y estructural del Estado.

⁵⁶ *Ibid.*

- La focalización de la respuesta estatal hacia la reubicación y la presencia militar en la zona.

- La relación con la comunidad —mediante los proyectos de atención— en calidad de población beneficiaria, demandante y usuaria de servicios, más que como población agraviada y víctima de hechos violentos.

- Una atención que responde a la emergencia, al evento, entendido como “momento” y situado en un espacio físico y social focalizado. Sin una perspectiva que se oriente a evitar la fragmentación social y la recuperación emocional de las comunidades enfrentadas a estos hechos.

- La falta de coordinación y los escasos resultados obtenidos por las instituciones responsables y comprometidas tanto con el desplazamiento, como con la atención y reparación integral a las víctimas, debido al desembolso irregular e insuficiente de los recursos, a la ineficiencia de los organismos encargados de prestar dicha atención y a la falta de voluntad política del gobierno, de las entidades y de los funcionarios responsables.

- La prioridad dada a las acciones e inversiones militares como estrategia para lograr el orden, la seguridad y la legitimidad, por encima de los procesos y proyectos de inversión y desarrollo social. De igual manera, el privilegio de la autoridad militar por encima de la autoridad civil.

III. SENTIDO, SIGNIFICADO E IMPACTO DE LA MASACRE

1. En la dinámica y en la identidad colectiva

“No se puede hacer nada contra la guerra y le queda el interrogatorio a uno por qué a él, quién lo hizo, por qué yo, qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo . . . Pero si es una muerte natural, uno siempre llora y uno siempre dice, son cosas de Dios y como que hay más resignación. Pero cuando las cosas son así, las preguntas sin respuestas duelen más. Uno siempre se está preguntando por qué no lo evité, por qué esto o por qué lo otro, quién lo hizo y por qué. Esas son preguntas sin respuestas. Porque en la guerra, ¿quién le resuelve a uno?”. Mujer, Bellavista, 2003.

La irrupción de la violencia y de la muerte en Bojayá, evidencia rupturas en varios niveles; por un lado, en la dinámica de las redes sociales que sustentan la vida de los individuos en el colectivo que, en palabras de Bateson (1973), constituye el sistema significativo con el cual interactúan los individuos, y que desde la perspectiva de Sluzki (1996) no se reduce a la familia nuclear o extensa, sino que incluye a todo el conjunto de vínculos interpersonales de los sujetos: familia, amigos, relaciones de trabajo, de estudio, de inserción comunitaria y de prácticas sociales. Y, por otro lado, rupturas en el tipo de pactos que sustentan estas relaciones, es decir, en los discursos y narrativas que el colectivo acepta como verdaderos y que afirman los fundamentos de las leyes que rigen su funcionamiento, definiendo así las costumbres, normas, valores y tradiciones que mantienen las interacciones.

La manera particular como se relacionan estos escenarios, que constituyen el sistema de significación de un colectivo, crea el universo de sentido de las culturas. Por tal motivo, las rupturas que se presentan en este campo plantean crisis de sentido, dudas en las certezas construidas, en “su mundo dado por supuesto”, que le han posibilitado *saber* acerca del entorno que le rodea, *hacer*, es decir desarrollar actividades que le permiten vivir de acuerdo con las circunstancias, *estar*, ubicarse en el lugar de acuerdo con la sabiduría acumulada y *ser*, tomar decisiones a partir de la autonomía que genera la certeza de saber quién es tanto para sí como para los otros.

Con respecto al *saber*, la presencia constante de la violencia en la región desde tiempo atrás, así como la masacre, provocaron no sólo la desaparición

física de algunas figuras significativas de la comunidad sino que también interrumpieron procesos de formación que lesionan gravemente la identidad cultural de la comunidad: aquellos mayores portadores de la sabiduría, dueños de los secretos y de las habilidades para curar los males del cuerpo y del alma, aquellas mujeres infaltables en los rituales de nacimiento, celebración y muerte, estas personas, los tíos, mayoritarios y matronas —además de ser perseguidos por los actores armados, quienes temen también a sus poderes y a su capacidad para generar dinámicas de autonomía y defensa del territorio—, han perdido también la posibilidad de mantener los procesos de transmisión que garanticen la continuidad de aspectos básicos de la cultura. De esta manera, estos seres humanos tanto como su sabiduría, empiezan a ser concebidos como aspectos del pasado, como atributos perdidos.

“Los ancianos, ellos se cuidaban con otros, como en eso no había eso que hay que fulano tiene cáncer, que hay que fulano tiene esta enfermedad, eso no se sabía... que tiene ahora y si salían las curaban con sus hierbas. . . con sus hierbas, sí la botánica, cogían los curanderos, mi papá era uno, sí mi papá era uno, mi papá se iba a trabajar, él aplicaba pongamos las culebras, nos curaba, nos ponía su secreto en el monte y lo mandaba. . . le imponían secretos y seguían trabajando, papá curaba culebras y curaba enfermos si algunos. . . pongamos una gente que le están metiendo embrujos a la comida también los curaba; secreto, secreto, secreto y hierbas; secreto es una cosa que en nosotros se aprende así como usted tiene... escrito y aprendérselo en la memoria. . . ah eso y uno se la aprende de memoria, porque así en el papel creo que no sirve que usted lo relate, pues en el papel y me lo ponga a mi sino tiene... que ser de memoria, yo no aprendí porque mi papá dijo que a mi no me enseñaba; se lo enseñó fue a otro, a un hijo y está loco en Medellín, ¡ah! es que el se enloqueció fue ahora tiene por ahí dos años. . . un año. Mi papá murió y como sólo le enseñó a este hermanito mío que se volvió loco pues la tradición se perdió”.
Mujer, Bellavista, 2003.

Las dinámicas orientadas al *hacer* han sido especialmente afectadas en Bellavista. Aquellas prácticas habituales referidas a trabajar la tierra, a la pesca, a las labores artesanales, presentan una serie de obstáculos para desarrollarse debido especialmente al control de los actores armados, quienes determinan hasta dónde y en qué horas se puede caminar, sembrar y pescar.

Alejar se de la cabecera municipal reviste especial peligro, así como movilizar los productos. Las actividades vinculadas al río como la pesca, ya no se realizan porque en los horarios considerados ideales para pescar está prohibida cualquier labor en el Atrato.

“Antes era una época divina, divina, era linda, hermosa por lo que uno iba y venía a cualquier hora y nadie le decía nada... Nadie se metía con uno y uno no vivía asustado con la impresión que me van a coger ni nada... Aquí uno vive y después de las 10 y 11 que el pueblo se queda en silencio, ya a la gente le da terror salir de su casa. Y antes no era así. Yo era una que daban las 10, 11, 12 de la noche y uno se bajaba aquí el río a pescar, a coger el pescado y tener pescado fresco supuestamente, en la mañana. Se cogía charres, barbudos... el pescado que pegaba... y que cuando ya el pueblo se queda en silencio pa’ que no hicieran ruido... y uno se bajaba y pescaba a su gusto... Yo, ahora, ya no lo hago. Porque yo después de las 7, 8 de la noche, mientras no haya gente por ahí yo ya no bajo al río, el temor me está matando... Y aun cuando esté la rumba y todo eso y yo después de estar rumbiando, yo me acuesto temprano”. Mujer, Bellavista, 2003.

“Atarrayaba uno de noche, en la orilla... Los hombres cazaban guaguas, animales, aquí en la orilla, en el caño por todo esto... mataban dos o tres guaguas en la noche, temprano. La vida era como más libre... había más libertad en todo. Más reposadita... Todo, todo era diferente. Ahora todo ha cambiado. Yo por lo menos oigo un golpe y enseguida el corazón se me agita... y me coge como esa depresión así, y eso como un temblor en el cuerpo así. Ahora ya las cosas no son iguales, todo ha cambiado”. Mujer, Bellavista, 2003.

Por otro lado, la permanencia y estabilidad en el territorio ha dejado de ser una certeza, tanto por la posibilidad de nuevas incursiones armadas, como por la expectativa ante el proyecto de reubicación. La comunidad se plantea interrogantes frente al sentido de cultivar si en cualquier momento hay que salir corriendo, o de arreglar las viviendas si con seguridad el pueblo quedará en otro lado. Estas incertidumbres los sumen en la desocupación y por lo tanto, en la dependencia. El arroz, el plátano y el pescado hay que comprarlos, pero

como no hay dinero, entonces hay que esperar a que las instituciones aseguren el alimento.

“Nosotras asistimos a una de las tantas reuniones con las comisiones de verificación que desde el retor no de septiembre de 2002 visitan la zona. A este lugar peregrinan los “paisas”, como los llaman los nativos, ellos llegan, toman fotos del escenario en que se ha convertido la iglesia, saludan con admiración, susto y prudencia a los retornados que se convierten así, en seres humanos que salen como de ultratumba, sobrevivientes de una escena dantesca. Los funcionarios se ubican en la parte de adelante del templo, allí reciben demandas, peticiones y ofrendas de estos seres que miran con extrañeza [...]. Una de las discusiones más sentidas se da ante el proceso de reubicación: los representantes de los bellavisteños se quejan de que las obras no avanzan pese a que han transcurrido ya más de dos años de la tragedia; el funcionario del Estado que allí está responde que la comunidad no debe ser atendida sólo a estas obras, se queja de que no se organizan, no participan en la ejecución de las obras. Un hombre adulto de aproximadamente unos cincuenta años, ofendido con el reclamo del funcionario del Estado, interrumpe la reunión, con voz entrecortada de ira le plantea: ‘Usted que no vive aquí, que es “paisa”, que no perdió sus hijos cómo espera que hagamos algo si además de haber perdido a los hijos, la familia, la casa y los electrodomésticos, no podemos hacer nada porque lo que hagamos aquí es una pérdida, llevamos más de dos años en que nos dicen que la reubicación no se demora, que ya va a construirse, que no se demoran en trasladarnos, así, así, nos tienen parados, uno no puede arreglar su casa, sus tejas, su champa por que para qué si lo que hagamos aquí va a ser una pérdida. ¿Cómo reconstruye uno una casa que sabe que va a quedar desocupada? Ya sea por la reubicación o porque los actores armados nos sacan de nuevo corriendo. Mi tío no ha podido volver a su finca, ¡cómo! si lo pueden matar, [...]’. Cuénteme cómo construye uno en algo que se va a perder, ¡cuénteme usted porque yo no sé eso cómo se hace!’”¹.

1 Constanza Millán, notas del diario de campo, junio de 2004.

Sin actividades productivas, sin la certeza de mantenerse en el lugar que se habita, sin poder hacer lo que históricamente hicieron, “ganarse el sustento y mantenerse por sí mismos”, el pueblo deja de ser lo que era; el antes se refiere al trabajo, al hacer, y el presente a la inactividad y a la incertidumbre. Volver a *ser* implica poder trabajar la tierra. Ser bojayaceño pasa porque los hombres y las mujeres recuperen sus prácticas sobre el territorio, las cuales son parte de su identidad, en tanto se han constituido como sus atributos y características definitorias.

Vivir hoy en Bojayá, *estar*, es más un accidente o un episodio esporádico y transitorio pues se está en un presente detenido, que sólo cambiará por la acción de los otros y que por lo tanto les niega a quienes allí habitan, la posibilidad de incidir sobre el territorio y sobre la vida que quier en vivir. Hoy la única certeza que los habita es saber que la vida es prestada, que hoy se tiene y mañana no se sabe. Después de lo ocurrido cualquier cosa puede pasar, pero también nada puede ser peor.

Las transformaciones abruptas provocadas por la violencia y la masacre en Bojayá sobre el *ser* y el *hacer* de sus habitantes “*deshacen el mundo*”. Los referentes de protección, las creencias y sus prácticas cotidianas fueron puestas en cuestión, se vieron abocados a transformar el uso del territorio; figuras representativas que cohesionaban la comunidad fueron asesinadas o tuvieron que huir y el sentido del nosotros se fragmentó.

La masacre, por lo tanto, genera sentimientos profundos de indefensión, pues la comunidad considera que todos los intentos y estrategias de protección a los cuales apelaron fallaron. Nada sirvió, ni estar en el único sitio hecho de concreto (a diferencia de sus casas hechas de madera), ni estar juntos para protegerse, ni estar acompañados de las figuras de mayor poder espiritual (el padre y las matronas), ni ser inocentes y sin pecados (niños y niñas), ni invocar su condición de población civil (el derecho). Nada detuvo la acción de los armados. Los sobrevivientes no saben por qué sobrevivieron, por qué ellos, ni entienden por qué los otros fallecieron.

El que haya sido la iglesia, justo el lugar donde aconteció la masacre tiene varias implicaciones; por un lado, hay un cuestionamiento fuerte hacia algunas de sus creencias religiosas, las personas que murieron eran precisamente las que la comunidad identificaba como las “más buenas”, por ser madres, líderes o niños y niñas. ¿Entonces, por qué murieron? Por otro lado, el referente de

protección divina también es cuestionado; el evento ocurre en el lugar más sagrado para la comunidad —el altar del templo—. Estas situaciones generan mayor dolor para la comunidad, mayor sensación de sin sentido y de desprotección frente a lo ocurrido, puesto que las explicaciones culturales, el saber previo existente no es útil en este caso. “Si algo define a la barbarie es justamente la acumulación del no saber qué hacer, por cuanto lo no sabido emerge como significativo característico de la época, mientras que todo lo sabido choca con una realidad que lo denuncia cuando no ineficaz, reproductor de lo ya conocido por la siniestralidad de sus efectos” (Botero y otros 2000:47).

“Estuvimos dos días en la capilla y a eso de las 10:30, después de tantos combates, cae una pipeta de gas donde muere un número indeterminado de población civil. [...]. Me impacta mucho ver correr gente pidiendo auxilio, gritando qué hacemos, padre qué hacemos, mi gente qué hacemos. Vi correr gente con los pies mutilados. Vi a alguien correr casi metro y medio sin cabeza...” [...]. Yo estaba dentro de la capilla en el momento cuando cayó la pipeta. La gente que está alrededor mío, muere. Y me cae no sé si un pedazo de teja, una esquirla o parte de esa pipeta y me hiere la cabeza, botó mucha sangre y me hiere también en el pie un pedazo... de pared que me cae. Inmediatamente a ese hecho, la gente empieza a correr y se desbanda todo el mundo: unos a la ciénaga, unos para adelante, otros pa’ donde las hermanas... Corrimos para donde las monjas. Estuvimos ahí porque seguían los golpes y los tiroteos. [...]. Me dan la bandera y me dicen Padre vaya usted. Inmediatamente, yo cojo la bandera, no lo dudé por... el momento. La gente estaba muy desesperada. Cojo la bandera y voy hacia los botes seguido de todos los compañeros y de todo el personal”.
Párroco de la iglesia de Bellavista².

En los procesos de transmisión oral se presentan discontinuidades y rupturas. Por un lado, la masacre hace que ya no estén presentes las matronas, las cantadoras, las que guardaban los *secretos*; que ya no estén las que interpretan los sueños, las que rezaban las heridas. No se dejó transcurrir el tiempo natural necesario para la transmisión de los saberes y por eso se siente la orfandad. Por otro lado, con la continuidad de la violencia, la persecución por

² Entrevista al Padre Antún en el video “Crimen de guerra”, Diócesis de Quibdó, junio de 2002.

parte de los actores armados a todas aquellas personas que ostentan saberes ha resquebrajado los mecanismos de transmisión oral utilizados para dar continuidad a las tradiciones; ahora se teme aprenderlos o aplicarlos por el miedo a ser perseguidos por los grupos en confrontación.

1.1. La muerte sin ritual

“Luego de las del 2 de mayo acá no se hicieron novenas, porque primero no se pudo hacer velorio y para la novena primero es el velorio y para el caso de los niños el *qualí*, y las condiciones que había aquí no favorecían porque la gente estaba muerta pero el combate aún seguía, entonces era pues más urgente buscar salvar mínimamente la gente que estaba viva, entonces se descuidó un poco la parte cultural en ningún caso, a excepción de Ilson que se llevó a Pogue; el papá vino y lo recogió y se lo llevó y otra señora por ahí pero fueron muy contados, algunos creo que tres o cuatro. Pero la gente que pudo hacer la novena, ésta no fue como siempre se hace, no fue normal, pues aunque la gente se hacía a la idea de lo que estaba haciendo, la gente más que pensando en lo que estaba haciendo estaba pensando a qué hora se prende la cosas por otro lado y la gente estaba más en función de correr a la hora que le tocara”. Hombre, Bellavista, 2003.

Las circunstancias que rodearon la masacre no permitieron desarrollar los rituales de paso de la vida a la muerte de quien fallece, no fue posible predecir la muerte por lo intempestivo del suceso, *el pájaro guaco* no pudo avisar para que quienes murieron pudieran recorrer y recoger sus pasos y así quedar en paz con la vida. No hubo posibilidad de velar a los muertos como era, no se hicieron los *alabaos* y *qualís* tradicionales, no se permitió el tiempo necesario para la despedida. Tampoco fue posible el entierro, los muertos no han terminado de identificarse, no se han nombrado y por lo tanto, no han podido marcar la tumba con una lápida o un árbol que les permita fundar el lugar donde pueden ir a conversar con sus antepasados. Están enterrados donde no debe ser, puesto que *los muertos deben volver a la tierra de donde nacieron*.

En la tradición cultural chocoana, las personas que mueren continúan viviendo en la comunidad, son los antepasados, ellos protegen y cuidan a su prole; sin embargo, el lugar que el muerto ocupa en la colectividad no puede ser ocupado plenamente si éste no está en paz. Y los muertos no están en paz

porque los rituales funerarios no pudieron desarrollarse en el momento ni en la forma que correspondía; entonces hay que pedir perdón, no sólo por no haber podido evitar la muerte de los seres queridos sino también por no haber garantizado la paz al muerto.

El impacto negativo de la muerte sin ritual recuerda el carácter que el evento de la muerte —y en particular de la muerte violenta—, representa: “La muerte aparece como una victoria del desorden, un atentado contra la corriente de la vida, y se relaciona con la impureza”, dice Balandier (1994:32), para enseguida agregar que “es necesario que el muerto sea tratado de la manera prescrita, para que no se convierta en un agente del desorden errante entre los vivos sino, que por el contrario, en una potencia benéfica que actúe en beneficio de ellos. Sólo el trabajo simbólico ritual puede convertir lo negativo (potencial) en positivo (actual), el difunto convertido en ancestro propicio”.

Por otro lado, es “gracias” a la muerte y a la tragedia que es posible cobrar existencia para “los otros”. El reconocimiento de Bojayá y de sus habitantes en el contexto nacional e institucional, se da a partir de su condición de víctimas. Para esta población afrocolombiana e indígena excluida y negada por el Estado, la masacre constituye una posibilidad de *ser*, ser *víctima*. El escenario erige así un *no sujeto* que deviene del azar y de la incertidumbre de la guerra. La historia se detiene en esa temporalidad y perpetúa la ausencia, la muerte y la desprotección como elemento privilegiado de la identidad³.

Esta situación marca una impronta necesaria de observar y analizar en los procesos de identidad colectiva que construye la población. ¿Cómo se incorpora en la noción de identidad de esta población, el hecho de que quien llega allí indague por la muerte? La muerte es la que marca el lugar, la que confiere existencia, y paradójicamente, la que permite reconocer el derecho.

1.2. La violencia y los cambios en el uso y significado del territorio

“Dicen que el territorio es como parte de uno mismo y así tiene que ser porque uno es tierra. Y dicen que uno donde nace le sepultan lo que es parte de uno, que es el ombligo, y mi ombligo está enterrado en esta tierra. Y entre nosotros acá eso es una

3 Al respecto consultar Botero y otros. (2000)

tradición. ¿Por qué no me dio por irme par a otra parte después de haber estado tantos años por fuera de mi tierra? Por mi ombligo”
Mujer, Bellavista, 2003.

Después de la masacre, Bojayá es par a sus habitantes un territorio⁴ diferente al que habitaron históricamente. Después del desplazamiento y una vez retornados, se presentaron nuevas y diversas dinámicas de construcción del territorio a partir de la relación que éste establece con los procesos culturales de las poblaciones que lo habitan. Para entender esta relación, Giménez (2000:101 y ss) propone tres dimensiones de análisis: una de *inscripción* de lo cultural, que equivale a la dimensión simbólica que alimenta y conforta la identidad de los pueblos; otra de *distribución* de instituciones y prácticas culturales espacialmente localizadas, aunque no intrínsecamente ligadas a un determinado espacio; y una de *representación y apego afectivo*, que tiene que ver con la forma como los sujetos individuales y colectivos interiorizan el espacio integrándolo a su propio sistema cultural. El territorio se caracteriza tanto por los procesos de apropiación que ejercen sobre él quienes lo habitan, como por los procesos de poder que se ponen en juego y sobre los cuales se definen el valor de uso, el valor de cambio, la producción, la distribución y el control del mismo.

En referencia particular a Bojayá, y en atención a lo anterior, es posible observar cómo se integran los procesos de apropiación del territorio desde sus diversas dimensiones de inscripción, distribución y representación, con los

4 Giménez (2000) aporta una definición del concepto de territorio teniendo en cuenta los procesos de globalización presentes en la modernidad tardía. Define territorio como el espacio apropiado y valorizado –simbólica e instrumentalmente– por los grupos humanos (Raffestin, 1980:120 y ss). El espacio –entendido como una combinación de dimensiones (Nyangatom, 1978:152), incluidos los contenidos que las generan y organizan a partir de un punto imaginario– se concibe como la materia prima del territorio o, más precisamente, como la realidad material preexistente a todo conocimiento y a toda práctica. El espacio entonces tendría una relación de anterioridad con respecto al territorio, se caracterizaría por su valor de uso y podría representarse como un “campo de posibles”, como “nuestra prisión originaria”. Correlativamente el territorio sería el resultado de la apropiación y valorización del espacio mediante la representación y el trabajo, una “producción” a partir del espacio inscrita en el campo del poder, por las relaciones que pone en juego, y en cuanto tal se caracterizaría por su “valor de cambio” y podría representarse metafóricamente como “la prisión que nos hemos fabricado para nosotros mismos”. En resumen, “serían tres los ingredientes primordiales de todo territorio: la apropiación de un espacio, el poder y la frontera”.

procesos de poder que se ponen en juego a partir de la dinámica del conflicto armado existente allí.

Las poblaciones indígenas y afrocolombianas históricamente han construido formas de *apropiación* particular del territorio chocoano. Para el caso de la comunidad afrocolombiana, el territorio tiene una connotación espiritual a través de los *secretos* y ritos que neutralizan las fuerzas sobrenaturales que son maléficas para la siembra, para la movilización y para el hábitat y, a la vez, canalizan las fuerzas benéficas existentes. “Antes de ocupar una zona debemos como domesticarla, hacer los secretos para que la naturaleza respete a los que vamos a estar allí”, dice un líder comunitario de Bellavista. Para los negros existe una relación fundamental entre los seres naturales y los sobrenaturales que coexisten con ellos, es decir una relación entre el mundo mítico espiritual y el mundo natural y cultural que es mediado por el curandero de la comunidad, quien a través de la manipulación de plantas y animales, tanto para fines curativos como maléficos, crea todo un ambiente de representaciones simbólicas y metafóricas a fin de establecer un puente de comunicación y diálogo entre los afrocolombianos, su entorno y su cosmogonía (Antón, 2000).

En las comunidades indígenas el territorio es fundamental en su cosmovisión, se *es* con el territorio, y en este sentido el indígena es *uno* con él; el indígena y el territorio son un mismo cuerpo, es la misma energía la que los contiene. La naturaleza hace parte del *Jaí* la energía vital, la madre, la fuente de bienestar, por lo tanto el vínculo con ella existe desde antes de nacer, es *connatural*. “En la naturaleza nosotros enterramos nuestros ombligos, porque estamos ligados a ella toda la vida y debemos volver a ella; nuestra tradición, organización, producción hacen parte y dependen de la fuente de la vida, esa es la esencia de nuestra comunidad”, como dice un indígena embera de Bellavista.

1.3. Territorio, terror y muerte violenta

“Incluso cuando se daban casos que moría alguien, la gente no preguntaba quién lo mató, sino de qué se murió, porque de una vez se asociaba con un hecho de enfermedad o muerte natural y hoy en día... se murió alguien, quién lo mató, por qué. Ya la misma realidad ha cambiado pues la forma de hablar y eso de la gente y uno se queda como pensando a qué hora volveremos a navegar en el Atrato...”. Hombre, Bellavista, 2003.

Mapa del territorio realizado por jóvenes de Bellavista



Después de la masacre, el territorio es *resignificado*, es marcado y rebautizado en función del terror y de la muerte. Ya nadie se mueve igual, sus formas tradicionales de usarlo se ven afectadas porque ahora hay sitios donde habitan los muertos a la espera de un entierro digno (hay quejidos, gritos y lamentos); no se murieron de muerte natural, como se acostumbra, se fueron de repente y por eso están sufriendo⁵. Para estos afrocolombianos los muertos no están ahora donde deberían estar, en el cementerio, están deambulando por los lugares donde habitan los vivos, invaden los diversos espacios, los de encuentro en la iglesia a través del temor que provocan sus manifestaciones, los de habitación con sus apariciones y los de las calles que se recorren de noche luego de la fiesta.

“... A mí este lugar (la iglesia) me da miedo de noche porque ahí fue donde murieron las personas y muchas veces dicen que a las doce y media de la noche salen las ánimas de la iglesia....”

5 “La muerte y el miedo que se genera en una ‘zona de violencia’, hace que los seres humanos que las habitan configuren una serie de imaginarios así como resemantizan, referenciados en estos imaginarios, tanto los lugares como sus habitantes. Los espacios tradicionales son rebautizados en función del terror y el mal” (Castillejo, 2000).

Entonces no paso por ahí desde las... nueve". Joven, Bellavista, 2003.

La inquietud de los vivos porque los muertos aún no ocupan su lugar de ancestros, ha hecho que más de la tercera parte de la población originaria no haya retornado a Bellavista, y ha provocado que los que retornaron modifiquen sus prácticas por el temor que les producen los muertos. Una de las mujeres residentes en Bellavista lo expresa de esta manera: "Las fiestas ya no son iguales porque no están todos los que vienen siempre, la gente de los otros cor regimientos ya casi no viene, a algunos les da miedo entrar a la iglesia, el corazón se les achica cuando están allí, y la semana santa, ¡vea!, ha estado muy apagada. La gente se ha ido porque se siente en el pueblo la tristeza". Esta situación ha dado lugar a que los vecinos de otros cor regimientos hayan bautizado a Bellavista como *el pueblo de los vivos muertos*. En este sentido, el lugar de los vivos no puede existir sin la definición simbólica del lugar de los muertos; mientras esto no se dé, el territorio es confrontado también entre vivos y muertos. Para estas comunidades afrodescendientes, sin un entierro como debe ser, los muertos deambulan por el territorio asustando a los vivos. Sin definir el destino y el lugar de los muertos no puede existir el destino y el lugar de los vivos (Millán, 2004).

1.4. Territorio y nuevos agentes de control

Con respecto a las relaciones establecidas con los actores externos, tanto miembros armados como agentes institucionales, se presentan prácticas de *producción del territorio* que desde la dinámica del poder definen el valor de uso y el control sobre el mismo.

La presencia de los actores armados es continua en la zona dando órdenes y contraórdenes respecto a las relaciones que mantienen los habitantes con el entorno provocando agresiones y limitaciones que han hecho que la población pierda autonomía y que su vida cotidiana quede condicionada de muchas y diferentes maneras: las horas de entrada y salida de la población deben transformarse de acuerdo con la dinámica de seguridad imperante; la producción y el comercio deben regularse también de acuerdo con los movimientos de la guerra; la confianza y la lealtad entre los vecinos y amigos muchas veces se fragmentan o disminuyen por la constante sensación de peligro que se vive en este contexto.

Aunque la presencia de los actores armados no es nueva en la región, la comunidad siente ahora en las armas la única fuente de protección. Las armas son su amenaza, pero al mismo tiempo la posibilidad de seguir habitando este lugar. La constante sensación de desprotección experimentada por la comunidad, ha generado una situación de permisividad para que los actores armados, en este caso la fuerza pública, se inmiscuya en las actividades cotidianas de la población, participe en los espacios de reunión, celebración y socialización a cambio de que su presencia garantice la seguridad. Ello conduce a un proceso casi imperceptible de articulación y legitimación de la población con los grupos armados, que restringe la distancia crítica que debería mantenerse frente a éstos.

Las consecuencias desencadenadas por la disputa armada convocaron la presencia de otros actores externos en la zona, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de carácter nacional e internacional, quienes asumieron el acompañamiento de las comunidades. Estas reconfiguraron el territorio en función de sus radios de acción; así mientras algunas lo definen a partir del lugar donde ocurrió la tragedia, es decir en un sector del pueblo, otras asumen una intervención regional, planteando una distinción entre los corregimientos y las cabeceras municipales; en ésta lógica se disputan entre sí, presencias, coberturas y convocatorias.

Las agencias de cooperación internacional, los representantes del Estado en los diferentes niveles territoriales y la Iglesia católica se han involucrado en los asuntos de la comunidad desde sus respectivos intereses, debilidades, fortalezas, estrategias y poderes especiales. Estos poderes están relacionados con su rango de influencia en la zona, son “poderes” que permiten por ejemplo, que la Iglesia tenga capacidad de convocatoria en la región y legitime o deslegitime cada una de las acciones que realizan los agentes externos; que la cooperación internacional defina de acuerdo con sus planes cuáles son los objetivos y las características de las intervenciones que financian a las organizaciones sociales de base; y que el Estado defina políticamente planes y proyectos que le permiten a través de sus aparatos asumir el control de la zona, definiendo por ejemplo, el lugar como zona especial de seguridad o condicionando la inversión al traslado del pueblo a otro lugar.

Tanto las dinámicas de apropiación, como los procesos de poder que se ponen en juego en este territorio complejizan la percepción que sobre el espacio físico y simbólico han construido históricamente los habitantes de ésta

región. Por lo tanto, no retornan al mismo territorio del que salieron, el actual es uno nuevo que debe reconstruirse y resignificarse en función de la relación que mantienen con los elementos que Guerra (1996) plantea: con la memoria (reconstrucción de tradición, del pasado), con la práctica social (apropiación del presente), con la utopía (apropiación del futuro) y con la conciencia que los sujetos tienen de todo este proceso.

1.5. Las transformaciones en el sentido del “nos”

Las relaciones productivas, de solidaridad, de confianza, las que sustentan la tradición y las narrativas que circulan en ellas y que determinan el sentido de un *nos* afirmador y diferenciador, entran en crisis en Bellavista. En este sentido, se producen transformaciones en la representación colectiva que sobre sí mismos tienen sus habitantes, así como en los procesos organizativos y en las creencias que sustentan un sentido de protección.

Como se comentó anteriormente, a causa de los sucesos violentos, la comunidad tuvo que enfrentarse de manera intempestiva con la pérdida de un gran número de sus miembros; la muerte de varios líderes que cohesionaban procesos organizativos, de personas que movilizaban espacios de reproducción cultural, como la danza, el conocimiento de la medicina tradicional, y de quienes tenían la capacidad de convocar acciones comunitarias de tipo religioso como la Semana Santa y los ritos funerarios.

Junto con las pérdidas humanas se presenta la pérdida de los espacios de encuentro y de organización comunitaria que agenciaban quienes murieron o se fueron del lugar. De esta manera, los espacios relacionados con las festividades tradicionales de tipo religioso, la Semana Santa, la celebración de la Virgen del Carmen y el día de las madres (31 de mayo), se han visto alterados tanto por la situación de orden público, como por el duelo que permanece.

“Otras cosas que han cambiado, bueno, aquí en este medio, más que todo, por ejemplo, cuando se programan las fiestas para la fiesta de las madres, nosotras las mujeres, programábamos las fiestas en ese intermedio, dos o tres meses antes, hacíamos actividades... bingos, bailes, bingos bailables, bingos de tablititas, tirábamos... una vez nos vino que un contrato de un canal, entonces, uno, por ejemplo, aquí, yo mandaba a mi hijo y él me hacía el mío, la vecina si no tenía hijos, entonces, iba el marido, la que no tenía

marido ni hijos se conseguía un hombre y lo pagaba, pero pues hacíamos muchas actividades como para la fiesta y luego, ya después nosotras mismas nos encargábamos de hacer... Comprábamos vinos, aguardiente, su comida, hacíamos obras sociales, participaba todo el mundo: niños, hombres, mujeres, todos los que quisieran...

Para Semana Santa, hacíamos los alumbramientos. Los alumbramientos los realizábamos, o sea que... que en la noche, uno va y por ahí a las 8 de la noche empieza uno a hacer el rosario, cantamos... uno reza un rosario y cantan alabaos, echan chistes, cuentos... unos juegan rumi, dominó, y así se pasa la noche... Había pan, chocolate, café, agua de panela, el que no toma agua de panela, toma café, el que no toma café toma chocolate... porque hay personas que pues, sus gustos son diferentes, entonces hacíamos de todo eso... En la iglesia uno va temprano, y en la misa... ta, ta, ta,... y de ahí nos veníamos, y acá había una casa y había un altar y entonces hacíamos el pesebre.

Pa' los cantos, es muy sencillo, o sea que si la gente se acumula, las cantadoras las colocan al frente, y ellas cantan. Y habemos otras que vamos pa'la cocina... Yo, por ejemplo, yo cuando es una cosa así, yo estoy en todo. Yo voy al frente, yo voy atrás, yo voy al medio, yo vengo, canto, ayudo a cantar, luego me voy pa'la cocina, preparo la olla, cuando tenga la hora de servir, voy y sirvo, le lavo los platos... yo le hago todo... O sea, eso es como lo que le da la emoción a lo que uno hace. Eso se llama sentirse bien. Yo en esas cosas así yo me siento bien porque yo comparto con algunas compañeras, que por lo menos, habemos 3 ó 4 que hacemos todo lo que le digo: vamos a la cocina, hacemos café, servimos, de cuando ya servimos, venimos, lavamos los platos, cantamos, echamos chistes, reímos, vamos y jugamos rumi, dominó lo que aparezca. Y así nos pasamos la noche...

En Turbo, no hay... esa es una tradición de acá..... O sea que uno va, como reza... pero no canta como se hace acá, entonces, que uno reza, echan unos chistes pero no amanece tampoco... pues como hasta media noche... Pero no se le veía la emoción de acá pues que uno comparte con los amigos, y todo eso... allá no era

igual... como hasta la media noche uno se estaba echando chistes, echando adivinanzas, versos y rezaban ya pero tampoco como acá. O sea que lo de acá es como tradición de nuestra cultura.

Pa'l 16, el día de la Virgen, que también... para la Virgen del Carmen, pa'l 16 se hacen muchas cosas muy parecidas a las fiestas de las madres. Nos organizábamos y se hacen actividades... se... hacen... algunos programas. Se recogen cuotas, se hacen bingos, una cosa casi similar... esas fiestas son aquí como muy tradicionales: lo que es la fiesta de las madres, la Virgen del Carmen, los alumbramientos de Semana Santa.

Eso también ha cambiado bastante... Inclusive que ahora el 2 de mayo no hubo esa fiesta y ahora un año, tampoco la hubo... y ahora para este mayo, pues hay algunos programas que no creo que... porque después de lo que pasó, ya la gente, ya no tiene el mismo carisma, la misma emoción, entusiasmo, ya todo eso se ha ido perdiendo.

Más que todo, la gente se habrá desanimado por la presión en que viven. Por que nosotros par a... mayo... teníamos muchos programas y eso todo se perdió. Entonces, ya... nosotras que éramos las que estábamos metidas en el cuento, faltaron muchas compañeras y son como recuerdos que uno pues,... que eran muy activas, por esa cuestión... Entonces, ya como que uno, como que eso no es lo mismo. Ya después de que pasó lo que les pasó, ya no le ponen ese amor que uno le ponía a eso.

Pero eso es parte de la guerra... sí por que mientras no hubo la guerra no había esas presiones. A la guerra, en un sentido, no le interesa lo que pasa con la gente... y en otro sentido le interesa porque la guerra le genera presupuesto a ellos [refiriéndose a los grupos armados]. Entonces, uno, en un sentido, a ellos no les interesa lo que le pase a uno, pero uno sí lo siente a nivel de persona,... a nivel de persona, le interesa mucho esto". Mujer, Bellavista, 2003.

Dada la continuidad del conflicto armado, persisten el miedo y mecanismos y dinámicas que provocan la desconfianza colectiva, la confusión y la

pérdida de autonomía para direccionar el propio destino, sin tener que recurrir a actores externos.

De otra parte, la atención institucional y el manejo de los medios de comunicación, después de la masacre, han dado lugar a la creación de nuevas categorías sociales en el interior del colectivo que han terminado fragmentando el sentido del *nosotros*. La manera como se ha manejado el proceso de exigibilidad del derecho a la reparación ha introducido distintas categorías de personas en la comunidad, categorías que antes no existían: hay ahora quienes son los familiares de las víctimas, los que tuvieron pérdidas, y *los otros*, los que no eran propietarios y nada perdieron, los que no estaban y no pusieron los muertos. En la lógica que maneja este tipo de intervenciones, estas dos últimas categorías no son reconocidas como víctimas, lo que ha llevado a reducir el concepto de daño solamente al ámbito de lo individual, familiar o físico, desconociendo los daños colectivos y morales ocasionados.

Es notoria a la vez, la transformación de los discursos sobre los distintos atributos de la comunidad, aspectos como la alegría, el empuje, la tranquilidad, han dado paso a denominaciones como que es un pueblo vacío, despoblado, intranquilo, de desocupados y tristes. Se evidencia una lucha entre los discursos acerca “de lo que éramos, de lo que somos y de lo que queremos ser”. No hay una sola versión, éstas se construyen en función de la experiencia vivida durante los hechos violentos, de las trayectorias vitales, de las construcciones que agentes externos y medios de comunicación hacen sobre ellos mismos, de las disputas, conflictos y solidaridades que se tejen a diario en la comunidad y, desde luego, de las maneras como se ciernen sobre ellos el presente: hostil y/o esperanzador.

1.6. *El presente detenido y el futuro incierto*

“Bellavista ha ido para atrás un poquito porque con la esperanza de la reubicación nadie piensa en organizar su casa, si se le cae una tabla, dejarla así porque como esto se va a reubicar... todos estamos esperanzados en la reubicación, si no se da ya las cosas cambian un poco, no sé cómo es que vamos a vivir aquí, porque aquí nos han prometido muchas cosas y no nos han cumplido nada”. Hombre, Bellavista, 2003.

Por la pérdida de algunos líderes representativos y por las acciones institucionales se han detenido los proyectos colectivos. La comunidad de Bellavista está a la espera del cumplimiento de las promesas del Estado y de los resultados de las demandas de indemnización. La vida se interrumpió por varios meses y las cifras en pesos por el número de víctimas empiezan a ser parte de los planes, de los sueños, de los conflictos y de la culpa de los habitantes.

Varias narraciones ilustran como una sensación de parálisis, de paréntesis, durante el tiempo transcurrido sin que se hayan materializado las ayudas de una manera contundente y significativa; es más, pareciera haber cada vez mayores problemas para la realización de los programas de atención estatal y del gran número de acciones a implementar. En estas narraciones también aparecen de manera reiterada los relatos que hablan de añoranza, de la persistencia de los recuerdos y de fenómenos que pueden considerarse como de re-experimentación del hecho traumático; de igual manera se manifiesta la sensación de no tener el control sobre los acontecimientos ya que éste lo tienen los actores armados. Pero también se habla de algún nivel de recuperación gracias a la esperanza suscitada por el proyecto de reubicación, en medio de las severas dificultades externas, especialmente económicas.

“...como que vivo toda frustrada y siento que vivo pensando siempre en lo mismo, enferma y sin plata para hacerme unos exámenes... insomnio; angustia por la cantidad de cosas para hacer y las grandes limitaciones para resolverlas, sobre todo económicas”. Mujer, Bellavista, 2003.

“...que por qué sucedió esto, el dolor que siento, mi familia, a veces me da mucho guayabo, tanto trabajo que pasa uno pa' criar un hijo y de un momento a otro, así sin saber por qué, lo matan...”. Mujer, Bellavista, 2003.

“A pesar de llevar una vida aparentemente normal, el dolor está presente porque no hay resignación: uno no está conforme con lo que hubo, vive con eso en el corazón y como que le vive trabajando día y noche, esa pasión no se le quita a uno... un dolor que nunca lo superas, él siempre va a estar allí contigo, lo recuerdas... cuando veo la iglesia se me viene la imagen, cuando entro, los pelos se me erizan...”. Hombre, Bellavista, 2003.

“Ahora me siento enfermo y desde que esté uno enfermo ya no tiene amigos . . . Los viejos son dejados solos, hay días que me dan comida y hay días que me dejan aguantar hambre”. Hombre anciano, Bellavista, 2003..

“A uno no le quedan como ánimos de trabajar, siempre vigilados, hay armados por todas partes, uno está en medio y asustado y el gobierno no hace nada”. Hombre anciano, Bellavista, 2003.

“ . . .dejar la psicosis de eso..., a veces contento, otras aburrido . . . es difícil olvidar lo que pasó, sólo porque mi familia está en el pueblo no me he ido, me sentiría menos agobiado si no estuviera en Bellavista”. Joven, Bellavista, 2003.

La visión de futuro es predominantemente pasiva en la medida que consideran que las cosas no van a cambiar o podrían empeorar; básicamente porque la situación económica y de violencia se perciben irremediables y por fuera del control de la población. De igual forma, aunque el futuro está cargado de innumerables expectativas frente al mejoramiento de las condiciones de vida actuales, sustentadas principalmente en la acción de las instituciones, se hace referencia a la parálisis e incertidumbre frente a la promesa de reubicación que conduce a que toda acción se considere fútil hasta tanto no se esté en el nuevo asentamiento.

“Pues yo creo que nosotros los civiles no podemos hacer nada contra la violencia. . . los actores armados que se pongan de acuerdo para dejar las armas . . . yo veo una solución muy difícil, puede volver a pasar lo que ya pasó, puede que sí, puede que no. Si se vuelve a repetir, ahí sí tocaría, los que quedemos, los que queden vivos, pues dejar esto solo para siempre”. Hombre, Bellavista, 2003.

Frente a esta situación, la valoración del *nosotros* en el presente se sustenta principalmente en las emociones compartidas de dolor, tristeza, temor y pérdida; el pasado, por su parte, se describe lleno de valores y de condiciones favorables para la felicidad. La recuperación de una narrativa del *nosotros* agente es lenta y conduce a resignificar los acontecimientos y a generar continuidad en la experiencia temporal de la comunidad, es decir, poder asumir el

pasado y el futuro desde una narrativa alternativa que posibilite la autonomía y el control del entorno.

Para muchas personas, sin embargo, es una obligación no renunciar a su Bellavista, luchar porque el pueblo y la comunidad perduren. En este sentido, los jóvenes en particular se asumen como la posibilidad de continuidad y garantía de que el pueblo y su cultura no desaparezcan. A pesar de la fragmentación y de la incertidumbre se mantiene y en ocasiones se fortalece, un lenguaje plural que expresa el reconocimiento de un pasado común: “somos de aquí, nacimos acá”, y de una voluntad compartida manifiesta en el deseo de no desaparecer.

“Vamos a sacar al pueblo adelante porque es la tierra donde nací, vamos a sacar al pueblo adelante porque es la tierra donde nací, le canto a mi tierra con amor porque la quiero de corazón”.
Rap compuesto por uno de los jóvenes de Bellavista.

2. Las rupturas, daños y recomposiciones desde la perspectiva familiar, de género y ciclo vital



En la línea de las reflexiones planteadas sobre la masacre ocurrida en Bellavista, el nivel de complejidad aumenta al reconocer las características

culturales de este grupo social y en particular, sus dinámicas familiares.

El trabajo de campo realizado durante la investigación, así como la consulta de los diversos estudios que existen sobre la familia afrochocoana (Gutiérrez, 1968; Losonczy, 1992; Camacho y Restrepo, 1999; De Friedemann y Espinosa, 1993), permiten reconocer una dinámica familiar que se construye y reconstruye de acuerdo con patrones culturales de larga duración provenientes de las tradiciones africanas y de la influencia de las instituciones coloniales, así como de patrones que han ido consolidándose de acuerdo con el contexto sociopolítico y económico actual.

Los datos corroboran que en las tipologías y dinámicas familiares de Bellavista y en la zona del Medio Atrato prevalece la estructura de la familia extensa y las uniones de hecho, poligámicas (especialmente la forma *dispersa o encubierta*), en las cuales un hombre tiene varias compañeras que viven en unidades habitacionales distintas.

Como lo plantea Gutiérrez (1968:284), el matrimonio civil o católico “es una práctica poco frecuente en esta zona rural del Medio Atrato y, en general, en varias zonas rurales del Chocó, debido a que se asocia con una obligación cultural de grupos con un nivel socio-económico alto —a blancos o personas que viven en las ciudades—, o se considera un tipo de ascenso social o una exigencia de la Iglesia católica”. De acuerdo con las caracterizaciones identificadas en investigaciones previas, las uniones de hecho se iniciaban por lo general en la adolescencia; sin embargo, en la actualidad este aspecto reviste cambios significativos. Estas uniones se dan en una menor proporción debido al contexto económico que dificulta el sostenimiento del hogar y de los hijos, así como a la mayor vinculación de las adolescentes mujeres al sistema educativo formal y a la sensación permanente de falta de control y de inseguridad que impone el conflicto armado en la zona. Estas situaciones postergan la decisión de establecer una unión y ponen en duda la capacidad de asumir el sostenimiento de otro hogar.

La familia extensa es fundamental porque provee apoyo, no sólo en la crianza y sostenimiento de los hijos, sino en el establecimiento de redes de solidaridad, transacción y comunicación. Según Niara Sudarkasa, citada por (De Friedemann y Espinosa, 1993:102). “... el más importante legado africano en la diáspora es el que proviene de la familia extendida, la cual recreó principios éticos, modos de comportamiento, rasgos estructurales y orientaciones

cognoscitivas en nuevos lenguajes de parentesco, que les permitieron a los negros sobrevivir en el nuevo mundo”.

Por esto, la familia nuclear no representa el centro o unidad primaria de la comunidad. “El matrimonio de un hombre y una mujer no significaba el comienzo de una nueva familia, sino la ampliación de una familia extendida, base principal de muchas sociedades africanas, que estaba formada por una constelación de parientes que descendían de un ancestro fundador del grupo” (De Friedemann y Espinosa, 1993:102).

El parentesco se ha definido históricamente a partir de los *troncos familiares* o apellidos que se establecieron durante los primeros asentamientos alrededor de los ríos, como una estrategia de organización de las comunidades para controlar los recursos de la zona⁶, sobrevivir, desarrollar trabajos colectivos y desplegar sus relaciones de solidaridad y respeto.

“Las relaciones de parentesco se establecen de muchas maneras, por ejemplo, por lazos de sangre, por compadrazgo, por afinidad, por la unión con otras familias gracias a las relaciones de pareja, y por paisanaje, cuando se está afuera de la tierra natal. También se establecen relaciones de parentesco por lazos simbólicos, con un significado especial para las comunidades; por ejemplo, los hermanos de pila o padrinzago y los hijos e hijas de crianza” (Cocomacia, 2002: 68).

Durante el trabajo de campo se realizaron entrevistas a 34 familias que hacían parte de cinco troncos familiares de Bellavista. El promedio de miembros pertenecientes a cada uno de estos núcleos familiares fue de siete integrantes⁷. En total corresponden a 225 personas, de las cuales 54% son mujeres y 46% son hombres.

Las entrevistas realizadas permiten reconocer una composición familiar bastante heterogénea. La mayor parte de los hogares están conformados por menores de edad: los menores de un año representan el 3%, entre 1 y 12 años

6 Véase el estudio de De Friedemann y Espinosa(1993), "La familia minera en el litoral pacífico", en Pablo Leyva(ed.), Colombia Pacífico, Vol.II, editorial del Fondo FEN, Bogotá.

7 Datos recogidos durante el primer semestre de 2003.

el 34%, siguen los jóvenes con edades entre 13 y 20 años con un 24%, los adultos entre 20 y 40 años con un 22%, el grupo de adultos entre 40 y 60 años representa el 13%, y los mayores de 60 años un 4%.

La tendencia habitacional de los hogares es por núcleo familiar o esporádicamente por familia extensa, en menor cantidad comparten con otras familias (vecinos o amigos); algunas personas viven solas por la pérdida de miembros de la familia en los hechos violentos, o por que al retornar, los familiares se quedaron en Quibdó en condición de desplazados.

La mayoría son familias recompuestas, con una figura femenina permanente, un padre o marido que permanece en el hogar durante un tiempo limitado, y una descendencia de distintos padres.

Las familias mantienen una línea de jefatura masculina ejercida por el padre, en menor escala se mencionó la jefatura en cabeza de la madre; en un solo caso este rol es desempeñado por la abuela y en dos casos la jefatura está en cabeza de un hermano, debido a la muerte de los padres en la masacre del 2 de mayo.

La percepción de jefatura responde más a preceptos culturales que reconocen la descendencia familiar principalmente en el hombre. Son comunes los casos en los que el ejercicio práctico de la jefatura y el soporte de la familia los realiza la mujer por la movilidad constante del hombre y por la poliginia existente. Esto delega la crianza y el cuidado de los hijos a la línea materna o en otros casos a la familia extensa. Los hombres actúan como maridos transeúntes que procrean y permanecen un tiempo limitado dentro de los hogares que conforman o a los cuales ingresan. La posición del hombre se otorga por la relativa provisión económica que suministra a la familia, porque coordina el bienestar material de ésta y porque conserva cierta autoridad e injerencia en la vida familiar de cada hogar de procreación, así su responsabilidad sea limitada por la inestabilidad de las uniones que conforma.

La imagen del hombre se asocia con su capacidad progenitora, su identificación social es la poliginia y dependiendo del número y bienestar de sus mujeres, proyecta su poder económico. “La figura paternal se haya representada por maridos transeúntes, que llegan, asimilan por un tiempo mínimo su papel en la familia y al impulso de las presiones migratorias tornan a irse

dejando el lugar, la responsabilidad y el derecho a otro varón, que llega más tarde y procede en forma similar al precedente” (Gutiérrez, 1996:309).

Con relación a la paternidad, las obligaciones se concentran en la tarea reproductiva ya que no hay una constante en sus funciones paternas y son asumidas de manera circunstancial y según su voluntad. Las imágenes sobre los padres son diversas y poco aluden a su influencia o reconocimiento de responsabilidades. Algunos hijos no han conocido a sus padres o tienen recuerdos fragmentados de éstos.

El sostenimiento de la familia y la autoridad se estiman como un deber femenino, que en algunos casos, puede ser compartido con los maridos. Los hijos son una responsabilidad de la madre; incluso si éstos ingresan al núcleo familiar siendo hijos del esposo. Cuando la mujer no puede asumir todas las obligaciones, acude primero a la solidaridad de la familia de origen, a su familia extensa o a la red vecinal. Cuando no se cuenta con las condiciones para sostener a los hijos, éstos se entregan a familiares, compadres o amigos con un nivel económico superior (recibiendo el nombre de “entenados” o “hijos de crianza”) para que les sea dado el sustento y la educación. Una vez que los hijos crecen y pueden trabajar, en ocasiones regresan al hogar nuclear.

Vecinos, padrinos, abuelos (las abuelas asumen la crianza de sus nietos y junto con los viejos poseen saberes sobre plantas y remedios que curan y previenen enfermedades, saberes que hacen parte de tradiciones y prácticas ancestrales que enseñan a los niños) y adultos en general, son apoyos fundamentales en la crianza y el cuidado de los niños; los protegen, acogen en sus hogares y no en pocos casos, ayudan al sustento diario.

Entre otras, una de las mayores dificultades jurídicas observadas en el proceso de reparación en Bojayá, lo representan los casos de muertes de “hijos de crianza” que tenían el reconocimiento social y el aval de los familiares, pero sin registros escritos y formales de reconocimiento. Por lo tanto, ante la sugestiva idea de una indemnización se han presentado tensiones y disgustos entre sobrevivientes y familiares para obtener la tutela de las víctimas.

El ser mujer se asocia con la maternidad y la casa. Se es adulta y parte activa de la comunidad cuando se tienen hijos, poco importa que sus maridos se vayan, y conformen otra(s) unión(es) que les permitan continuar con su función reproductiva.

Además de las responsabilidades que deben asumir al tener una unión e hijos, las mujeres dicen ser maltratadas por sus maridos, generalmente cuando están borrachos. Algunas han tomado la decisión de separarse de sus maridos por estos maltratos —que consideran machismo—, o por el castigo o el abandono de los hijos, lo que se constituye en una nueva tendencia, ya que por tradición las mujeres prefieren tener un marido en el hogar, así haya maltrato o no aporten económicamente.

“Cuando yo estaba en la escuela, mi tía no nos dejaba ni salir a la puerta: la mujer no tenía ese derecho, sino que tenía que estar en la cocina. Mi tía decía que una mujer en la puerta era cabeza de bagará [una variedad del loro que no aprende a hablar]. Eso significaba que nosotras no sabíamos expresarnos, que éramos brutas. Mi papá era muy aborrazo y decía que hija mujer no estudiaba. Decía que en hija mujer no gastaba ni un peso porque si aprendía a escribir era para escribir a los maridos y no para servir a los padres. Mi papá me mandó a estudiar... pero a estudiar a sembrar arroz, plátano... a meterme a la agricultura. Yo me encontraba adolorida y fui a ver a una viejita curandera llamada Eleuteria Maturana. Le dije: ‘Mama Tella, hable con mi papá y dígame a ver si me deja estudiar los dos años que me faltan’. La viejita habló con mi papá y él le dijo: ‘Mire, mama Tella, mucho la quiero y la respeto, pero hija mujer no estudia, porque estudié una, se casó y todavía no sé con quién’”. (citado por Gómez, 2002:115).

Frente a los hijos, desde tiempo atrás éstos representaban tanto para la madre como para el padre el centro de la vida, la continuidad del grupo, la posibilidad de sobrevivir y mantener el apellido y la retribución de los cuidados y sacrificios en la vejez. Esta pauta tradicional ha tenido variaciones, las nuevas uniones no piensan tener varios hijos que atiendan estos requerimientos; las limitantes impuestas por el contexto han conducido a la decisión de tener pocos hijos o incluso no tener los.

Aunque no es factible afirmar que esta decisión sea una consecuencia directa de la guerra, dado que las condiciones económicas influyen notablemente en este aspecto, es claro que la sensación de pérdida de control, de inseguridad e inestabilidad, sí derivan directamente de la continuidad y del recrudecimiento del conflicto armado, y por consiguiente, del sentido del mañana, de los hijos y de la vida misma. Luego de la masacre, los adultos

manifiestan de forma generalizada, una enorme preocupación respecto a los niños. Las muertes de niños, niñas y adolescentes, los sufrimientos vividos por ellos durante el desplazamiento, la falta de opciones claras frente al futuro, y las críticas condiciones en las que viven y que se agudizan con la presencia de otras familias desplazadas de corregimientos vecinos, hacen inevitables estas preocupaciones.

2.1. Sobre las condiciones socioeconómicas

Hombres y mujeres sobreviven en una economía rural de siembra y cosecha, de pesca y caza estacionales, que los hace movilizarse en la zona. Aunque los espacios de mujeres y hombres son independientes y generan poderes distintos, pueden asumir las mismas funciones en cuanto al sustento de su grupo familiar, ya que desde niños los afrocolombianos del Chocó aprenden a realizar labores propias de la economía rural. No es un impedimento aprender a pescar, sembrar, cosechar, trasmallar, o “echar canalete” por ser mujer; una alta proporción de madres solteras debe hacerlo, incluso estando casadas ayudan a sus maridos en las arduas labores.

Dentro del espectro de ocupaciones laborales, el empleo en la región es reducido y limitado a cargos en el área de servicios. En un rango aparte están los docentes y los líderes comunitarios. Otras labores desempeñadas como oficios varios y que no necesariamente representan un salario, son los oficios de las amas de casa, de los jornaleros y la caza.

Ocupaciones como la pesca, la caza, la agricultura y las labores relacionadas con la madera se encuentran gravemente afectadas por la dinámica del conflicto armado. La inseguridad que se percibe impide la movilización y el trabajo en las parcelas. Las pérdidas de herramientas y medios de transporte ocasionadas por los enfrentamientos de los grupos armados y los desplazamientos de la población han dejado a los pobladores sin los elementos indispensables para el trabajo.

Asimismo, los cambios socioeconómicos son bastante notorios y están relacionados con la disminución de los ingresos y por ende, con las precarias condiciones de vida de la población. Antes de la masacre la sobrevivencia de los núcleos familiares implicaba el desarrollo de varias actividades productivas a la vez, pero en la actualidad, frente al contexto existente, esa opción se ha reducido. Los hombres, antes salían a buscar el sustento y ahora están impedi-

dos para realizar las labores productivas lo que ha significado una enorme falta de ocupación. Las mujeres, que por lo general no desempeñaban labores remuneradas, ahora se ven ante la urgencia de conseguir lo básico para el hogar.

Los datos sobre ingresos percibidos entre las familias entrevistadas, ilustran la crítica situación por la que atraviesan las familias. Antes de los sucesos violentos, algunas de las familias que recibían ingresos superiores a los \$600.000 (generalmente empleados, docentes o familias que juntaban varios aportes de sus integrantes) o entre \$300.000 y \$600.000, ahora tienen un ingreso mensual de \$150.000 a \$300.000. El número de familias que perciben menos de \$150.000 es mayor y más crítico si se tiene en cuenta la cantidad de miembros del hogar y el costo de vida en la región.

En cuanto al nivel de escolaridad de las personas de la muestra, se encontró que el 5 % ha cursado algunos grados de primaria y el 13% la secundaria incompleta, sólo un 6% ha terminado la primaria y un 8% la secundaria; el 9% de la población es analfabeta y otro 8% asiste a educación preescolar; sólo el 2% ha cursado estudios universitarios.

La inexistencia de escuelas y colegios en condiciones adecuadas para el funcionamiento (carencia de mobiliario, de recurso humano y de materiales) explican de cierto modo las limitaciones en el servicio educativo y su baja calidad y cobertura a pesar de la alta demanda.

El tema de la prevención en salud y calidad de la atención es bastante precario. En Bellavista existe un puesto de salud con dificultades en su funcionamiento. Sólo hasta el primer semestre de 2003 la entidad competente al nivel regional (Dasalud) dotó de algunos materiales al centro que aún siguen siendo insuficientes para brindar tratamientos adecuados y responder a la alta demanda del servicio.

Lo anterior sumado a que la agudización del conflicto armado complica la atención de los casos de urgencias; ya que además de las distancias, la situación de orden público ha impedido el traslado de los enfermos al puesto de salud, situación que en algunos casos ha ocasionado la muerte de varias personas.

2.2. Sobre la articulación de las unidades familiares y las redes de apoyo

La forma como se constituye la familia negra del Medio Atrato tiene gran importancia en la dinámica que desarrollan estas comunidades; las características que ha adquirido el poblamiento, la posesión de la tierra, la producción y la organización religiosa, social y política está definida por los vínculos que se establecen entre estas redes familiares.

“Gracias a los múltiples lazos de parentesco que se tejen en la familia extensa ha surgido la forma particular en que las comunidades se han apropiado del territorio en el Medio Atrato. La ubicación en línea de los poblados, al borde del río, está basada en una red de parientes con los que se comparte un sector del río a partir de un “tronco familiar” o apellido, del cual se desprenden los demás... El sistema de parentesco también está relacionado con la forma de organización social que han construido las comunidades y que determina el papel que cada miembro de la comunidad desempeña en el trabajo que realiza” (Cocomacia, 2004: 69).

En la región se corrobora la existencia de fuertes lazos de solidaridad y de apoyo ante diversas situaciones que operan como mecanismo de supervivencia colectiva: en el cuidado de los hijos, en la enfermedad, en los rituales de nacimiento o de muerte, en el trabajo agrícola, en las festividades religiosas o celebraciones comunitarias y, por supuesto, ante eventos críticos violentos (la masacre, el desplazamiento). Las principales redes de apoyo antes, durante y luego de los violentos sucesos vividos, se refieren a las redes vecinales y familiares, y también de amigos.

La cohesión tradicional se sustenta en la compleja estructuración de las redes familiares, recordando que éstas no se limitan a la consanguinidad sino que también se refieren a relaciones de padrinazgo, paisanaje, crianza, compadrazgo y afinidad; por lo tanto, situaciones como la fragmentación de esas redes en el caso de algunas familias que decidieron no retornar a la zona del Medio Atrato o de otras que se separaron internamente, dejan serios interrogantes sobre el devenir de esta comunidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se hace un análisis de las dinámicas que generan en las familias la masacre, el desplazamiento y el retorno de la población.

2.3. La masacre, los daños, pérdidas y recomposiciones familiares

Los cambios en la estructura y en los roles de la familia se refieren a las ausencias generadas por la muerte de los familiares durante la masacre. Las pérdidas de las familias son múltiples y heterogéneas ya que la muerte afectó a la población de manera indiscriminada; no obstante, las cifras indican que un número apreciable de muertos fueron niños y niñas, cerca de 44⁸. Este hecho sugiere que la mayor parte de los duelos y de los cambios en la estructura familiar se concentran en los padres y madres que perdieron a sus hijos e hijas.

En las familias donde murieron varios de sus miembros durante la tragedia del 2 de mayo de 2002, las pérdidas múltiples⁹ han generado una fragmentación en la red de parentesco, puesto que varios de sus miembros se han dispersado hacia otros lugares.

Los cambios introducidos en la familia a partir de las pérdidas de los familiares tienen que ver con las modificaciones de los roles de padres, hijos y hermanas. Por ejemplo, en algunos hogares en los que fallecieron los padres, los hijos e hijas han tenido que asumir el cuidado de sus hermanos menores, aunque, desde edades tempranas esta crianza es asumida con ayuda de la familia extensa y de la comunidad que los rodea.

En el caso de las mujeres cuyo compañero falleció, éstas deben asumir de forma simultánea el rol de proveedoras, el doméstico y el de crianza. En estas situaciones uno de los hijos o hijas u otro familiar asume el rol del padre determinando una transformación familiar, que permita suplir la ausencia de éste. En otros casos, con el fallecimiento del padre o del proveedor, es usual que se apele al respaldo de los hijos hombres-mayores, pero son las mujeres

8 Debido a las deficientes acciones en el proceso de reparación a las víctimas, el número de personas muertas es aún indeterminado. Las distintas fuentes varían sobre estos datos (Véase Anexo No. 2).

9 Se presentan casos de personas que perdieron más de 20 miembros de su grupo familiar.

madres quienes continúan asumiendo esta responsabilidad en primera instancia.

Cuando la muerte se refiere a la ausencia de la madre, el rol doméstico queda vacío tanto en el ejercicio de las labores prácticas como en el soporte afectivo de crianza y socialización que la mujer desempeñaba, razón por la cual las hijas mayores asumen el cuidado de la familia o bien, se dan procesos de recomposición familiar con una nueva unión contraída por el padre.

En el caso de los ancianos y ancianas que murieron, la familia extensa ha sufrido una abrupta recomposición, puesto que los hogares se organizaban en torno a ellos y ellas, como ejes centrales de la familia extensa. Ante su ausencia, el legado, la herencia cultural y la tradición de la comunidad están en riesgo, puesto que a diferencia de las pérdidas de padres o madres que pueden ser remediadas de alguna forma por otras personas que asumen esta función; en el caso de los abuelos y abuelas el rol no puede ser reemplazado, ya que se requiere una cualificación del saber tradicional que solamente es adquirido por la edad y el conocimiento acumulado, de acuerdo con los preceptos culturales asumidos por el grupo.

Si bien se ha hablado de pérdidas en vidas humanas que implican cambios en las estructuras familiares y en los roles sociales, también se presenta la situación de los *heridos* del 2 de mayo, que son casi tantos como el número de muertos¹⁰, y que aún no han sido reconocidos como víctimas. Muchas de las personas que se encontraban en la iglesia sufrieron lesiones personales de consideración que repercuten ostensiblemente en su proyecto vital. Estas personas además de afrontar los duelos de sus familiares y vecinos muertos, deben asumir el dolor y las molestias cotidianas de esquivar las alojadas en diferentes partes del cuerpo, lesiones auditivas y visuales, mutilaciones de miembros superiores e inferiores, cicatrices y señales de cirugías, entre otras. Resulta preocupante que además de los hechos ocurridos, estas víctimas no hayan contado con la atención médica y psicológica debidas.

En algunos casos, las personas que sufrieron heridas se vieron imposibilitadas para continuar ejerciendo la labor de sostenimiento del hogar, por lo que otro familiar debió encargarse de proveer a la familia.

10 Véase Anexo No. 2.

“Claro, no me pagaron completo porque no había trabajado todo el tiempo; y sabiendo que yo vine fue enferma... Tuve múltiples lesiones en el cuerpo, en el lado derecho. Todavía tengo esquir las... Mira este lado. Este lado, el lado derecho se me entumece. Me duele mucho. Mi hijo también, el cuarto, también fue lesionado. Una piernita. Tiene siete años. Aquí en Quibdó soy yo la que sostiene a la familia, porque el papá de él se fue y yo cómo hago con estas lesiones. No quiero regresar. La verdad es que no he decidido regresar porque las cosas allá no se han arreglado. Aunque tratan de invisibilizar a uno diciéndole que las cosas van a cambiar, que eso está bueno, que no, que esto, que lo otro. Que el gobierno allá, allá dizque le va a colaborar a uno... que acá no le colaboran en nada”. Mujer desplazada en Quibdó, 2003

“Ya llevamos casi dos años y todavía me duele la pierna en donde tengo la esquir la. En Quibdó me dijeron que si no me iba para Medellín podía perder la pierna, pero dígame usted cómo hace uno si no tengo plata para el transporte y menos para quedarme allá, además una hija que perdió los dedos de su pie, yo no me puedo ir y dejarla sola, a mí me toca estar pendiente de ella todo el tiempo. Yo no vivo en paz pensando qué va a ser de mi hija si yo no estoy, si me enfermo, además qué vida es esa la de mi hija [...]. Dios nos libre de otro enfrentamiento aquí en Bellavista, dígame usted cómo podemos nosotras salir corriendo”. Mujer, Bellavista, 2003.

2.4. El desplazamiento y el retorno: vivencias e impactos familiares¹¹

El éxodo generado por los hechos del 2 de mayo implicó el desplazamiento masivo de 1.744¹² familias (de once corregimientos) de los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte hacia la capital Quibdó. Las razones de la huida

¹¹ Las reflexiones que se plantean en este aparte recogen la evaluación realizada en el marco del proyecto: Evaluación de los procesos de retorno conducidos por el Estado colombiano. Instituto Latinoamericano de Estudios Legales Alternativos, ILSA – Universidad Nacional. Diciembre 2004 – Junio 2005.

¹² Rut Informa, Boletín especial Bojayá, estudio de caso No. 4, julio de 2002.

expuestas por las familias fueron las siguientes: los combates un 42.39%, el miedo un 38.65%, las amenazas un 3.25% y los asesinatos un 2.62%¹³, siendo por tanto la violencia generalizada en el Medio Atrato la principal causa de expulsión. El éxodo se desarrolla colectivamente debido a las amplias redes de parentesco que sustentan el tejido social de estas comunidades. Una de las mujeres desplazadas en Quibdó expone esta circunstancia de la siguiente manera: “Nosotros nos desplazamos en comunidad, todos juntos, al ver esa tragedia que sucedió en Bellavista y es que fue un dolor muy grande para todos, casi todo el Medio Atrato se desocupó porque aquí nos gusta estar en comunidad, así que si sale algún pariente desplazado nosotros salimos con él porque es de nuestra familia, no nos gusta quedar nos solos”. Mujer desplazada en Quibdó, 2003.

De acuerdo con la percepción de las familias, la proporción de entidades nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales que atendieron la emergencia es la siguiente: de las entidades del Estado un 53.79% (42.92% de la Red de Solidaridad Social, 0.47% de la Secretaría de Educación, 2% de la Secretaría de Salud y 8.04% del ICBF); de la Cruz Roja Nacional e Internacional 25.07%; de la oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, 4.11%; de las organizaciones no gubernamentales 0.06%; de entidades eclesiales 25.66%; y de las redes de familiares y conocidos 17.61%¹⁴. Con respecto al tipo de atención brindada, la encuesta que realizó el Secretariado Nacional de Movilidad Humana encontró que un 86.61% brindó alimentación, un 21.71% salud, un 8.21% alojamiento, un 7.54% transporte, un 9% menaje de cocina y menos del 10% las ayudas recibidas en cuanto a documentación, asesoría jurídica, educación y trabajo¹⁵.

Pese al gran número de agentes institucionales que acudieron a atender la tragedia en Quibdó y a las altas inversiones en la zona, los impactos no fueron igualmente contundentes. La evaluación que realizan las personas y los diversos funcionarios que participaron en este proceso habla de intervenciones limitadas, descoordinadas, con incoherencias en los abordajes, fundamentalmente asistenciales y puntuales que no lograron superar las condiciones de vulnerabilidad de la población. Profesionales de ONG definieron la situación de la siguiente manera: “Las acciones principales se centraron en la recreación de

13 *Ibid.*

14 *Ibid.*

15 *Ibid.*

niños y niñas, ayuda humanitaria (alimentos) y realización de talleres sobre diversos temas, principalmente de carácter informativo, todos fundamentalmente descoordinados” (Dos Mundos, 2002:8). “En Quibdó nos encontramos con un conglomerado de personas recién llegadas provenientes de diferentes zonas del país y dispuestas a ayudar, pero sin mayor claridad sobre lo que podían y debían hacer [...] por ejemplo, las diferentes formas de asumir lo psicosocial hicieron posible que los miembros de las comunidades recibieran en un mismo día charlas sobre violencia intrafamiliar, preparación de suero, control natal, atención terapéutica, talleres sobre miedo y duelo, en fin sobre todo”. (Citado por Nieto y Bolívar, 2003:69).

Así, por ejemplo, siendo altamente representativo el número de personas que se alojaron en casas de parientes y amigos, la atención se concentró en los albergues temporales lo que ocasionó deficiencia en la cobertura y la invisibilidad de un gran número de personas desplazadas, a tal punto que hasta en el mes de marzo de 2004 aún no le había sido reconocida la condición de desplazadas a 72 familias¹⁶. Por otro lado, la focalización de la atención en las familias desplazadas sin tener en cuenta las condiciones de exclusión de las comunidades de recepción, generó un agotamiento rápido de la contención brindada por las redes de apoyo de familiares y conocidos que generalmente están situadas en los sectores marginales de Quibdó. “Nosotros llegamos donde la familia, pero ellos también estaban alcanzados igual que uno, uno le da gracias a Dios por la ayuda que nos dieron, pero uno se sentía como mal, y pues el pescao ni el plátano lo consigue uno gratis en Quibdó, así que nosotros decidimos más bien fue regresar nos”. Mujer, Bellavista, 2003.

Frente a la complejidad del desplazamiento, la situación de las familias está atravesada por la incertidumbre permanente sobre la subsistencia inmediata, el dolor de las pérdidas sufridas, y el hecho de tomar decisiones como el retorno o no a sus lugares de origen, que influye sobre el proyecto de vida familiar.

Las decisiones sobre el futuro familiar son críticas en este momento. Este proceso tiene que ver tanto con las condiciones objetivas de acceso a una información veraz sobre el estado en el que se encuentran los bienes materiales abandonados en los lugares de origen, la seguridad y las garantías de

¹⁶ Datos recogidos de la entrevista colectiva con miembros del Subcomité 2 de mayo en Quibdó, abril de 2004.

protección y no repetición de los hechos, así como con la posibilidad de generar alternativas viables de vida a partir de la reestructuración de las relaciones significativas de orden económico, político, social y cultural afectadas por el desplazamiento. Es decir con garantizar las relaciones que permiten contar con recursos, redes de apoyo e intercambio comunicativo, afectivo y emocional para participar activamente en la vida económica, social y cultural a través del conocimiento y el saber específicos que posibilitan el reconocimiento, el prestigio y un lugar en la comunidad.

En este sentido, las familias víctimas de los hechos ocurridos el 2 de mayo, plantean como elementos decisivos de su permanencia en Quibdó los siguientes aspectos:

- La red familiar con que se cuenta. Las familias afrodescendientes conforman estrechos lazos colectivos a través de las redes de parentesco establecidos a lo largo del río. En la interacción que desarrollan sobre estas redes construyen procesos productivos, generan formas de comunicación, solidaridad y confianza, participan en lo político y construyen espacios culturales y universos de sentido. Por lo tanto, la decisión de retornar depende de la ubicación de cada núcleo familiar respecto a la red de parentesco a la que pertenece.

“La familia es una de las cosas que más se extraña y que uno vivía pues como ahí todos en familia. Por acá son poquitas las personas, pues que uno mantiene la misma relación que mantenía allá abajo, ¿ya? Que uno por ejemplo vivía que aquí vive mi mamá, que aquí vive mi hermanita, así. Todos juntos ahí, ¿ya?”. Mujer desplazada en Quibdo, 2003.

“Y ahora que yo estoy aquí en Quibdó, pues yo no retorné, pues estamos aquí casi todos, los que quedábamos en el río decidimos no volver, así que uno cada dos, tres días, nos estamos entrevistando, cambiando ideas y... para mí, pues me siento bien aquí donde estoy porque como le repito cada dos tres días me estoy viendo con mi familia”. Hombre desplazado en Quibdo, 2003.

- Los referentes simbólicos de pertenencia que en las culturas afrodescendientes otorgan un lugar a cada individuo en un terri-

rio específico. En la relación que las familias establecen con el lugar, construyen su ciclo de vida, determinan procesos de autodefinición personal y consolidan referentes comunes sobre los cuales comparten un universo identificable de significados. Por lo tanto, quienes se ven forzados a desplazarse quedan literalmente arrancados de las bases territoriales donde está su cultura local. La decisión del retor no depende de la manera como cada individuo asume creencias colectivas como el volver a la tierra donde están enterrados los ancestros, o al lugar del ombligamiento.

“Dicen que el territorio es como parte de uno mismo y así tiene que ser porque uno es tierra. Y dicen que uno donde nace le sepultan lo que es parte de uno que es el ombligo. Y mi ombligo está enterrado en esta tierra. Y entre nosotros acá eso es una tradición. ¿Por qué no me dio por irme para otra parte después de haber estado por fuera de mi tierra? Por mi ombligo. Dicen que a donde lo entierren a él tienen que enterrarle cualquier árbol productivo como para que el pelado ese tuyo... y tradición de uno acá. Ya cuando a uno lo entierren a algo aquí le entierran una palma de coco, siembran guanábano. La placenta, antes, o en mi tierra allá en Bojayá, todavía acostumbran a eso... eso no lo botan al río, eso también lo entierran, porque eso dicen que eso es parte de uno y como tal, no deben de tirarlo al río. Tienen que, como cuando a uno, cuando hay la oportunidad, no lo botan al río sino que lo entierran. Entonces, también hace parte de uno y por eso no lo botan. Al lado de mi ombligo sembraron coco pero eso ya se murió... Ya se murió esa planta y han sembrado otra y otra... imagínese cuántas no habrán sembrado. Ve... ya han sembrado más de una”. Mujer, Bellavista, 2003.

“Yo retorné porque me hacía falta la ciénaga y este río, y porque acá puedo conseguir la comida por lo menos, y no voy a ir al nuevo pueblo porque allá el río queda lejos de las casas y yo estoy acostumbrada a sentarme acá y pasar mirando la tarde...”. Mujer, Bellavista, 2003.

■ La manera como cada uno de los miembros de la familia se enfrenta durante el éxodo a experiencias que cuestionan los saberes tradicionales asociados al ser hombre, mujer, niño, niña. Antes del

desplazamiento tanto hombres como mujeres compartían prácticas productivas para la supervivencia de la familia y la mujer de manera particular se especializaba en la manutención del hogar. En la ciudad de Quibdó las posibilidades de trabajo asociadas a las labores productivas no son las mismas, exigen otro tipo de saberes, pero permiten, sin embargo, que las mujeres provean económicamente el hogar. Esta situación, asociada además a la existencia o no de espacios de socialización para los niños y niñas con sus grupos de pares, así como la percepción de seguridad que tienen tanto hombres como mujeres llevan a que, por ejemplo, los hombres prefieran retornar debido a las dificultades de inserción productiva que encuentran en la ciudad y además perciban que la seguridad depende más de lo que puedan hacer por sí mismos. Para las mujeres la posibilidad de retorno es relativa, está asociada con la oportunidad de recibir ingresos en la ciudad, con la distancia que se tenga respecto a su red familiar y con la idea de cuidar a sus hijos e hijas en un contexto adverso e inseguro que no garantice su buen desarrollo.

“Mire lo que pasó en Quibdó, hizo que como yo no conseguía trabajo de aserrador y mi mujer se sentía intranquila, muy nerviosa en Bellavista, pues nos separamos, ella se quedó en Quibdó y yo decidí regresar me... Es que ella en Bellavista no dormía, no podía reconciliar el sueño. Echaba un sueñito y cuando se despertaba ya... Y como siempre, usted sabe que la fuerza pública a veces hace disparos, en la noche y todo eso. Apenas ella oía un disparo ya no dormía más, ya era a trasnocharse al pasar de la noche. Y en Quibdó ella duerme su sueño tranquilamente; no tiene esa preocupación, ese temor...”. Hombre desplazado en Quibdó, 2003.

“En Quibdó casi no tengo amigos, no puedo salir a la calle porque me cogen los carros y hay muchos ladrones, allá matan mucha gente, así que me vine mejor para mi río”. Niño, Bellavista, 2003.

“O sea, una de las cosas que me ha parecido buena y por eso me quedé en Quibdó es que por acá tengo la oportunidad de estudiar. Y de que mis hijos... pues... se crían con un ambiente diferente al de estar en el campo. Porque no es lo mismo un niño en

el campo a un niño que se críe en el pueblo. Son dos cosas muy diferentes. Más estructurado. Un niño del campo viene y dice: Ay, ¿cómo se llama ese programa? Y el de acá se sabe todos los programas. Ay, mirá que este es este... Sale a la calle, no le tiene miedo a un carro, sabe cruzar la calle. Un niño que viene de por allá, que se cría allá abajo, o sea, cruza las calles con muchas dificultades. No es lo mismo un niño que se cría aquí. Mira, ella tiene un niñito que se va con este... Ellos dos solos... a la escuela y la escuela queda por allá lejos. Se van de aquí solos. A veces el niñito de ella se venía solo aquí a la casa cuando ellos vivían por allá lejos. Y un niño que venga de allá, del campo, así, no es capaz de hacer lo que hacen ellos. O sea, se crían más estructurados. O sea, esa es una de las cosas que más me ha... llamado la atención. Que la verdad es que el trato para uno no es el mejor”. Mujer desplazada en Quibdó, 2003.

- La existencia de alternativas viables de futuro en la ciudad para la familia en su conjunto.

“Yo volví porque de todas maneras el pueblo siempre le brinda a uno mejores condiciones. Mi esposa se quedó en Quibdó porque yo tengo 4 hijos con ella y nos queda muy difícil en el caso en que allá una emergencia salir corriendo con todos. Eso lo aprendí de lo que vivimos el 2 de mayo, así que mejor yo me quedo aquí, trabajo y le mando a ella una platica de vez en cuando”. Hombre, Bellavista, 2003.

- Las características de funcionamiento de la política de atención a la población desplazada. A la falta de voluntad política para la prevención de nuevos hechos violentos, a la inexistencia de mecanismos para la superación de la impunidad, a la carencia de programas integrales para la atención y a la descoordinación institucional, se suma una ayuda humanitaria limitada que puede prolongarse tres meses más, dependiendo de la decisión de las víctimas de retornar o de reubicarse, condicionando de esta manera a la población a retornar para acceder a algunos servicios ofrecidos por el Estado.

¡No! ¡Uno dice no! ¡Yo no! Por que el retorno como es voluntario, mas no obligatorio. Pero algunas entidades sí... yo creo que pensaban que el retorno sí era obligatorio porque le decían a uno: ¡Ah!... si se quedan aquí no les dan tal cosa, sino si se van para Bellavista que hay una ropa, llegó una ropa, llegó una comida. Pero si no se van para Bellavista los que se queden acá no tienen opción de eso. Que llegaron unos cuaderos y si no están en Bellavista, los que no están no les dan útiles, para los hijos. Que unos bolsos, que si no van para Bellavista no se les da... O sea, automáticamente lo están obligando a uno a que debe irse. Entonces uno decide: no voy, me quedo. Yo por una cosa de esas que me vayan a dar no voy allá, me quedo, además sé que todavía allá hay calentura, yo por eso decidí no arriesgarme con mis hijos y no me fui". Mujer desplazada en Quibdó, 2003

"...ya cuando al mes, el gobierno dice 'aquí la Red o cualquiera de esas organizaciones y la Cruz Roja trae una libra de arroz y una libra de frijoles', pues ¿qué pasa? A los 15 días o 20 ya no dan más de eso, entonces ¿qué hace la persona bien aburridos y lleva del monte y muerto de hambre? Pues regresarse acá que ahí tiene su anzuelito y pescado, o un indio con un plátano. Y si uno está de buenas uno le dice 'regáleme un plátano' y a uno se lo regala. Como también un amigo le dice 'aquí tengo dos plátanos, coja uno' y ya se lo come... Entonces, por esa causa se viene. Porque allá no puede subsistir se y tiene que venirse pa' acá. Aquí hay solidaridad. Eso es lo que hace regresar. Porque no crea: aquí donde estamos nosotros algunas personas que les ha tocado desplazarse, han regresado por esa causa, porque si allá pudieran vivir como se vive acá donde tienen sus fincas, sus casas y todo pues no se venían. Porque ¿quién se va a venir, pongamos, después que ya se salió? Y volver a meterse. Eso no se meten. Aquí estamos nosotros, una comparación, y llega el Ejército y ¿qué pasa? Que a esa gente le da la gana de armar un chumbimbero aquí como la otra vez que murió un poco de gente y ¡se acabó! Entonces, ¿quién quisiera venir otra vez o regresar? Nadie piensa regresar. Pero eso los hace regresar, esa es la necesidad. Porque si se pone a robar, lo matan. Si se pone a robar, la ley lo mata porque está robando. Entonces, ¿qué hace? Echarse otra vez y que lo maten acá. Eso es lo único... Por eso es... ¿usted cree que eso lo

hace uno de buena voluntad? Eso lo hace contra su voluntad. Sabe que se va a morir pero pa' que lo mate el hambre y se viene pa' acá pa' que lo mate el plomo". Hombre, Bellavista, 2003.

■ La evaluación que cada quien hace de las condiciones de protección. Varias de las familias deciden retornar porque un significativo número de miembros de su red familiar deciden hacerlo y esta red es su principal referente de protección en el lugar. Para la mayoría, además, es importante contar con el apoyo permanente de instituciones acompañantes. También deciden retornar según hayan sido amenazados o estigmatizados por alguno de los grupos en confrontación; las familias y las comunidades objeto de estas situaciones, por lo general, decidieron no regresar a sus lugares de origen.

"Nosotros no volvemos por lo mismo que decía allí el compañero, porque no hay garantías para uno volver, lo mismo que usted decía, de estar con miedo, allá vamos a estar con la psicosis de que de pronto tales cosas se van a dar, porque en este momento del desplazamiento se llega a originar algunas... hasta peligro ¿no? porque sale un cuento que llegó fulano, que tal, y todo eso se va volviendo muchas veces problemas y muchas veces esas cuestiones se llegan a peligro hasta algunas personas a desaparecer, entonces, mirando todas esas cosas, nosotros hemos tomado esas decisiones, porque como le decía nosotros no hemos venido porque la debemos, sino porque el ejército allá nos haya dicho que nosotros somos guerrilleros, imagínese usted por eso nos bombardearon, y ahora qué tal, con los paramilitares, así cómo va volver uno, mejor que nos reubiquen". Taller con comunidades desplazadas en Bellavista.

"Nosotros volvemos siempre y cuando el equipo misionero nos acompañe, porque a ellos sí les hacen caso los grupos armados, a nosotros no, usted nos pregunta por la autonomía en medio de la guerra, y yo le respondo, la única autonomía que podemos hacer nosotros ahora es pedir que nos acompañen". Taller con comunidades desplazadas en Bellavista.

■ La superación de los impactos psicosociales que dejó la masacre del 2 de mayo. Las familias que tuvieron un mayor número de pér-

didadas en la masacre optaron por no retornar. La posibilidad de asumir los duelos permite retomar el control de la vida y participar activamente tanto en la reubicación como en el retorno. Superar el duelo pasa no sólo con contar con espacios para la escucha y la palabra, sino también con la existencia de condiciones que permitan hacer justicia, castigar a los responsables, dignificar a los muertos y generar memoria colectiva para que los hechos no se repitan. Como lo menciona una de las víctimas, volver tiene que ver con no olvidar.

“¡No! Uno por acá trata pues como de olvidar se pero llegando allá lo tiene todo vivo. Yo no entro a la iglesia. Mire... yo... ahora que bajamos en enero, que estuvimos haciendo eso... yo me sentía tan mal dentro de la iglesia, que yo lloraba, yo miraba el sitio donde estaba sentada... donde estaban cada una de las personas que se habían muerto, donde estaba un montón de carne cuando salí de la iglesia, yo miraba todo eso. Recor daba donde había visto un niño que apenas tenía un cuartico, era un cuartico y se movía entre una matera. Yo lo cogí así y lo levanté. Y apenas era un cuartico lo que él... Yo miraba todo eso. Entonces todo se me vino ahí. Yo empecé a llorar. Yo en la misa no era capaz de salir me a la puerta. Por el miedo, porque yo dije... Y la otra gente... Dizque ay, vos no te vas a aguantar. Pero no es lo mismo uno vivir en carne propia lo que tuve que vivir allá. Porque las personas que llegan, llegaron después del suceso, pero uno vivió fue todo ahí”. Mujer desplazada en Quibdo, 2003.

Teniendo en cuenta los aspectos que influyeron en el proceso de toma de decisiones para el retorno, se encuentra que pese a que las instituciones del Estado definieron este proceso como voluntario¹⁷, las familias desplazadas no tuvieron opciones diferentes para asumir el control de su entorno, ni contaron con elementos suficientes para descifrar y alterar a su favor la situación que estaban viviendo.

17 La Red de Solidaridad Social en su informe del 25 de julio de 2002 plantea: “El retorno de más de 1.500 familias de Bojayá fue voluntario, concertado y coordinado con la Red de Solidaridad Social”. “500 familias reciben pollos, gallinas, semillas, herramientas), tomado de [http:// www.reliefweb.int/](http://www.reliefweb.int/).

El proceso de retorno se desarrolló entre la tensión de mantener la cohesión familiar y los peligros de fragmentación de la misma; de hecho, algunas familias retornaron en su totalidad y otras lo hicieron por partes en respuesta a sus necesidades, intereses, pensamientos y sentimientos.

El retorno también estuvo marcado por intensas emociones ambivalentes: por un lado, la alegría de volver, pero a la vez la incertidumbre acerca de cómo estarían las cosas y la tristeza de enfrentar las ausencias y el dolor por las mismas. Algunas personas consideraron el regreso como la única opción posible para sobrevivir, pero no la ideal.

“...la gente regresó por necesidad, en el pueblo finalmente no se muere de hambre, pero qué ganas se pueden tener de volver cuando lo que lo espera es la soledad de los familiares muertos y el miedo de que en cualquier momento se arma el chumbimbero”. Hombre anciano, Bellavista, 2003.

“Fue durísimo llegar y empezar de nuevo, el gobierno nos prometió muchas cosas y hasta ahora no se ha visto nada. La reubicación es lo único que nos tiene aquí, esa es la esperanza de nosotros, la fuerza para empezar, por que se sabe que va haber trabajo y habiendo trabajo, pues uno trabaja ¿no?... Yo todavía tengo la duda, eso todavía no es claro, porque no se ven resultados, imagínese que llevan dos años y nada de resultados”. Hombre, Bellavista, 2003.

“...Tocó trabajar muy duro para rehacer viviendas, limpiar, limpiar las fincas, trabajar en lo que se pueda. Se pensó en olvidar un poco lo ocurrido y pensar en cosas nuevas; pero son cosas que no se olvidan; de todas maneras se hacen esfuerzos...”. Mujer, Bellavista, 2003.

2.5. Las familias y la transformación de roles

Como puede notarse, son múltiples las transformaciones provocadas en la familia a raíz de la masacre, el desplazamiento y el retorno. Además de los desarraigos y de las fragmentaciones descritas, son evidentes los cambios de roles asignados históricamente a hombres y mujeres. Para las mujeres, el trabajo remunerado durante el desplazamiento, les permitió participar con un

grado mayor de independencia en el sostenimiento económico del hogar y además, decidir sobre el destino de estos recursos. En cambio para los hombres su inserción en el mercado laboral de Quibdó fue más difícil porque implicaba el aprendizaje de oficios propios de la ciudad y diferentes a su rol de proveedores en el campo. Esta situación ubica de manera distinta a hombres y mujeres frente a la percepción del retorno. Por eso el retorno para algunas mujeres trunca la posibilidad de tener dinero propio, de tomar decisiones y de ejercer poder. .

La transformación de los roles tradicionales ejercidos por mujeres y hombres, sumado a las precarias condiciones económicas de algunas familias desplazadas en Quibdó y a la fragmentación de las redes de parentesco, determinaron que algunos hombres retornaran solos a Bellavista, dejando a sus mujeres e hijos en Quibdó, bajo el compromiso de continuar apoyando económicamente a sus familias.

Sin embargo, la continuidad del conflicto armado en la zona del Medio Atrato ha alterado los procesos productivos tradicionales para el sostenimiento familiar. Las labores agrícolas y agropecuarias cada vez más son sustituidas por actividades comerciales (instalación de tiendas de abastos, o distribución de combustible) en la cabecera municipal o por la tala de bosques en los territorios colectivos. Esta situación se ha generalizado porque estas actividades permiten mayor movilidad de las familias en caso de amenazas para sus vidas —sin implicar grandes pérdidas en bienes y dinero—, en tanto que las actividades tradicionales requieren estabilidad y períodos diferenciados de inversión y de ganancia en el proceso productivo, lo que genera grandes pérdidas en el caso de los desplazamientos forzosos.

Para las mujeres que se quedaron en Quibdó, se evidencia, una sobrecarga en las labores asumidas, ya que deben destinar parte del tiempo a la consecución de dinero, además del cuidado y la crianza de los hijos que en algunos casos, es soportada por los hermanos mayores ante la ausencia de la madre.

Ante el retorno de varios hombres solos a Bellavista, estos se han visto obligados a suplir la ausencia de la mujer de varias formas:

- Desempeñando el rol tradicional de la mujer, es decir, aprendiendo a cocinar, a lavar y a arreglar la vivienda.

- Contratando a una de las mujeres que retornaron al pueblo para que realice las labores domésticas básicas.
- Estableciendo una nueva relación con otra mujer para suplir las necesidades domésticas, configurando un nuevo núcleo familiar.

2.6. Transformación de los procesos de socialización y pautas de crianza

Si bien la madre cumple un papel fundamental en la crianza, este es un proceso en el que tradicionalmente participa la familia extensa. Tanto la abuela y el abuelo, como los tíos y las tías se convierten en referentes importantes en la formación de los niños y niñas. Incluso podría afirmarse que la crianza es un proceso que desarrolla la comunidad:

“Mire que, de todas maneras, uno actualmente ve que los niños son en las familias, que también las abuelas participan mucho de la crianza de los hijos, porque las madres son muy jóvenes, pero los niños son comunitarios... Por eso es como otra parte de la cultura, aquí no hay niños limosneros, no hay niños mendigos, no hay niños de la calle, porque como se maneja el concepto de familia extensa, entonces si en su familia no tiene el tuco, en la casa mía sí tenemos tuco, entonces yo le doy el tuco al niño, en cualquier casa el niño puede comerse su tuco”. Miembro de comunidad religiosa.

Para quienes decidieron quedarse en Quibdó, la crianza de los hijos se transforma y se limita a la familia nuclear ya que no cuentan con el apoyo de la familia extensa. En Quibdó, la crianza se realiza en medio de situaciones ambivalentes: por un lado, hay confianza en la ciudad como un espacio que permite una mejor “estructuración” de los niños y niñas, debido a que se cuenta con nuevos y mejores métodos de aprendizaje. Por otro lado, persiste el temor por las condiciones de inseguridad en la ciudad lo que lleva a restringir la salida de los niños y niñas a la calle. A su vez, niños y niñas extrañan el juego en su territorio (ríos, lomas, animales), aunque en la ciudad también encuentran elementos que seducen, como los juegos electrónicos, los computadores y los carros.

En el caso de los que retornan, la responsabilidad de la crianza, que tradicionalmente ha sido asumida por madres, abuelas y padrinos con el apoyo de la comunidad, es interferida ahora por agentes externos como las fuerzas militares. La autoridad conferida a estos actores del conflicto armado se debe al temor y al carácter guerrero que implica su investidura, lo cual le otorga efectividad a las sanciones que aplican a los niños y niñas.

“Vea usted, ha visto que ese niño no tiene orden, todo el día esta en su calle, se baña en su río, por ahí come, y vea yo lave y lave en mi río, cuando a veces van a llamar me y a contarme que está en la cancha agarrado con otro pelao. Vio que ayer se hizo una chamba en la cabeza, por estar en su fútbol, peleando por el balón, un chino pasó y le tiró una botella en la cabeza [...] del centro de salud me llamaron para que lo fuera a mirar. Pues, estoy cansada, porque después de lo de la pipeta yo veo que con ese pelao no hay ley, así que le dije que lo iba mandar a encerrar en el calabozo de la policía. El comandante me ayudó y allá está. Yo le dije al policía que si lo volvía a ver por ahí en su desorden lo podía encerrar”.
Mujer, Bellavista, 2003.

Algunas madres desesperadas ante la rebeldía de sus hijos, utilizan la amenaza de este castigo para aterrorizarlos y lograr que respondan con las tareas asignadas: “Se hace caso o se llevan donde los soldados para que los ajuicien”. Esta situación denota un traspaso de la autoridad, personificada anteriormente en las ancianas y en las tías —como personas que representaban el saber tradicional—, hacia los actores armados que hacen uso de su poder físico y militar en la zona. Teniendo en cuenta que dentro de estos nuevos referentes de autoridad y respeto colectivos se incluye al actor armado, no es difícil que las jóvenes sientan atracción por estos actores externos con la idea de buscar reconocimiento social; encuentran al soldado como un tipo ideal de hombre, que reúne dos características: por un lado, poder y masculinidad, y por otro, como “paisa¹⁸”, representa una posibilidad de ascenso social y referente cultural superior.

Las relaciones afectivas entre mujeres jóvenes y soldados de los distintos ejércitos que circulan por la zona ponen de manifiesto una dificultad para reconocer los límites entre la comunidad y los actores armados. Los soldados

18 El “paisa” se asocia al hombre blanco y antioqueño.

ahora hacen parte de la familia, lo cual los autoriza para recoger información, participar en los espacios de celebración, organización y decisión colectiva. Distintos analistas del conflicto armado han planteado que este tipo de relaciones aparentemente casuales, encubren estrategias de guerra que persiguen el control social y la injerencia del poder militar en la vida cotidiana de la comunidad.

En otros casos, el castigo físico cobra una significación diferente. Luego de la masacre algunos padres y madres evitan golpear a sus hijos e hijas, en consideración a las pérdidas de familiares o personas cercanas que perecieron. Al observar a los niños y niñas afectados por los hechos violentos y por el aumento de las presiones propias del conflicto armado, los padres reconsideran el uso del castigo físico como pauta tradicional de crianza.

Asimismo, los testimonios dan cuenta de una mayor permisividad de los adultos hacia los espacios de diversión de los jóvenes. Se dice que como la vida cambia de un momento a otro por la muerte, es necesario vivir con intensidad el presente: “Es mejor que se diviertan porque ahora la vida se le acaba a uno rápido”. Además, en varios núcleos familiares las situaciones de maltrato de pareja son cuestionadas a partir del hecho violento; algunos hombres han dejado de maltratar a sus compañeras porque la experiencia de la pérdida que han vivido otros, los ha llevado a cuestionar aspectos de su relación. “Él, después del 2 de mayo, dejó de maltratarme porque se dio cuenta de que yo hubiera podido haber muerto también”. De todas formas, en varios casos la violencia logra incorporarse en las discusiones familiares y en las sanciones verbales que ejercen los padres hacia los hijos: “Por qué te comportas así, si te hubieras muerto tú y no tu hermana yo viviría mejor, porque ella era más juiciosa”, o “si no te portas bien te voy a dar un pipetazo”.

3. Violencia y daño: una mirada a los sujetos individuales

“Después de la masacre Minelia, una de las locas del pueblo, quien sufre de esquizofrenia, se quedó con los muertos en la iglesia. Allí estuvo recogiendo pedazos de cadáveres y armando cuerpos de niños a los que les decía que se levantaran y corrieran”. (Citado en Bojayá-rostros y rastros, 2003:6).

Este epígrafe concentra el horror y el absurdo de lo ocurrido. Sirve de metáfora de la destrucción pero también de la tortuosa, lenta y a veces búsqueda-

da sin fin de la reparación, en una acepción muy concreta (rehacer los cadáveres y lograr la plena identificación de las víctimas) y en una más genérica sobre los daños de todo orden causados por los hechos del 2 de mayo.

“...le van quedando a uno lesiones en el cuerpo... pero las más graves son las lesiones en el corazón...”. Mujer adulta de Bellavista.

Las consecuencias psicológicas de la violencia sociopolítica (Herman, 1997:31-56) que ha azotado a la región del Medio Atrato desde hace varios años, incluyen síntomas emocionales del tipo ansiedad (miedo, hipervigilancia, expectativa aprehensiva, incertidumbre, ansiedad generalizada, temblor), y de tipo depresivo (“perdida de la ilusión por el trabajo”, tristeza, pérdida de ánimo, disminución del gozo, añoranza, sensación de vacío, desilusión por no haber sido escuchados, sentimientos de desprotección e indefensión, percepción de nunca poder recuperarse, pérdida de confianza en sí mismo, pérdida de esperanza, apatía). Además refieren insomnio, ilusiones, parálisis frente a la guerra, resignación a situaciones que se consideran límite, vivencias de injusticia; los niños se observan “como elevados”, los hombres consumen más bebidas alcohólicas y muchos se mantienen en silencio, “la gente como recogida y ausente”.

Los aspectos con los que se relacionan estos síntomas, es decir aquellos que los despiertan o mantienen activos, son de distinto orden. Entre los factores asociados directamente con la violencia, se encuentran los relatos de las experiencias emocionales vividas durante los sucesos del 2 de mayo, básicamente de intenso temor, indefensión y confusión; pero también la tristeza y la sensación de desamparo por la muerte de tantas personas, por no haber podido realizar los ritos funerarios tradicionales e imaginar las condiciones anómalas del familiar muerto y no poder hacer nada.

Otros aspectos se refieren además a las reminiscencias de la tragedia en lo cotidiano, acompañadas de manifestaciones emocionales principalmente de temor, por ejemplo, a entrar de nuevo en la iglesia o de tristeza al recorrer lugares donde murieron personas conocidas; el temor aumenta además, por la reactivación de los hechos que generan los “registros” (tiroteos intempestivos que lleva a cabo la Armada como parte de actividades que califican como acciones de seguridad). “Los llamados registros, (son) una especie de juego de guerra para mantener a la tropa en tensión y que despiertan a los vecinos en la

madrugada a punta de morterazos o de las ametralladoras instaladas en las lanchas piraña de la Armada”¹⁹.

Es reiterada la mención de incertidumbre generalizada por la posibilidad de repetición de eventos violentos similares con pérdida de vidas y desplazamientos forzados que los obliguen a abandonar todo y a truncar los proyectos de vida. Esta consideración, además de responder a las condiciones objetivas de la región, está basada en la percepción del absoluto desinterés de los actores armados por la población civil, evidenciada en los hechos de mayo de 2002. Sobre todo los jóvenes, se refieren a la situación de sumisión incondicional de la población civil frente al poder que confieren las armas, a las retaliaciones y a los posibles señalamientos como colaboradores del grupo contrario. También aparece de manera recurrente y sentida la restricción de la movilidad (especialmente por el río) en la zona, por el peligro que representa la navegación por el Atrato y sus afluentes, así como el estar por fuera de la casa después de las 10 de la noche.

Asociadas más con la tristeza y consideradas como pérdidas secundarias a los hechos especificados y a la presencia de actores armados en la región, se mencionan aquellas como el daño de las viviendas, la obligación de abandonar las fincas y consecuentemente, la imposibilidad de acceso no mercantil a los alimentos y al trabajo. También señalan pérdidas intangibles como la ausencia de personas (muertas o desplazadas) y de redes de solidaridad, la no celebración de las fiestas tradicionales de la comunidad, la disminución de actividades importantes como las deportivas, y la falta de oportunidades para los niños. Como dice un joven en Bellavista, “el ambiente ya no es sabroso”.

“Hubo mucho miedo en ese momento, yo me quitaba la ropa y no me daba cuenta de los nervios, . . . vivo muy asustada; no duermo como antes, a mí me dan muchos nervios, siente uno como si caminaran pero no es nadie, a media noche sentía como si me abrieran la puerta. . . la violencia nos dificultó con tantas muertes y no nos podemos desplazar como antes porque por un lado paramilitares y por el otro guerrilleros y como ya no se puede ir a las fincas sino que toca comprarles a los indios, y si no hay plata toca aguantar hambre”. Mujer, Bellavista, 2003.

19 Paco Gómez, en <http://www.revistacambio.com/html/cronica/articulos/931>

“...ahora silencio a las 10 u 11 [de la noche], a la gente le da terror salir de sus casas, a mí el temor me está matando. La gente tampoco tiene los mismos ánimos para las celebraciones, en parte por la presión que sienten y porque faltan muchas compañeras... Recuerdos muy dolorosos... No hay como el mismo gozo, se ha ido mucha gente”. Mujer, Bellavista, 2003.

“La comunidad no estaba acostumbrada a vivir esas cosas y está como esperando a ver qué pasa, paralizados con el argumento de la guerra... los que tenemos ánimos estamos aguantando, los que no, se van a aguantar hambre a una ciudad, a la prostitución, la delincuencia... Se puede pensar que tener que desplazarse es la ley de Dios, pero esa no es, eso es una injusticia”. Mujer, Bellavista, 2003.

“...todos han quedado afectados, tristes, los niños como elevados porque les hacen falta los que ya no están, algunos hombres se ponen es a tomar; se pasan trabajos porque no se puede salir igual que antes para la comidita, con la psicosis de encontrarse con alguien. Los indígenas, por ejemplo, ya casi no vienen porque les da miedo, ellos se echaron al monte cuando el 2 de mayo, les tocó trotar monte”. Mujer, Bellavista, 2003.

“...además la zozobra con lo de los “registros”... a pesar que se hicieron varias reuniones antes con los grupos para solicitar no ser incluidos en el conflicto, no fueron escuchados. Todos sufrimos porque todos perdimos, algunos perdimos más que otros. Ya no se harán más fiestas porque se han perdido los ánimos”. Mujer, Bellavista, 2003.

“...pues uno se limita más bien a estar callado, pues decir cualquier cosa puede luego usarse como prueba de colaboración y ser asesinado”. Hombre, Bellavista, 2003.

“Con la guerra esto se dañó, se pervertió”. Hombre, Bellavista, 2003.

Otras pérdidas mencionadas desde los hechos del 2002 son:

“El que tenía su forma se iba desplazando a Quibdó, a Medellín... la gente le fue perdiendo el amor a esto, los que no teníamos modo pues teníamos que estar aquí resistiendo, no hay mucho ánimo, ahora no tenemos nada que hacer”. Hombre, Bellavista, 2003.

“...cada vez que uno entra ahí [la iglesia] tiembla del miedo,... me dan como nervios y risa de los nervios. Es un dolor muy grande, aunque para los demás uno siga común y corriente, nadie ni nada me va a hacer sentir como antes... la pérdida de personas que... no han cometido pecado pa' que les hagan eso..., pero la alegría del pueblo no la han dañado, el pueblo sigue insistiendo en quedarse ahí”. Joven, Bellavista, 2003.

“...ahora con lo que pasó allá en la iglesia que era nuestro lugar de ensayo... no más de ver las varillas como quedaron, eso da tristeza... siento pues una esperanza de seguir adelante y ser lo que él no pudo ser... le dañó el pensamiento a algunas personas que tenían pensado en su futuro ser alguien en la vida”. Joven, Bellavista, 2003.

“...los indígenas son miedosos para salir acá...; nos ha afectado en llevar los alimentos y para vender acá”. Joven indígena, Bellavista, 2003.

Lo anterior demuestra que se trata entonces de manifestaciones sintomáticas del orden de lo ansioso y depresivo propias de situaciones de crisis continuada (Slaikeu, 1988:11-31) como la que se está viviendo. El intenso estrés a que fue sometida la población durante los eventos del 2 y 3 mayo, continúa de manera menos invasiva con el desplazamiento forzado y, posteriormente, con el retiro (presionado) y la dilación de soluciones tendientes a la reparación integral. Esta situación en medio del conflicto armado y de la incertidumbre por la promesa de reubicación, ha dejado a la gente en una precaria situación económica, en una especie de hibernación frente a las alternativas de solución cotidianas y a corto plazo.

Por otra parte, como señales de recuperación se considera que, a pesar de todo, persiste la alegría en el pueblo y las expectativas frente al proyecto de reubicación que "...ha dado un poco de ánimo porque supone trabajo..."

En las narraciones *de las mujeres*, llaman la atención dos fenómenos: la variación sutil en la descripción y responsabilidad de los hechos, y las referencias a situaciones y percepciones relacionadas con sentimientos de culpa por lo que hubiera podido hacerse, por la valoración sobre la corrección de conductas previas y durante la explosión, además de los intentos por dar cuenta de los hechos. Los siguientes relatos ilustran de manera elocuente los sentimientos de las mujeres frente a los hechos sucedidos:

"Los paras no nos dejaban ir y dejarles el pueblo solo; la guerrilla nos ayudó a organizar nos en las casas". Mujer, Bellavista, 2003.

"¿Por qué no lo evité?, ¿por qué lo hicieron? Esos interrogantes quedan sin resolver, porque en la guerra ¿quién le resuelve a uno?". Mujer, Bellavista, 2003.

"...me duele porque me cayó un hijo que talvez le convenía porque yo le dije vámonos, pero el me dice mamá yo no quiero ir pa' llá... Dios sabe cómo hace sus cosas... donde yo esté no los dejen salir". Mujer, Bellavista, 2003.

"...el Atrato parece que fuera todo de la mamá de ellos; se les metió el diablo a la cabeza, haciendo diabluras por todas partes...". Mujer, Bellavista, 2003.

Si bien los sentimientos de culpa son manifestaciones usuales en los procesos de duelo, predominan y cobran actualidad en las diversas entrevistas realizadas. Podrían diferenciarse dos tipos de sentimientos de culpa en estas narraciones: los derivados de la fantasía de haber podido evitar los hechos y sus lamentables consecuencias y aquellos denominados "culpa del sobreviviente", frecuentes en los desastres masivos. La presencia significativa de los primeros, es una de las señales de complicación psiquiátrica en un proceso de duelo; pero también es un sentimiento factible en las víctimas de violencia sociopolítica, y más en circunstancias como las vividas. Es factible en la medida en que no es posible pensar la situación de una manera razonable; no se efectúan las medi-

das de protección por parte de los encargados de hacerlo; no hay un trato digno de los cadáveres. Es factible también porque las personas experimentaron el riesgo de perder la vida en un sitio de carácter sagrado, imbuido del significado de protección; vivieron el hecho como una situación sorpresiva y de intenso estrés; porque las pérdidas son altamente significativas y no encuentran sentido a los hechos. A ello se suma la negación de las víctimas como sujetos de derechos que subyace a muchas acciones asistenciales. Todas estas circunstancias constituyen las condiciones necesarias para que las víctimas deban justificar las acciones y sus consecuencias por sí mismas, situación que les produce intenso sufrimiento pero a la vez les brinda un marco lógico que disminuye la confusión y la incertidumbre.

La búsqueda insistente de una explicación, la necesidad de darle sentido a los hechos, no encuentran fácil respuesta. De esta manera, a pesar de que se intentan algunos análisis de contexto, la situación tiende a explicarse, en varios de los casos, como referida a la fatalidad. Al igual que ocurre con los sentimientos de culpa, esto disminuye la incertidumbre al librar de responsabilidad a la persona, pero también la despoja de su autonomía y paraliza muchas de las acciones útiles para su recuperación.

En los relatos de *los hombres* se observa una tendencia a hacer descripciones minuciosas con un tinte racional, por lo general se incluyen los antecedentes de violencia sociopolítica en la zona y en algunos casos, los acontecimientos posteriores a la explosión; también se enfatizan las acciones llevadas a cabo por ellos mismos durante los acontecimientos y destacan las circunstancias que influyeron para que no se realizaran los ritos funerarios, así como las dificultades para la identificación de los cadáveres.

“...en el segundo intento logré cruzar y recoger el cadáver del niño y lo enteré en el cementerio de Vigía. Se adueñaron de todo... hasta de los asuntos personales... y la ropa que uno tenía para lucir también la sacaron”. Hombre, Belavista, 2003.

“...eso lo que quedó fue gente astillada, tuvieron que recoger con pala y echarlos en bolsas. Cuando vinieron a recogerlos ya eran tres días después y unos todos descompuestos, los echaron así en un bote y permanecieron como unos dos días... y los llevaron a una fosa común y nadie sabía quién era quien, todos despedazados... Esos muertos eran puros rotos. Lo que fueron los

primeros días eso fue una catástrofe, no poder meterse a decir dónde están los familiares. Quién se iba a meter en una plomacera de esas... El que se murió ya se murió”. Hombre anciano, Bellavista, 2003.

“...los primeros que llegamos nos hicimos en la parte de atrás y los de Pueblo Nuevo que llegaron últimos, todos mojados porque esto estaba todo inundado, quedaron al frente y fueron los que más cayeron... yo en principio, no creía que hubiera ese poco de muertos, todo el mundo ahí gritando: ¡Nos mataron!, ¡Nos mataron!, y todo el mundo lleno de sangre, nos tocó correr sobre muertos, heridos, algunos se quedaron heridos en la iglesia, esa noche hubo un fuerte aguacero, bueno algunos se quedaron en la iglesia porque los hacíamos muertos ya, sino que el tres [3 de mayo] todavía se movían, estaban vivos, y los pasamos a Vigía”. Hombre, Bellavista, 2003.

“...los paramilitares se estaban acercando mucho, como muy alrededor de donde estaba la población civil y desde allá disparaban; entonces vimos que era necesario tener un acercamiento con el comandante para exigirles que se retiraran un poco, por ahí fue un grupito e intentamos hacer eso y por pedido de la misma gente que estaba ahí asustada, ellos dijeron que no, que nos quitáramos más bien de ahí, que ahí iban a combatir... ya ellos que dijeron así y prendieron fuego a sus armas, nosotros salimos corriendo y nos metimos a la iglesia”. Hombre, Bellavista, 2003.

Son evidentes las diferencias de expresión y las preocupaciones particulares entre los géneros. Tal como lo plantean Lendrum y Syme (1992:21-41), los procesos de duelo en hombres y mujeres pueden considerarse equivalentes, pero se observan manifestaciones diferenciales y temas que preocupan más intensamente a unos y otras. Las mujeres tienden a expresar más abiertamente las emociones y a considerar los asuntos sentimentales implicados como los más importantes, mientras que los hombres se muestran más contenidos emocionalmente más fuertes y ocultan sus sentimientos; por lo general hablan poco o nada de lo ocurrido:

“Los principales sufrimientos de los hombres son los recuerdos de sus hijos, en el caso mío, yo recuerdo mucho a mi hijo, yo

tengo una foto de él, y cada vez que la miro, me acuerdo de la forma como nosotros jugábamos y todo eso, entonces eso es algo que lo llevo interno... trato como de dar la otra cara que estoy bien y todo, pero internamente estoy viviendo con eso". Hombre, Bellavista, 2003.

De igual manera, los hombres expresan mayor preocupación por los aspectos pragmáticos, operativos, cuando sufren una pérdida significativa.

Esto se relaciona directamente con el desempeño de los roles femenino y masculino que cada sociedad instituye como apropiados. Si observamos las diferencias generales que se determinaron en este grupo de personas en cuanto a comportamientos de género, se evidencia cómo el campo femenino es la casa, la crianza y las labores correspondientes, su responsabilidad en las actividades de celebración tradicionales, en tanto que el campo masculino es la acción, el mundo de lo público, lo sexual (vs. lo paternal), la responsabilidad económica y el poder.

En *los jóvenes* no aparecen muchas narraciones sobre el hecho, algunos se refieren de manera sucinta a "el 2 de mayo"; los relatos siguientes se refieren a las circunstancias de indefensión generadas por la sumisión obligada frente a los armados, en la época previa a la masacre:

"... esa era la ley que había y el que se saliera de su casa lo mataban, tenían que estar ahí acostaditos... Ellos cogieron todos esos pollos y se los comieron. Nadie les podía reclamar... era la guerrilla, ¿qué le ibas a redamar? No le podía decir lár guense de aquí, pues si uno les decía eso, ellos iban a sentir como si uno les tuviera rabia y eso le podía traer la muerte. Lo que ellos decían, esto estaba bien, estaba bien pa' todo el mundo. Sentía mucho miedo porque uno ahí metido sin saber si caía algo ahí en la casa". Joven, Bellavista, 2003.

"... la gente no estaba preparada, ya cuando le tocó a la gente fue correr del peligro..., ellos se metieron aquí porque los paracos se entraron aquí y los paracos y la guerrilla se buscan". Adulto, Bellavista, 2003.

"... maltrataban a los estudiantes nuestros que trataban a

guerrilleros que vivían aquí, violaron dos indígenas... a la mayoría de indígenas que vivían aquí los trasladaron... ya no quieren vivir aquí en Bellavista, desde la masacre...". Joven, Bellavista, 2003.

Algunos jóvenes, ante la pérdida de sus padres, han tenido que asumir la jefatura del núcleo familiar, lo que les ha implicado adquirir a temprana edad compromisos para el sustento y estabilidad de su familia. Esta situación no ha sido fácil puesto que se sienten presionados y abrumados, sin opciones definidas para el logro de sus propios compromisos. Esto los hace más vulnerables a la seducción y el reclutamiento de los actores armados. "Mi mamá se fue para Bojayá ese día y yo me quedé donde mi tía. Cuando hubo la masacre yo corrí con mi hermano y me metí en la iglesia... en esta iglesia murieron 119 personas. Perdí a mi papá en la iglesia y ahora debo mantener a toda mi familia... económicamente me ayudo con los favores que les hago a los soldados que viven aquí... éste es un anillo que hice de una bala de fusil". Joven, Bellavista, 2003.

Sin embargo, para varios de los jóvenes que consideraban la vinculación a los grupos armados como una posibilidad de aventura y transformación de sus pueblos, los eventos violentos del 2 de mayo les han generado desencanto, al punto de plantear dentro de los grupos juveniles la no vinculación como una opción legítima.

Para los jóvenes es muy significativa la muerte de sus pares, sus compañeros de juego, deportes y danza. De hecho, las organizaciones juveniles existentes antes de la masacre se han fragmentado en razón a que murieron muchos de los líderes juveniles que movilizaban estos espacios.

"...me duelen los amigos, eran del colegio... uno vivía con ese ambiente recochando, unidos, estudiábamos sabroso y ahora uno nota el vacío de ellos cuando anda en la calle". Joven, Bellavista, 2003.

En la mayoría de los relatos, los jóvenes ven el futuro como algo complicado y poco claro, donde las dificultades son mayores y cada vez es más difícil la convivencia y la crianza de los hijos. Los jóvenes consideran que el conflicto armado atraviesa todas estas ideas. "Desde hace tres años para acá ya no podemos salir ni movernos por el río; a donde quiera que vamos nos encontramos con los actores armados quienes restringen nuestra circulación". Joven, Bellavista, 2003.



También sienten que la responsabilidad por el mantenimiento y la continuidad del pueblo y de su cultura recae sobre ellos, y que por lo mismo, deben ser más unidos y fortalecer las actividades que vienen realizando. “Antes los jóvenes eran un puro desorden, ahora que los veo, los veo como un solo nido, danzan, cantan, dan esperanza, son un solo nido, eso nos ayuda a nosotros los viejos”. Testimonio incluido en el video *El renacimiento*, noviembre 2003.

La muerte prematura de muchos de sus amigos y compañeros los lleva a pensar que hay que vivir con intensidad y sacarle el jugo a la vida, porque ésta puede perderse en cualquier momento.

Los niños y niñas también han sido víctimas directas de la masacre, allí perdieron a sus amigos, a padres y/o madres y hermanos, además de haber presenciado las escenas de violencia que relatan con horror. Sus narraciones contienen cifras, palabras y descripciones muy precisas sobre las muertes, el miedo y el mal. Sin embargo, no se encuentra que simbolicen estas situaciones a través de figuras como el diablo y la serpiente —lo sobrenatural—. Sus descripciones son bastante crudas y la incorporación del mal y el miedo se adjudican directamente a los actores armados. “Las cosas se convirtieron en horror, se veía sangre, partes de los cuerpos de varias de las personas buenas de la comunidad y también vi muertos a mis amigos, ellos no tenían nada que ver”. “Los de Pueblo Nuevo durmieron en la iglesia y ahí se formó el plomero y los

guerilleros lanzaron una pipeta que cayó dentro de la iglesia y acabó con 119 personas”. Niño, Bellavista, 2003.

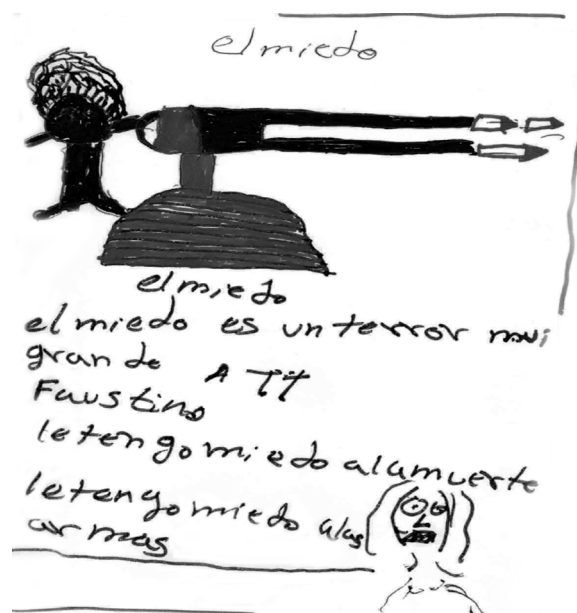


Los niños identifican a los grupos armados como los responsables de la situación que ha vivido la comunidad, sin embargo, no lo gran adjudicarle un sentido a la acción: “Yo no sé a esa gente qué era lo que le disgustaba y le molestaba”. La sin razón y el dolor que implican las pérdidas, ha llevado a que varios de ellos manifiesten deseos de venganza por lo sucedido. También se presenta el caso de niños y niñas que perdieron a familiares cercanos y manifiestan agresión hacia sus demás compañeros.

En los niños que fueron testigos de la masacre es evidente el recuerdo frecuente de los sucesos; los adultos cuidadores hablan de la recurrencia de pesadillas, recuerdos y una necesidad permanente de protección, y de estar en

actitud de alerta, especialmente al escuchar disparos o los “registros” de la fuerza pública que tiene presencia en el lugar.

Los niños manifiestan temor a las armas por los hechos de violencia que experimentaron, sin embargo es común encontrarse con los actores armados dentro del territorio. Paradójicamente, observan que los adultos legitiman los controles y la presencia de éstos, siempre y cuando brinden seguridad. De hecho, se han dado casos en que la fuerza pública, armada y con uniforme, participa de los espacios de juego de los niños y niñas, y en ocasiones son quienes castigan a los niños que “se portan mal”.



En la visión de futuro que tienen los niños se alude a la necesidad de vivir en otro lugar que se parezca a la Bellavista de antes; éste lugar se recrea ahora con las nociones de progreso que han traído quienes los visitan; desean tener televisores, piscinas y grabadoras como los periodistas. Plantean que en ese nuevo lugar no pueden estar solos, sino con la compañía de los agentes institucionales que luego del evento violento han llegado a la zona.

Los adultos muestran preocupación por los niños y niñas, afirmando que se notan miedosos y aislados; se han vuelto “malcriados” o rebeldes, y sus juegos y su lenguaje han cambiado.

“Yo escuche a un niño de 4 años amenazando a otro y le gritaba ‘te voy a matar, te voy a lanzar un pipetazo’ ”. Joven, Bellavista, 2003.

“...lo vi y como si hubiera sido un particular, no lloré... yo no sé qué tengo que no lloro... todo el mundo ‘pero ese pelao anda todo bien’, pero no se imaginan lo que uno siente. Siento como un vacío que nadie lo puede llenar... yo vivía normal con mi familia, una vida que nadie me puede devolver, y ahora que estoy solo tengo que tratar de no echarme para atrás, hacer de cuenta que todavía mi familia existe y que puedo contar con su apoyo, a pesar que están muertos...”. Joven, Bellavista, 2003.

En personas que han perdido a uno o varios seres queridos llama la atención la relativa ausencia de relatos sobre ellos. Para la fecha de realización de las entrevistas habían transcurrido más de dos años desde la masacre y continuaba presentándose inhibición para tratar el tema. Las posibles explicaciones de este hecho son múltiples, pero siguen teniendo como denominador común la dificultad para verbalizar lo perdido o para hacerlo en un ámbito que no sea absolutamente confidencial. Este fenómeno puede reflejar problemas en el trabajo de duelo relacionados con los distintos factores de riesgo que se detectan en estas personas (Petalanda y García-García, 2004); pero también en el hecho de que los miembros de culturas afrocolombianas tienden a expresar sus emociones a través de conductas no verbales intensas como las que se dan en el marco de los rituales funerarios (Serrano, 1994). También hay que tener en cuenta el contexto de peligro que continúa enmarcando la vida cotidiana de estas personas, por lo que el silencio observado obedecería al temor de posibles represalias.

Aquí es importante resaltar los traumas ocasionados en la comunidad por el hecho de no haber podido realizar los ritos funerarios, debido a las condiciones de inseguridad que se vivían, como un factor que ayuda a comprender la tardanza en la elaboración del duelo. En todas las culturas existen una serie de ceremonias normatizadas para la circunstancia universal de la muerte; en las comunidades afrocolombianas los rituales de muerte y nacimiento tienen rela-

ción con la importancia del territorio en la identidad y la noción de ciclos vitales y ritos de paso (se es de donde se nace y por tanto ahí se entierra el ombligo, proceso que continúa con la siembra de un árbol productivo y que debe completarse con el entierro del muerto en el territorio donde nació). Si bien no hay una diferenciación tajante entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos (pues éstos están presentes y actuantes en el ámbito de los primeros), se requiere llevar a cabo una serie de rituales que rindan homenaje a la persona muerta y sobre todo, impidan que la fuerza de la relación vivida se “lleve” o arrastre a los dolientes (este objetivo explica muchas de las manifestaciones ceremoniales y el por qué de sus encargados). Simultáneamente, se da entonces la necesidad de homenaje y la de aplacamiento, en el cierre del ciclo de una vida en esta tierra (Serrano, 1994).

“...pienso yo que la realidad de la comunidad sería otra si la gente hubiera podido hacer su velorio, su gualí, porque justo en esos espacios se permiten como lazos y la gente se reúne mínimamente y conversa, y eso permite asimilar más el hecho. No es fácil estar en Vigía sabiendo que el muerto está acá, y no es lo mismo estar en Vigía, sin poder rezarle y sabiendo que el tipo está aquí muerto...”. Hombre, Bellavista, 2003.

El hecho de no realizar los ritos apropiados deja a los muertos sin sitio y por eso ocupan insistentemente el lugar de los vivos, reclamando lo que dejó de hacerse y preocupados por lo que ocurre en la vida de los familiares que les sobrevivieron. De ahí muchas de las historias de “sustos” y las explicaciones sobre algunas manifestaciones que desde la cultura occidental corresponden al duelo. Como ejemplos están los sueños repetidos y los fenómenos de distorsión perceptual (*oí su voz, la vi*) que se consideran expresiones de la añoranza por lo perdido, pero que para esta población se explica por el no descanso de las almas y por el llamado angustioso que éstas les hacen a “sus” vivos. Podría afirmarse que para los sobrevivientes su mundo está poblado por 119 almas en pena y que se relacionan con ellas por medio de una añoranza-temor-culpa que influye en la persistencia del sufrimiento.

“Todas las noches pienso que ellos están vivos, y hay veces que yo escucho cómo que me llaman y yo me levanto, abro la puerta y no veo a nadie”. Niña, Bellavista, 2003.

Hasta aquí puede concluirse que las personas entrevistadas fueron sometidas a un evento de altísimo nivel de estrés, con características de “traumático” —situación de riesgo que genera pánico, sentimientos de indefensión y de imposibilidad de escape— (Madariaga, 2002). Esto podría explicar la persistencia de ciertas manifestaciones inhibitorias y desviadas en el proceso de adaptación a las pérdidas, junto con el no haber podido llevar a cabo los ritos funerarios (factor de complicación universal), que dadas las nociones vida-muerte, deja a las almas de los muertos sin acceder a la paz merecida y a los sobrevivientes en una relación tensa con ellas. Igualmente, en las manifestaciones del duelo se evidencian expresiones diferenciales por género y edad.

4. Los impactos de las acciones institucionales

“No nos mató la pipeta, pero nos va a matar la ayuda. Mire, yo estoy llevado, decepcionado. Aquí ya nadie quiere hacer nada. Hay como pereza, desánimo. La gente se está acostumbrando a algo así como la mendicidad”²⁰.

Con la presencia de diversos agentes institucionales en la zona a raíz de la masacre, el territorio se reconfigura según sus radios de acción (cabeceras, corregimientos) y se producen un sinnúmero de gestiones, intervenciones y acompañamientos de acuerdo con enfoques, lineamientos particulares, estrategias y poderes especiales desde los cuales cada uno se involucra y legitima. De forma paralela, la comunidad desarrolla prácticas que responden a la enajenación, apropiación y/o autonomía del territorio reconfigurado por las dinámicas de poder de los agentes institucionales.

Varias de las acciones puntuales o que han tenido continuidad en el tiempo han planteado proyectos dirigidos a garantizar la protección de la población, a brindar asistencia humanitaria de emergencia, a fortalecer procesos de identidad colectiva, a fomentar el reconocimiento y la autovaloración de la comunidad, o a actuar como sopor tes de apoyo que faciliten la contención del colectivo frente a las situaciones de violencia. Algunas de esas propuestas lograron ser concertadas, otras se implementaron de manera unilateral o en espacios de interlocución con la comunidad en la medida que se desarrollaba el trabajo.

20 Gómez Paco (2003), “La segunda muerte de Bojayá”, *op. cit.*

A lo anterior se suma el hecho de que la mayoría de las instituciones que respondieron ante la masacre tenía un desconocimiento parcial o total del contexto social, cultural y político de la zona y de la comunidad de Bellavista. Esto llevó no sólo a improvisar y a reformular propuestas y estrategias de intervención, sino que terminó por aumentar la fragmentación del tejido social. Por ejemplo, la focalización de la atención por parte de algunas entidades estatales hacia determinados grupos de población desconoció no sólo el contexto general de pobreza y violencia que se vive en la zona, sino que suscitó disputas en la comunidad debido a la competencia por acceder a los recursos que otorgaban dichas entidades.

Asimismo, el acompañamiento de las instituciones ha respondido a intereses diversos, algunos orientados a acciones de “buena voluntad”, más que en respuesta a obligaciones frente a los derechos de los afectados; en otros casos, es notorio el deseo de protagonismo y la necesidad de ganar visibilidad y legitimación. En esta medida, se ha hecho evidente la improvisación, la desarticulación interinstitucional y el corto alcance de los proyectos y acciones ejecutadas en favor del mejoramiento de las condiciones actuales. El caso de los desplazamientos masivos de comunidades indígenas (marzo y junio 2004)²¹, atendidos por brigadas de salud y comisiones humanitarias, ilustra este tipo de atención focalizada y puntual, necesaria en la emergencia, pero sin efectos en el mediano y largo plazo.

4.1. Lógicas y lenguajes institucionales

A raíz de la masacre, la comunidad, además de soportar la crisis humanitaria que se mantiene por el conflicto, también ha debido aprender a moverse dentro de la dinámica impuesta por los diversos actores institucionales presentes en la zona. En medio del dolor no resuelto la comunidad debe hacer frente a un panorama complejo integrado por el contexto de la guerra, y por las lógicas y lenguajes institucionales, entre otros factores. Un ejemplo de esto es la adopción de términos nuevos como “proyectos”, “pliegos”, “psicosocial”,

²¹ Al respecto, el comunicado de la Organización Embera Wounaan de junio de 2004 plantea: “El desplazamiento forzado desde el 21 de marzo, al cual han sido sometidas cinco de nuestras 22 comunidades, con un número de 1.225 personas, ha sido un drama y una tragedia de manera especial para nuestros niños [...], nos sentimos desatendidos por el Estado Central, pues no han dado respuesta a nuestra grave crisis. No obstante reconocemos la atención que han brindado el ICBF, la Red de Solidaridad, Dasalud”.

“tejido social”, entre otros, que hacen parte del discurso que tienen las instituciones y que debe asimilar la comunidad para ponerse en sintonía con la lógica institucional, para reivindicar su condición de “víctima” y para entrar a exigir la garantía de sus derechos.

De otro lado, la diferencia de discursos que se manejan en el ámbito institucional puede verse reflejada también en lo que respecta a la responsabilidad de la masacre misma, ya que para el Estado la responsabilidad principal recae sobre la guerrilla, mientras que para la Iglesia y los organismos de derechos humanos existe una responsabilidad compartida entre el Estado, la guerrilla y los paramilitares.

Asimismo, después del 2 de mayo se han llevado a cabo diferentes actividades y espacios agenciados-gestionados por actores institucionales externos, en los que la comunidad se ha insertado de acuerdo con las expectativas generadas. En torno a la conmemoración de la masacre, por ejemplo, las instituciones despliegan protagonismos, afianzan su aval ante la comunidad local, nacional e internacional, y de algún modo, se acercan al conocimiento de la problemática local. La comunidad, por su parte, tiene la posibilidad de afianzar su interlocución con los actores institucionales y participa del espacio como un lugar de expresión política y simbólica.

Sobre la manera como se ha manejado el proceso de exigibilidad del derecho a la reparación, las instituciones han introducido distintas categorías de personas que antes no existían en el seno de la comunidad. En este sentido, ahora se habla, de quienes sufrieron la pérdida de familiares, las *víctimas*; de quienes han sufrido daños físicos, o simplemente, de quienes hacen parte del colectivo. En esta lógica, las dos últimas categorías no son reconocidas como víctimas, lo que reduce el concepto de daño, desconociendo los ámbitos colectivo y moral. Por consiguiente, el tema de la indemnización se ha centrado exclusivamente en lo material y lo económico, perdiendo de vista elementos fundamentales como el fortalecimiento del “nosotros”, que plantea el resarcimiento del interés común y lo cultural-social que debe privilegiarse en culturas como la indígena y la afrocolombiana.

Asimismo, la exigibilidad de derechos no ha tenido el debido acompañamiento a las víctimas, con el fin de adjudicarle sentido a este proceso y para que las familias involucradas puedan recibir asesoría sobre las implicaciones de los trámites. Lo anterior, con el agravante, de que en la medida que el tema de la

exigibilidad no involucre a la comunidad se dificulta la apropiación de su derecho a la reparación.

En cuanto al tema organizativo, el énfasis que han tenido los acompañamientos institucionales, dirigidos únicamente a uno o dos líderes o grupos en particular, ha contribuido a la concentración de poder individual en menoscabo del fortalecimiento colectivo. Esa concentración de información y legitimación de poderes ha dificultado que la comunidad realice una reflexión crítica sobre el impacto que esto ocasiona en la organización comunitaria.

4.2. *Algunos actores institucionales*

En el caso del desplazamiento y posterior retorno de la población a Bellavista, la capacidad de respuesta institucional reveló el papel desempeñado por los diferentes actores institucionales tanto del orden local, nacional como internacional, así como las debilidades en la coordinación y las respuestas de impacto para la superación de la crisis.

En el ámbito local, la respuesta de la iglesia y la alcaldía municipal, aunque esta última limitada en comparación con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales —que proporcionalmente disponen de más recursos para la ejecución—, fue reconocida más allá del episodio de la masacre, y son consideradas por la comunidad como importantes fuentes de apoyo. La Iglesia, por ejemplo, a diferencia de otros agentes externos, tiene una larga y constante presencia en la zona, y ha vivido y compartido de la mano de la comunidad momentos cruciales como la masacre.

“Donde uno siente más apoyo es en la Iglesia, la Iglesia es de los que más daban aquí, le daban a la gente, le colaboran mucho, la alcaldía también ha sido una encargada de eso”. Taller con mujeres, Bellavista.

Parte de ese papel protagónico que ha desempeñado la Iglesia en la zona (como un punto de encuentro, un lugar de fe, un apoyo permanente en el tiempo) está en el trabajo de liderazgo y en los procesos organizativos impulsados entre los jóvenes y las mujeres. Ha sido tal su influencia en la conformación de estos grupos, que para varias personas de la comunidad, particularmente los jóvenes, los referentes fuertes —en su mayoría externos— son figuras de la Iglesia.

“Teníamos un grupo juvenil muy bueno donde realizábamos actividades como danza, teatro, chiste y otras actividades, el grupo se llama José Luis Mazo, que es el nombre de un padre ya fallecido que fue uno de los que nos inició, él dio la fuerza para que el grupo surgiera”.

“A lo menos para mí el padre Antún era importante porque me salvó la vida, bueno, a todos los que estamos vivos por él, porque a él le salió la idea de que nos cruzáramos para Vigía en bote, porque si no nos hubieran matado”. Niño, Bellavista, 2003.

Este importante referente institucional, de protección y apoyo, obedece al papel desempeñado por la Iglesia en el contexto particular de conflicto armado, en donde desde diferentes espacios e intervenciones ha reafirmado su papel de acompañamiento, de liderazgo y de denuncia, legitimando, a la vez, su discurso religioso de fe y esperanza.

“...tenemos un equipo que nos ha ayudado siempre, que son los curas y las monjas... por eso estamos vivos”.

“...y ésta es la Iglesia, para eso estamos nosotros, para acompañar y ayudar a las comunidades”. Citado en el video *Bojayá un crimen de guerra*.

Por todo lo anterior, la Iglesia se ha ubicado como un fuerte interlocutor, mediador y legitimador o no de acciones y actores que aparecen en el escenario social. Al lado de organizaciones sociales indígenas y afrocolombianas de trayectoria, ha trazado alianzas estratégicas de protección y de denuncia, que en muchas ocasiones le han acarreado graves consecuencias y limitaciones en su trabajo evangelizador y comunitario. Además, en un contexto de marginalidad y pobreza histórica como el de Bojayá y la región chocoana en general, resulta casi inevitable que la Iglesia termine por asumir un papel suplementario al del Estado, papel que a la vez refuerza su presencia y legitimidad en la zona.

“Es como un Estado inexistente. La Iglesia ha venido ocupando un lugar muy importante en la comunidad, en eso que uno esperaría que hiciera el Estado; pero nos piden cosas, por eso es que nosotros resultamos haciendo cosas que no deberíamos hacer, porque para mucha gente somos cuestionados, somos como

asistencialistas o paternalistas porque estamos haciendo algo”.
Miembro de equipo misionero.

En el caso de las organizaciones comunitarias afrocolombianas e indígenas de trayectoria, como Cocomacia y Orewa respectivamente, éstas se diferencian del accionar institucional externo porque poseen un origen autóctono, una naturaleza de base y un conocimiento de las necesidades y expectativas de sus respectivas comunidades.

“La relación negro-indígena está dada en un nivel de inferioridad hacia los segundos. Cocomacia ha contribuido para superar esto a través del concepto de relaciones interétnicas y territorio compartido”. Miembro de equipo misionero

En los últimos años, debido a la agudización del conflicto y a la crisis humanitaria que se vive en la región, estas organizaciones junto con la Iglesia han aprovechado su experticia y conocimiento propios para establecer interlocuciones y alianzas con organismos de diverso orden, con el propósito de lograr mayor incidencia regional y política. En este marco surgen propuestas interesantes como el Foro Interétnico Solidaridad Chocó que agrupa a varias organizaciones de negros e indígenas con el fin, entre otros, de difundir la problemática regional, apoyar los procesos organizativos y realizar la interlocución con el Estado. De igual forma, en coordinación con un grupo de ONG se ha planteado un Plan de Acción dirigido a la protección en tres frentes: opinión pública y respaldo de la política internacional, protección de la población civil y los procesos sociales de la región, y el fortalecimiento de la capacidad local en la región. En el marco de este plan es que se construyen —con financiación internacional— los Centros Humanitarios de Emergencia en el Medio Atrato que, pese a ser una alternativa de asentamiento temporal de las comunidades desplazadas, no cuenta con la suficiente red interinstitucional para la adecuada atención, protección y acompañamiento de dichas poblaciones.

En esta dinámica de esfuerzos interinstitucionales, la Iglesia junto con las organizaciones sociales locales y otros organismos nacionales e internacionales, han realizado otras actividades como la peregrinación: *Por un buen trato en el río Atrato* (noviembre 2003), que convocó a diferentes actores del orden local, nacional e internacional, con el objetivo de recuperar la navegabilidad del río Atrato desde Quibdó hasta Turbo, y de presionar el levantamiento de las

restricciones impuestas por los distintos actores armados.

Paralelo a esto se han realizado numerosas comisiones humanitarias organizadas por agencias nacionales e internacionales que han contribuido a su manera, a que la gente permanezca en la zona y a que no se sienta abandonada del todo, pese a continuar el clima de zozobra por el desarrollo del conflicto armado.

El mismo sistema de Naciones Unidas²² elaboró un Plan Conjunto de Acción Humanitaria en el 2003 dirigido a cubrir diferentes frentes en las áreas de coordinación y fortalecimiento institucional, prevención y protección, integración y reconstrucción económica y social, atención integral en salud y educación, y seguridad alimentaria. Este plan —que entró en ejecución, revisión y evaluación en el 2004— priorizó zonas de intervención como el Valle del Cauca, el Magdalena Medio y Chocó.

Sin embargo, ante la agudización de la crisis humanitaria, el aumento de las acciones armadas y los hostigamientos a la comunidad, no deja de inquietar el alcance del impacto potencial de las Naciones Unidas en la zona, así como de las numerosas comisiones humanitarias y de verificación realizadas por diversas agencias que con anterioridad y posterior a la masacre han visitado la región. No en vano resulta reveladora la respuesta decreciente de la comunidad ante estas misiones o las expectativas frente a ellas; tanto así que han surgido calificativos como “desfile humanitario” o “chalecos humanitarios”. “Tanta reunidera que no se ve nada, si es gallo o gallina”²³.

De otra parte, en el caso de los medios de comunicación nacionales, que no tienen presencia permanente en la zona ni circulación en el municipio, éstos mantuvieron un despliegue informativo amplio durante y después de la masacre (retorno y conmemoración al año del suceso luctuoso). Sin embargo, la mayoría de la información presentada tuvo un carácter noticioso y fragmentario que terminó por limitarse a registrar hechos aislados en torno al desplazamiento, el retorno, la ayuda humanitaria, los pronunciamientos y la gestión social, entre otros. Así, el cubrimiento cuantitativamente amplio del primer año

22 Entre las doce agencias que conforman el sistema se encuentran: ACNUR-OCHA, OIM, PMA, UNICEF, OPS-OMS, OACNUDH.

23 *El Tiempo*, 2 de mayo de 2003.

aportó poco en cuanto al conocimiento del contexto, a la problemática del conflicto y a su impacto, así como frente al seguimiento juicioso y crítico de los procesos de reparación a las víctimas y de reubicación de Bellavista.

El cubrimiento periodístico de la zona durante el último año (2004) ha sido cada vez más esporádico pese a que la agudización del conflicto ha ido en ascenso, y a que los factores económicos y políticos que alimentan el conflicto se han hecho más evidentes. Llama la atención que al nivel nacional esta situación se haya dado a conocer por los medios de manera superficial como un hecho más dentro de la dinámica del conflicto armado interno. A comienzos del 2004, durante el desplazamiento forzado de comunidades indígenas de la zona, los medios fueron indiferentes pese a los numerosos comunicados de las organizaciones comunitarias y de la Iglesia que reportaron a diario la situación de vulnerabilidad y peligro de las comunidades²⁴, y que revelaron una nueva reconfiguración territorial, política y económica en la región.

4.3. *El sentido de lo institucional para la comunidad*

Frente a la avalancha y despliegue institucional que ha visibilizado y concentrado la atención y los recursos en la zona, particularmente en Bellavista, la comunidad ha ido construyendo un imaginario acerca de lo institucional, que le da sentido a la presencia y a la acción institucional, así como a la relación que la comunidad establece con ellas.

Cuando se hace mención a las instituciones, por ejemplo, la comunidad parece referirse por lo general a un cuerpo compacto donde caben todas, unas más cercanas y visibles que otras. Son instituciones por que no son comunidad. En lo discursivo “las instituciones hacen parte de la comunidad”, pero en la práctica es una relación funcional y en algunos casos distante.

“En el viaje de retorno nos acompaña la diócesis, ahí venían muchas instituciones acompañándonos, pero yo no me acuerdo cómo se llamaban”. Hombre, Bellavista, 2003.

²⁴ *El Colombiano*, a través de un informe especial (29-30 de marzo de 2004), logró dar a conocer la situación de las comunidades indígenas al nivel regional frente a los abusos y agresiones de los paramilitares. De hecho, este diario ha sido uno de los medios de comunicación que ha realizado un cubrimiento regular y de seguimiento en la zona.

El carácter funcional y relacional que la comunidad le otorga a las instituciones públicas parece replicarse en torno a los distintos organismos que han ido apareciendo en el escenario municipal. Todos tienen algo que dar y que apoyar. Ofrecen acciones concretas y puntuales en torno a la reubicación, a la ayuda humanitaria, al apoyo psicosocial, etc. Sin embargo, parece haber claridad en que existe un límite a la acción institucional y que hay otros ámbitos que sólo puede resolver la comunidad o que corresponden a la esfera individual o familiar.

Lo anterior ilustra la forma como se ha dado la presencia y relación institucional en la zona, se asume que la institución es la que ofrece y gestiona, y la comunidad la que recibe, sin demandar activamente, así tenga iniciativas o propuestas diferentes a las planteadas por el agente institucional. Esto se refleja, además, en el desconocimiento general de la comunidad acerca de las acciones o impactos particulares de las distintas instituciones externas (quiénes son o qué hacen) presentes en la zona.

Desde esta perspectiva y agravado por las difíciles condiciones de seguridad en la zona —que inmovilizan y limitan las iniciativas propias—, se hace más factible generar relaciones de dependencia institucional en la comunidad, más que capacidad de agencia y autonomía en torno a procesos de organización o gestión comunitaria.

“Acá siempre se han esperado las propuestas que llegan, no ha habido un proyecto que salga de aquí y ahora hay más división que antes. Yo pienso que la gente ahora con todo esto y con la ayuda que han canalizado, están más dependientes de lo que puedan hacer por la inseguridad en el monte, y también por las minas quiebrapatas”. Hombre, Bellavista, 2003.

“El pueblo cree en ellos, cree que van a salir adelante con lo que les prometen, pero si no cumplen todo se va para atrás, se desaniman y piensan que saliendo del pueblo tendrán otra forma de vivir mejor”. Mujer, Bellavista, 2003.

Es quizás dentro de esta lógica que muchas de las personas externas a la comunidad terminan por considerarse como la única posibilidad de interlocución que abogue a favor de ellos. De esta forma, la esperanza de la comunidad recae

sobre otros, ya que con ellos existe la posibilidad de ser vistos y escuchados por quienes detentan el poder.

“Por lo regular ustedes que vienen acá, que llegan por allá a decir cómo está acá, por allá donde los gobernadores, presidente y todo eso, esos los que más mandan . . . que hablen allá porque uno aquí está pasando muy mala vida con la cosa de la violencia . . . La esperanza está en los que vienen y van de afuera de los pueblos, lejos como es que se dice, las ciudades, esa es la esperanza mía”. Mujer, Bellavista, 2003.

“La llegada de personas y de las instituciones le ha ayudado a la comunidad, le ayuda en varias cosas por las cositas que le traen y todo eso, lo poquito que ha podido llegar”. Mujer, Bellavista, 2003.

De igual manera, independientemente de que la ayuda externa haya sido puntual, intermitente, irregular o descoordinada, y que no haya logrado superar las carencias ni cambiar la situación de marginalidad (“las instituciones nos han apoyado muy poco y cuando apoyan los proyectos lo hacen a medias”), se evidencia la necesidad del apoyo institucional para la proyección futura de la comunidad, apoyo que es considerado en muchos casos como un acto de buena voluntad, más que como la exigibilidad de un derecho. “En Quibdó la RSS nos daba las cositas también pues cuando había, y también la red de mujeres nos colaboraba mucho”. Mujer, Bellavista, 2003.

Frente al impacto de la intervención institucional quedan muchos interrogantes por resolver, de ahí la pertinencia de la siguiente formulación: “Sin embargo, habría que preguntar: ¿Se generan pérdidas con los procesos de intervención?, ¿cuáles y de qué tipo?, ¿quiénes responden por los daños ocasionados a las comunidades en la implementación de dichos procesos?, ¿cómo se recupera el sentido de autonomía de las comunidades, cuando lo han tenido?, ¿cómo se maneja la dependencia de las comunidades sobre los recursos, alianzas y fortalezas de las organizaciones sociales?, ¿qué aprendizajes no esperados por las organizaciones sociales han quedado en el interior de las comunidades durante y al finalizar los procesos de intervención?” (Nieto y Bolívar, 2003:71).

IV. LOS MECANISMOS DE AFRONTAMIENTO: LA SUPERVIVENCIA Y LA BÚSQUEDA DEL SENTIDO

Los mecanismos de afrontamiento se refieren a aquellas acciones y narrativas de construcción e interpretación a que recurren los pobladores para encontrarle un sentido a los acontecimientos luctuosos. En estas acciones y narrativas se manifiestan tanto los recursos simbólicos individuales y colectivos —históricamente constituidos en el marco de configuraciones sociales y culturales—, como los que aportan los agentes externos. De esta manera se posibilita la reconstrucción de las relaciones, las actividades y las dinámicas económicas y culturales, materiales y simbólicas, desestructuradas y alteradas por la guerra. Los mecanismos de afrontamiento son un modo de mitigar y hacer soportable la existencia en un mundo marcado por ausencias, dolores, rabias y permanentes amenazas. Son saberes, habilidades, mecanismos internos y externos, concientes e inconscientes, colectivos e individuales, por medio de los cuales se intenta sobrevivir (adaptarse) y transformar ese espacio doloroso e incomprensible.

Los mecanismos de afrontamiento van construyéndose a medida que emergen las respuestas aprendidas y recreadas por los sujetos individuales y colectivos y se entrelazan con los recursos que aportan individuos e instituciones externas en una relación compleja y contradictoria. En este sentido, no se trata solamente de un recurso inventariado en los haberes de la comunidad, sino de un ejercicio creativo, forzado, si se quiere, por la inminencia del riesgo y por la necesidad de control sobre la vida y el entorno, en función de un presente soportable-aceptable y un futuro posible.

En esta perspectiva, las prácticas culturales y la intermediación que cumplen las redes sociales de apoyo desempeñan un papel central en la tarea de reconstrucción individual y colectiva y en el proceso de elaboración de lo acontecido (memoria), de la búsqueda de justicia (reparación) y de control.

La continuidad de las tradiciones culturales manifestadas en los rituales, las celebraciones, el juego, la danza y el canto, han permitido que la comunidad encuentre formas autónomas para expresar las emociones y recrear las situaciones de pérdida, dolor y miedo, causadas por el conflicto armado. Los cantos creados que circulan a partir de la transmisión oral, dinamizan la memoria colectiva de los hechos violentos vividos, permiten construir un sentido compartido acerca de lo ocurrido, facilitan la comprensión del presente y la cons-

trucción de nociones de futuro. Ejemplo de ello es la reactivación que han hecho los jóvenes de tradiciones como la danza, la chirimía y las fiestas patronales, las cuales revitalizan a la comunidad, brindándole un sentido de continuidad colectiva y de esperanza en el futuro.

Los *alabaos*, en las voces de mujeres, así como las composiciones de *rap* de los jóvenes, son narraciones en las que se nombra y dignifica a las víctimas y se identifica a los victimarios. En ellas se alude a un *nosotros* con atributos y valores, se otorgan palabras al dolor y a la pérdida, se formulan demandas de justicia y se enuncian expectativas de reparación. En estas composiciones se alude a los hechos violentos, a la entrada de instituciones desconocidas, a la visita de presidentes y personajes nacionales; explican por qué ocurrieron los hechos, se nombran y son sujetos en la narración, ubican símbolos propios como “la loca del pueblo” y la iglesia, donde los jóvenes ahora danzan e interpretan la tambora y la chirimía exorcizando con sus ritmos y melodías el terror y la muerte que mancilló ese lugar de culto; nombran a los líderes que les ayudaron a encontrar el camino en medio de la penumbra, a los muertos no con los nombres que aparecen en los registros civiles, sino con los sobrenombres con los que la comunidad los identifica.



A través de estas prácticas dinamizan la memoria colectiva de los hechos violentos, dotando de sentido compartido lo ocurrido y facilitando la compren-

sión del presente y la construcción del futuro. En las narraciones e imágenes articulan aspectos contradictorios. En el escenario de violencia, aparecen la risa, el llanto, la burla y el dolor al mismo tiempo. Estas prácticas se convierten en simbolismos polifónicos porque en ellos participan niños, niñas, mujeres, jóvenes y hombres. Son prácticas culturales que se oponen a las fuerzas hegemónicas que intentan dominar el territorio, y es a través de ellas que asumen el control de su entorno y se convierten en sujetos.

Los rituales incompletos y a destiempo que acompañan los trayectos temporales por los que atraviesan los muertos, permiten reconciliarse con ellos y darles el lugar que se merecen para ganar la protección que sólo los del más allá pueden brindarles.

Los sufrimientos del cuerpo y del alma buscan alivio en los *secretos* que los portadores brindan a los dolientes, acompañados de oraciones y *contras* que se elaboran con los frutos y recursos que la tierra les ofrece. De esta manera, se acude a los rituales y a las tradiciones para sanar las enfermedades; a las prácticas solidarias para acompañar y socorrer a los familiares de los muertos y para recrear escenarios donde se comparten las emociones que suscitan las pérdidas.

La existencia de rituales para sancionar, *maldecir*, a los responsables de los hechos de violencia, actúan como mecanismos colectivos legítimos para reprobar lo ocurrido, y materializar el deseo de justicia frente a la dimensión del daño causado. Estos rituales tienen por objeto impedir el transcurso de una vida feliz para los victimarios, apelando a sus formas de justicia y manifestando la poca fe que tienen en la “justicia de los hombres”, la de las leyes y el derecho. Los bojayaceños estiman que sus ritos son más poderosos, capaces de enloquecer a los asesinos y cobrar cada muerte inocente de niño y niña.

El fuerte vínculo con el territorio (el apego al río, el deseo de morir y ser enterrado en el lugar en donde se nació, el valor simbólico del ombligo amiento) es un recurso que cohesiona, da sentido de pertenencia y significado y es apropiado a través de los procesos de producción y socialización que desarrolla la comunidad. Este elemento permite identificar lo común en los procesos de toma de decisiones y construir patrones autónomos de relación entre los miembros de la comunidad debido al reconocimiento de los usos que se hace del

territorio, de los recursos que provee, de los ciclos y ritmos de la naturaleza que permiten la producción y la movilización.

Pese a ser este vínculo uno de los mecanismos de afrontamiento más importantes para las comunidades —tanto indígenas como afrocolombianas—, ha sido el más afectado. De un lado, por las acciones de violencia de los actores armados que no sólo desterritorializan a las comunidades, sino que también impiden la regulación autónoma de sus relaciones al imponer controles sobre la movilidad, la producción y la comercialización. Y por otro, al ser el mecanismo menos comprendido por las acciones institucionales que se realizan para la reconstrucción de Bellavista. Los agentes institucionales externos difícilmente asumen una perspectiva del proceso de reubicación que involucre de manera plena a la comunidad y su profunda relación con el territorio. Antes bien, las acciones, por muy bien intencionadas que sean, terminan introduciendo fricciones y divisiones en la comunidad que menguan su capacidad colectiva, fragmentan sus procesos y obstruyen la revitalización de los recursos internos con que cuenta para enfrentar las persistentes y continuas situaciones generadas por el conflicto armado en la región.

1. Las redes sociales de apoyo

La colectivización de los procesos de crianza, la solidaridad frente al desabastecimiento de los recursos para la subsistencia y la confianza que genera el respaldo colectivo, son elementos que contribuyen a superar las situaciones de tensión, pérdida y dolor a las que se ven enfrentados los núcleos familiares.

Las entrevistas permitieron corroborar la existencia de fuertes lazos de solidaridad y apoyo como mecanismos de sobrevivencia colectiva ante eventos críticos. Al preguntar sobre las principales redes de apoyo existentes antes, durante y luego de la masacre, las familias mencionaron como principal fuente la red vecinal (que en ocasiones coincide con la familiar o de compadrazgo) seguida por la familiar, y la conformada por los amigos.

“A pesar de lo que pasó... por ahora estoy bien, pues no como antes pero estoy bien, porque a pesar de que no tengo a mis padres, pues tengo un pueblo, tengo mis amigos... toda la alegría. Para mí todo aquí es bien, uno pasa ratos felices, otros amar-

gos, pero ahí vamos. Hay que quedarse para siempre”. Joven, Bellavista, 2003.



Los vecinos y amigos son un recurso importante para el cuidado de los hijos cuando los víveres y el ánimo escasean. El encuentro en medio de la música, el baile, el juego, el deporte, los bordados, a los cuales acuden mujeres, hombres y jóvenes según su disposición y parecer, reactualiza y recrea adscripciones y pertenencias y construye solidaridad y esperanza.

En medio de estas estrategias, también se observa toda una serie de mecanismos individuales y grupales —propios de los llamados mecanismos defensivos—, que permiten proteger a las personas de la invasión descontrolada de los sentimientos y adaptarse a un mundo distinto después del 2 de mayo.

“Yo pensé, cuando llegué a Bellavista, no echar todo al olvido pero sí tratar de olvidar un poco lo ocurrido y pensar en nuevas cosas; pero son cosas que a uno no se le olvidan, pero hay que tratar de salir, no siempre pensar en el dolor. Hay que pensar en seguir adelante”. Mujer, Bellavista, 2003

Viajar a otros lugares, escuchar atentamente música o emisoras religiosas, realizar ejercicios físicos, embriagarse (ahora más que antes) o bailar, son

actividades que las personas mencionan para despejarse, distraerse o no pensar; actividades todas que se ubican dentro de lo que algunos autores llaman mecanismos distractores.

Una manera reiterada de dar sentido a lo ocurrido es la recurrencia a la religión: rogar a Dios, aceptar sus designios y esperar su justicia, a pesar de que esta ha sido tan duramente confrontada.

“Si esto no hubiera pasado no estaría viviendo la misma historia, pero sí otra diferente o quizás peor. Porque lo que le pasó a mi papá y a mi mamá, eso ya iba a pasar y eso pues no, nadie podía detener eso, solamente Dios. Pues si el murió era porque con eso nació y que así tenía que morir y eso tenía que pasar en el pueblo”. Joven, Bellavista, 2003.

La sensación de ser indispensables para otros, de que deben ser ejemplo de fortaleza para sus hijos e hijas o para los jóvenes de la comunidad permite, en especial a los adultos y adultas mayores, así como a las mujeres, encontrar sentido a la existencia y emprender la búsqueda de salidas frente al dolor y la incertidumbre.

Para muchas personas la recuperación tiene que ver con la posibilidad de volver a hacer lo que antes hacían, con poder trabajar:

“Yo digo que lo que me ayudaría a recuperar me, sería como tener un trabajo, algo que hacer, sí y como que vivir más metida como en algo, pues que como que no me deje pensar mucho, porque yo digo que de tanto pensar hay veces que me siento como muy deprimida. Mantenerme ocupada me ayudaría”. Mujer, Bellavista, 2003.

2. Los aportes y estrategias de los agentes institucionales en el proceso de recuperación y afrontamiento

A las respuestas descritas se suma y se articula de manera complementaria y/o contradictoria, la solidaridad y el apoyo recibido de otras comunidades afrodescendientes que se identifican con las víctimas. Esto ha permitido establecer lazos internos de confianza y afirmar o construir su identidad como afrodescendientes y afrotratinenses, la cual los dota de recursos para reivindicar

la autonomía, el resarcimiento de daños y el establecimiento de derechos.

A esto se agrega la presencia de organizaciones sociales e instituciones que brindan recursos, realizan gestiones para garantizar la protección de la población, fortalecen los procesos de identidad colectiva a través de acciones de acompañamiento y fomentan el reconocimiento y la autovaloración de la comunidad. De esta manera actúan como soportes de apoyo que impiden la desarticulación del colectivo frente a las situaciones de violencia. Las personas acuden también a los miembros de la iglesia y de las instituciones civiles para narrar sus sufrimientos, hablar de lo inexplicable, buscar una respuesta solidaria, una compañía, una confirmación y la reafirmación de lo contado.

Algunas de las acciones de los agentes institucionales han permitido que la comunidad vaya incorporando, paulatinamente, nociones relacionadas con el derecho y con su condición de víctimas; la víctima en este caso es una representación que les permite identificarse como agredidos y agraviados, como sujetos lesionados y afectados por las acciones de otros, los “víctimarios”, a los que es posible identificar como personas y grupos con determinadas lógicas e intereses. La categoría de víctima reviste, entonces, un enorme valor como recurso de afrontamiento, pues permite encontrar sentido a lo acontecido, desinstalar la culpa que se interioriza a falta de encontrar a los culpables y emprender procesos de reclamo, a través de los cuales se espera ganar protección y capacidad de control.

El trabajo de construcción de una narrativa de la víctima tiene como objetivo “...plantear la actualidad de sus derechos, negados en el pasado, a los que ahora, sin embargo, se les reconoce vigencia. Hablamos de víctimas y pensamos entonces en seres inocentes, entendiendo consecuentemente que ahí hay atentado a unos derechos que no han prescrito, sino que los reconocemos vigentes” (Reyes Mate, 2003:100).

La construcción de la víctima es, entonces, la construcción de un sujeto social y por lo tanto dista de una perspectiva de victimización, en donde la persona agraviada aparece sólo como despojada y dañada y por lo tanto, carente de capacidad de acción, o valorada como recurso testimonial. “Las víctimas no pueden quedar reducidas a cumplir la exigua función de testigo procesal banalizando, de esta forma, la función del testimonio de la víctima; ni tampoco puede ser tratada desde la perspectiva paternalista que pasa por alto la autonomía de unos sujetos de derecho” (Valladolid, 2003:160).

Los discursos que se promueven desde las instituciones, que reconocen la legitimidad de las víctimas y la legalidad del derecho a la reparación, sin embargo, conviven y son contrarias a los discursos y las prácticas que despliegan las personas de la comunidad con apego a sus creencias, o escepticas ante nociones ajenas y abstractas como las de Estado y ciudadano, o porque sus nociones de daño y sus expectativas de reparación poco tienen que ver con lo que el derecho moderno define.

“Muchas personas dicen que no recibirían nada. Porque la gente dice, a mí no se me murió una vaca, no se me murió un perro, no se me murió un cerdo, a mí se me murió fue un hijo y mi hijo no tiene precio”. Hombre de 30 años, Bellavista, 2003.

Es así como logra entenderse por qué la alusión a la reparación que hace la comunidad se encuentra tan distante de la reparación contemplada en el derecho internacional, en donde el término se usa en un sentido amplio para designar todas aquellas medidas que pueden ser utilizadas para resarcir a las víctimas por los diferentes tipos de daños que hubieran sufrido como consecuencia de ciertos crímenes. Estas incluyen: a) medidas de restitución (cuyo objetivo debe ser lograr que la víctima recupere la situación en la que se encontraba anteriormente); b) medidas de indemnización (que cubran los daños y perjuicios psíquicos y morales, así como pérdida de oportunidades, daños materiales, ataques a la reputación y gastos de asistencia jurídica); y c) medidas de rehabilitación (atención médica y psicológica o psiquiátrica)¹.

Si bien estos estándares establecidos en el DIH suscitan amplios debates, no sólo por la capacidad fáctica de los estados para responder a estas obligaciones, sino por el grado de correspondencia entre el daño causado y la reparación otorgada, es importante contemplarlos como un punto de referencia para el análisis de los usos del concepto que se hace en el país y de la variedad de acciones y propuestas que se realizan en su nombre.

Para las personas de Bojayá, la reparación es un término absolutamente nuevo —“traído por las ONG”—, y su comprensión dista enormemente de los aspectos definidos anteriormente. La reparación, más bien, pareciera asumirse

1 Naciones Unidas (1997), Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías. 49° período de sesiones (E/CN.4/Sub.2/1997/20) 02/10/1997: C. *Derecho a obtener reparación*.

como el inicio de las posibilidades de satisfacer necesidades que consideran importantes o la respuesta a pérdidas no consideradas siquiera como tales en los procesos de reparación. En los diversos testimonios, reparar es:

- Imposible porque hay cosas irreparables, por que ninguna acción devuelve la vida. *“¿Cómo se puede reparar el daño, cuando lo que se ha dañado es la alegría de vivir?”*.
- La llegada efectiva y equitativa de ayudas prometidas.
- El arreglo de los daños de las casas, la iglesia y la escuela.
- La equidad en la repartición de ayudas que llegan a la población.
- Un dinero mal visto, porque los muertos no tienen precio.
- Una responsabilidad del Estado, que no va a cumplir o que implica una tramitología difícil y larga para ser asumida.
- La oportunidad de trabajar, presionar la reubicación por el empleo que generaría (lucha contra el hambre).
- La celebración de un aniversario en homenaje a los muertos.
- Realizar oraciones para que los muertos descansen en paz.
- Promover proyectos para mejorar la calidad de vida de la gente: productivos para poder recuperar la capacidad económica y el desarrollo, y culturales porque son importantes para la comunidad.
- Asegurar la no repetición del hecho.
- Volver a la tranquilidad que tenían antes.
- La atención médica integral y oportuna.

Estas concepciones sobre el proceso de reparación confirman la ausencia de un reconocimiento propio como ciudadanos con derechos. La labor de la Iglesia y de algunas organizaciones ha contribuido a que estas comunidades

reconozcan su condición de exclusión, se reafirmen en su cultura y emprendan procesos que les permitan dignificar sus condiciones de vida. Sin embargo, los siglos de dominación y la historia de una sobrevivencia centrada en su propio esfuerzo, explican que aún lo que el “Estado da” se asuma como dádiva, como “preferible a nada”, como “al menos es algo”, pues “nadie nunca nos dio nada”.

3. La organización y la reconstrucción del tejido social: resultado y condición de los procesos de reparación

Además de la lucha por la reparación, entendida ésta como derecho y por lo tanto como responsabilidad del Estado, la sociedad civil y los diversos agentes institucionales, los bellavisteños estiman que este es un proceso que debe fortalecerse y acompañarse de acciones que propendan por la reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento organizativo.

En este sentido, todas las propuestas de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, internacionales y nacionales, tienen el propósito común de fortalecer los procesos organizativos de la comunidad y de aportar a la reconstrucción del tejido social, que se supone roto o fracturado por efecto de la guerra. Sin embargo, estas propuestas están inspiradas en distintos entendimientos acerca de la dinámica comunitaria, la organización y su deber ser, el ejercicio del liderazgo y la formación, entre otros aspectos. Tal como se evidenció en el análisis de la intervención institucional, son notorios los efectos contrarios que en este sentido generan las diversas intervenciones, circunstancia que impone una reflexión acerca de los procesos organizativos mismos de la comunidad, las formas históricas de relacionarse con el Estado y las instituciones, y los factores contextuales que hacen posible o niegan la concreción de los propósitos mencionados.

Para algunos procesos de acompañamiento, es necesario recurrir a una noción de tejido social que se inserta en la perspectiva del análisis de redes: “La red es una metáfora que permite hablar de relaciones sociales aportando los atributos de ‘contención’, ‘sostén’, ‘posibilidad de manipulación’, ‘tejido’, ‘estructura’, ‘densidad’, ‘extensión’, ‘control’, ‘posibilidad de crecimiento’, ‘ambición de conquista’, ‘fortaleza’, etcétera, tomados en préstamo de su modelo material” (Pakman, 1995:296).

El tejido social alude a la existencia de una serie de relaciones que generan confianza, solidaridad y reciprocidad entre las personas que conforman la

comunidad. Se asume como una metáfora para evidenciar que toda comunidad supone la existencia de vínculos, que entre más intensos y fuertes garantizan más apoyo y contención. Estos vínculos, sin embargo, constituyen una trama densa que “retroactúa” sobre la dinámica de la cual procede, configurando realidades particulares que regulan, sancionan y estimulan diversas prácticas sociales.

Trabajar en función del tejido social, desde esta perspectiva, implica entonces un esfuerzo por “...organizar esas interacciones de un modo más formal, trazarles una frontera o un límite poniéndoles un nombre y generando, así, un nuevo nivel de complejidad, una nueva dimensión” (Pakman, 1995: 296). Reconstruir el tejido social no es por lo tanto una tarea sencilla y de fácil medición, ni es una labor que se hace desde fuera y por otros. En tanto las relaciones crean nuevas realidades, los intentos por establecer, fortalecer y modificar relaciones pueden dar lugar a dinámicas impensadas, no calculadas, entre otras razones porque las relaciones se generan y transcurren en contextos más amplios que el espacio llamado colectivo o comunitario y se anclan en procesos históricos.

Bellavista, la cabecera municipal de Bojayá, es un pequeño poblado en donde todos sus habitantes se conocen, sus familias extensas refunden fácilmente el carácter de familiar o de vecino. Los vínculos se han construido sobre la confianza de ser conocidos desde hace muchos años, de saber cuáles son sus antepasados y ancestros (saber de dónde viene es saber quién es). Vivir y sobrevivir implica esfuerzo y trabajo colectivo, que supone la existencia de relaciones de cooperación (todos trabajando por fines compartidos), de reciprocidad (del intercambio de favores), de solidaridad; relaciones y vínculos que permiten que a cada cual se le asigne un lugar y se le otorgue un valor, y que se mueven entre la armonía y el conflicto, las disputas por el poder y el reconocimiento.

Si bien se da por sentado que esta red social es vigente en Bellavista y que aún constituye el soporte principal de la comunidad, también se reconoce que la guerra y las acciones institucionales han debilitado el tejido social constitutivo de la red. Este debilitamiento se genera y expresa en:

- La falta, por muerte o por desplazamiento, de figuras representativas, determinantes en los procesos de convocatoria, cohesión y organización social.

- La emergencia de liderazgos reconocidos, alentados y legitimados por las instituciones, pero sin credibilidad y respeto en el seno de la comunidad, quien no se siente representada y asocia a estos líderes con la búsqueda de intereses particulares, en detrimento de los colectivos.
- La fragmentación interna de la comunidad, debido a los procesos individualizados o fragmentados de atención y reconocimiento en las tareas de reparación y atención del colectivo.
- La dependencia generada por el carácter asistencial de los programas gubernamentales, que desestimula el trabajo individual y colectivo y, en últimas, paraliza la iniciativa de nuevos proyectos.
- La disminución de los eventos y rituales reafirmadores de la identidad colectiva y de pertenencia a la comunidad, en parte por la falta de credibilidad en la eficacia de sus rituales (debido a su incapacidad para protegerlos), o por los sentimientos de tristeza y escepticismo que suscitan.
- La desconfianza y el aislamiento generado por las presuntas alianzas de algunas personas de la comunidad tanto con agentes institucionales como con actores armados.

Estos aspectos hacen pensar que las personas encuentran menos razones para afirmarse en su lugar, en su comunidad y además de existir factores que debilitan o impiden una “acción colectiva” para reivindicar condiciones de acceso a derechos y al ejercicio de su autonomía. Debido a estas evidencias, se considera que las acciones institucionales de apoyo deben aportar a la reconstrucción del tejido social y a fortalecer la noción de derechos, lo cual debe traducirse en una mayor capacidad organizativa, fundamental para el proceso de acceder a la ciudadanía.

En consecuencia, dos horizontes parecen guiar el sentido y los propósitos del acompañamiento institucional: el fortalecimiento de procesos organizativos y la reconstrucción de la memoria, procesos que aunque deberían articularse y complementarse entre sí no siempre lo logran, porque, como se plantea a continuación, aunque sean enunciadas de igual forma, portan concepciones e

intereses diversos que se debaten entre la construcción de autonomías y la búsqueda de control y de dominación.

4. Los procesos de organización y fortalecimiento comunitario:

Pensar en las víctimas de la violencia —en el caso de Bojayá— implica situarse al margen de las categorías que se derivan de la perspectiva del Estado moderno y de sus construcciones institucionales y simbólicas, dado que la violencia política en esta región, como en otras zonas del país, acontece en un contexto histórico de exclusión, inequidad e impunidad. En consecuencia, las víctimas son por lo general personas llamadas civiles —por su condición de desarmados— y comunidades que han sido objeto de innumerables violaciones de sus derechos por parte del Estado y de los actores armados.

Los eventos violentos bajo la forma de asesinatos selectivos, amenazas, desplazamientos y masacres, entre otros, se agregan, así, a una larga historia de vejaciones que explican, en parte, la ausencia de toda noción de derecho y de la dignidad derivada del estatus de ciudadanía. Esta historia, además, imprime marcas que se expresan en la desconfianza, la victimización, el rechazo, la resistencia y el resentimiento; pero también en mecanismos de defensa que operan como protección de la vida y de la cultura. Estos mecanismos fortalecen identidades y autonomías, aunque sean leídos como desorganización y pasividad desde la lógica que prevalece en la mirada institucional.

En este orden de ideas es necesario reconocer la particular historia colectiva de Bellavista, así como las características que ha tenido la presencia del Estado en la región y los abordajes institucionales que se han dado posteriores a los eventos violentos de mayo de 2002. De hecho, frente a la ausencia histórica de un Estado social de derecho, son comprensibles las dificultades para apropiarse la noción de sujetos de derecho. De igual manera, nociones como dignidad, reparación, verdad, justicia, carecen del contenido que el discurso moderno ha establecido para ellas y que para las víctimas aparecen dotadas de otros significados y sentidos, en ocasiones contradictorios, en tanto responden a otros contextos y cosmovisiones.

Las necesidades particulares de los bellavistenses, su manera de ver y concebir el mundo, la vida, el hábitat, no han encontrado un espacio de reconocimiento como sujetos e interlocutores legítimos en el ámbito social y político del país. Bojayá sólo aparece en el contexto nacional a partir de la tragedia

sucedida el 2 de mayo de 2002, por lo cual la lectura general que se hace de sus derechos se realiza solamente desde la óptica de ser víctimas de la violencia sociopolítica, no desde la exclusión del ejercicio de la ciudadanía. Sus particularidades culturales, como posibilidad de ejercer el derecho a la diferencia, no logran encontrar eco en las acciones que el Estado establece en la zona. Ejemplo de ello son tanto la manera como fue acallada la población durante el proceso de toma de decisiones en el proyecto de reubicación —so pretexto de no perder los recursos prometidos por el Estado—, como el auto proferido por el Consejo de Estado sobre el tema de la reparación a las víctimas, donde la condición de grupo de esta comunidad no fue reconocida por esta instancia estatal (23 de agosto de 2003).

A estas dificultades históricas para reconocerse y hacerse reconocer como ciudadanos se suma la actitud de algunos funcionarios del Estado, que se relacionan con la comunidad de una manera arrogante y mesiánica. Por ello se abroga el derecho de establecer lo que es “bueno, adecuado, necesario y pertinente” para ella. En esta medida, como las leyes obligan a que los proyectos y decisiones sean consultados con la comunidad y que por lo tanto surjan de procesos participativos, los funcionarios despliegan una gran habilidad para que en asambleas, la llamada comunidad firme cartas aceptando propuestas, haga declaraciones públicas de admiración hacia la gestión estatal, todo lo cual se constituye en la “prueba” de que allí se hizo todo con la participación de la comunidad.

Paco Gómez² describe la, según él, mal llamada audiencia pública del 8 de abril de 2003, “que más bien pareció una puesta en escena”.

“La imagen fue propia del Virreinato o de un acto populista de mediados del siglo XX. Everardo Murillo, subdirector de la Red de Solidaridad Social y encargado por el Gobierno central para coordinar los trabajos de ayuda y reubicación de Bellavista, llegó directo de Bogotá para reunirse con la comunidad acompañado de una corte de elegantes representantes del Ministerio de Vivienda, el Instituto de Planificación del Sector Eléctrico (IPSE), la Gobernación de Antioquia —no la de Chocó— y otros funcionarios de la Red. Antes de comenzar la reunión, Murillo dedicó unos calculados mi-

2 www.revistacambio.com/html/cronica/articulos/931/

nutos a saludar a los niños y jugar con ellos en la precaria cancha de fútbol.

En la vacía Casa de Cultura se sentaron menos de 30 habitantes de Bellavista, de los 1.300 que retornaron tras la matanza (un 60% de los que vivían allá antes del suceso), algunos miembros de los equipos misioneros, tres personas que trabajan en un proyecto de la Universidad Nacional, los representantes de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría y un periodista no previsto en el guión.

Murillo pidió aplausos a la comunidad, como la denomina permanentemente, y la convenció para que comenzara a limpiar el terreno destinado al nuevo pueblo con urgencia, aunque todavía no haya ingresado la plata para los jornales. ‘No estamos haciendo las cosas porque se acerque el 2 de mayo, en realidad yo hago aquí de portavoz de la comunidad, ellos me piden cosas y yo las propongo en las asambleas’, aseguró Murillo ante una pregunta sobre cierta precipitación al acercarse la fecha del aniversario.

El último aplauso lo pidió Murillo, dentro de su monólogo, para la directora del IPSE, Hilda Rueda. ‘Como colombiano les pido un aplauso para doña Hilda quien les va a dar una de las mejores noticias para Bellavista’. Hilda Rueda anunció que se destinarán 59 millones de pesos para que Bellavista tenga tres horas adicionales de energía. El gerente de la Electrificadora de Bojayá le agradeció el gesto, pero le contó que la empresa está quebrada y que no queda combustible para las cuatro horas de las que algunas veces disfruta el pueblo”.

Por otro lado, la presencia continua de hechos violentos perpetrados por los diversos actores armados que se disputan el territorio, evidencia la vulnerabilidad de la población para sentirse segura y protegida por parte de las instituciones del Estado encargadas de garantizar estas condiciones.

En este contexto, la visión acerca del Estado y la relación que se establece con él resulta ser, por un lado, la del Estado represivo: el Estado son los militares, los que protegen con la arbitrariedad y la fuerza; y por otro, el Estado son los funcionarios y sus recursos: los que dan algo a cambio de favores (votos,

lealtades, etc.), o los que prometen y no cumplen. Estas percepciones se convierten en un serio obstáculo para construir la confianza necesaria en la relación Estado-ciudadano que debe acompañar todo proceso de recuperación y reparación social, por cuanto constituye el soporte sobre el cual es posible tener la certeza de que los eventos violentos, así como las exclusiones y las vejaciones no se volverán a repetir.

Pese a esto, las nociones de derecho y de ciudadanía van incorporándose poco a poco en los discursos, a medida que los agentes externos las enuncian y las exigen como requisito en toda denuncia o proyecto que se formule, así no sea claro del todo para la comunidad su significado y alcance reales. Por ello es necesario reconocer que en el caso de Bojayá, así como en el de otras comunidades afrocolombianas e indígenas, no par timos de ciudadanos constituidos e incluidos (a la manera del derecho moderno), y que estas comunidades se han construido al margen y a pesar, o en contra, del Estado y de los proyectos de desarrollo (legales e ilegales). Esta comprensión implica entender además que los daños y también las expectativas de reparación no debe establecerse, a priori, según los estándares del derecho internacional o nacional, o según los parámetros de normalidad construidos por la ciencia occidental.

En este orden de ideas, el contenido de las reivindicaciones, su legitimidad dentro de la propia comunidad, así como la capacidad colectiva para presionarlas, se inscribe en un amplio contexto que determina su viabilidad. Es por ello que la construcción de la ciudadanía no puede, por lo tanto, asumirse como una labor exclusiva de la comunidad y de su proceso de autorreflexión y de formación; la posibilidad simbólica y real de esta noción requiere de un Estado (instituciones y agentes) que atribuye y que reafirma. En este sentido, vale la pena resaltar que para la mayoría de las instituciones, la construcción de la noción de derecho se reduce a un proceso de “toma de conciencia” que pasa por la información y la formación: “Que los habitantes se enteren de que tienen derechos” y que “deben exigirlos”, para lo cual “tienen que estar organizados”. Organizados bajo la lógica de los agentes externos, en comités, asociaciones con personería jurídica y voceros que los representen. En el mismo sentido, los líderes necesarios para estos proyectos en nada se parecen a aquellos que culturalmente han ostentado el lugar de quien orienta, media y aconseja. Las personas que ahora se erigen como los “líderes” poco tienen que ver con la sabiduría y el respeto que caracterizaba a los antepasados, y a las personas reconocidas por la comunidad como son los mayoritarios, los padrinos y las matronas. A cambio, son personas que las instituciones identifican como hábi-

les para gestionar, para incorporar el lenguaje propio de la organización en los proyectos que agencian las instituciones.

Aprender a manejar los recursos financieros desde una perspectiva productiva, planear el futuro, establecer mecanismos de comunicación claros, entre otros, son estrategias buscadas en los proyectos llamados de organización y fortalecimiento comunitario. Estos proyectos distan de las características de este grupo étnico, en donde la noción acerca del liderazgo se relaciona con la sabiduría y la habilidad para reconocer las señales del entorno, para curar y aconsejar; donde la comunicación circula en la danza, las chirimías y alabaos, los juegos y dinámicas productivas; donde el tiempo depende del río, el sol, la lluvia y el viento, quienes imponen el ritmo a la vida y sus actividades.

Este “abordaje” comunitario representa una inserción inducida y precaria de las lógicas institucionales y de paso de los proyectos y dinámicas productivas. De esta forma quedan intactas e incuestionadas las lógicas perversas de relación con las instituciones y los modelos de desarrollo de las cuales éstas emanan y a los cuales son funcionales. El proyecto comunitario deviene entonces en plan de acción, en “pliego de peticiones”³, o en unos términos de referencia que se gestionan o negocian con otros. Continuamente se incurre en el intento de “...hiperorganizar, de trazar bordes demasiado firmes, de quitar la ambigüedad creativa que suele estar en las raíces informales de toda red social” (Pakman, 1995:298).

Si bien es necesario reconocer la importancia de aportar información a la comunidad, de apoyar procesos para reivindicar derechos, no es posible eludir la responsabilidad de la sociedad (sus comunidades académicas, políticas, económicas) en la construcción de una nación democrática e induyente. Esto supone que los derechos de las víctimas de Bojayá —los que ellos estiman y reclaman— deben ser un asunto reivindicado por la sociedad colombiana en su conjunto, ya que su impunidad resulta una afrenta, un daño para la nación entera. La dignificación de estos sujetos individuales y colectivos será, si somos consecuentes con un enfoque relacional, un proceso de doble vía en el sentido de otorgar y de asumir, de reivindicar y de reconocer.

Reconocer el derecho de las víctimas además de ser una obligación del Estado, se constituye en una oportunidad para que se sienten las bases de una

3 Al respecto, consultar texto de Restrepo (2003).

sociedad democrática, que no puede prescindir de la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia, pues “es la justicia la que, al extraer de los recuerdos traumatizantes su valor ejemplar, transforma la memoria en proyecto; y es este mismo proyecto de justicia el que da al deber de la memoria la forma del futuro y del imperativo (Ricoeur, 2004: 119).

En consecuencia, es necesario cuestionar un enfoque de trabajo que se centra *exclusivamente* en la comunidad, que le atribuye toda la capacidad y la responsabilidad para presionar y alcanzar las transformaciones necesarias de afrontamiento y superación del daño, y que la interpela para que ella —además de ser la comunidad agredida— tenga que asumir sola su defensa.

Así, se erige un cuestionamiento ético-teórico para los que pretendemos acompañar estos procesos. Todo trabajo enfocado desde la lógica mencionada resulta por obvias razones ineficiente: “se pelean por la plata”, “no llegan a la hora que acuerdan”, “cada uno jala para su lado”, etc. La comunidad excluida, negada, amenazada y masacrada es además señalada y estigmatizada por su incapacidad para organizarse, para actuar y para construirse como sujeto de derechos, en una sociedad en donde no hay un Estado consolidado, entre otras razones porque su capacidad para impartir justicia está severamente socavada.

5. Memoria y olvido en la reconstrucción del tejido social

Los procesos de reconstrucción de la memoria constituyen otro propósito de algunos acompañamientos institucionales; en este caso, al igual que en la enunciada estrategia de organización y fortalecimiento comunitario, también es necesario plantear algunas precisiones.

Si aceptamos con Lerner (2004:347) que la memoria “no ha de entenderse como una simple evocación de hechos ocurridos ni como mera experiencia intelectual, [sino] más bien como una comunión de experiencias teñida de afectividad y que aspira a tender un puente entre el pasado y el presente para la reasignación de un nuevo y superior sentido a sucesos que, en tanto meros hechos el tiempo ha clausurado”. El trabajo sobre la memoria implica una apuesta para que la comunidad emprenda un proceso de revisión crítica de su pasado que le permita fortalecer su identidad y constituirse como “sujeto social”, esto es, con capacidad para asumir agencia y ser actor del propio destino.

Trabajar sobre la memoria, en este orden de ideas, se plantea por un lado como un ejercicio con un profundo valor *terapéutico*, en el sentido en que permite que las personas, individual y colectivamente, encuentren un recurso para dar trámite al dolor y por esta vía elaborar los duelos. De acuerdo con Ricoeur (2004:81), el proceso de recordar es "...no sólo acoger, recibir una imagen del pasado; es también buscarla, 'hacer algo'". Recordar es, por excelencia, un trabajo de elaboración de acontecimientos y no sólo de identificación de datos.

Las acciones diseñadas para recordar permiten que las personas expresen sentimientos y emociones, que escuchen los de otros y otras, comparen, confronten y hallen coincidencias y razones para identificarse con ellos y ellas. En este sentido recordar es resignificar la experiencia a partir de las relaciones que se pueden tejer entre personas, acontecimientos y contextos; entre pasado, presente y futuro. Es esta, entonces, una manera de encontrar sentido y adquirir control sobre sí mismos, lo cual disminuye la tendencia al aislamiento y a la invisibilización que devienen del dolor, del silencio y el olvido.

El trabajo sobre la memoria es un trabajo sobre el duelo, pues a través de las palabras y los símbolos que se evocan y se construyen, circulan las pérdidas, las ausencias y los daños, a la vez que se enfrenta la amenaza del olvido que se cierne como estrategia inconsciente sobre aquellos que han sentido su existencia vital en riesgo. Compartimos con Ricoeur (2004:100) que el "...trabajo del duelo es el costo del trabajo del recuerdo; pero el trabajo del recuerdo es el beneficio del trabajo del duelo".

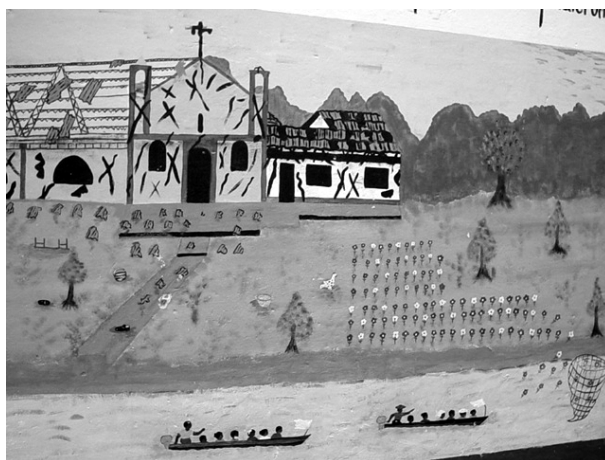
Por otro lado, pero en profunda articulación con lo terapéutico, el trabajo sobre la memoria se reconoce por su aporte al fortalecimiento de la identidad y de la acción colectiva, por cuanto "en el plano más profundo, el de las mediaciones simbólicas de la acción, la memoria es incorporada a la constitución de la identidad a través de la función narrativa. Y como la configuración de la trama de los personajes del relato se realiza al mismo tiempo que la de la historia narrada, la configuración narrativa contribuye a modelar la identidad de los protagonistas de la acción, al mismo tiempo que los contornos de la propia acción" (Ricoeur, 2004:115).

La memoria entonces se traduce en posibilidades de acción, por cuanto provee un repertorio de significados y sentidos que permite que los sujetos,

además de reconocerse como víctimas, se identifiquen como actores, por lo que hicieron o por lo que pueden hacer.

El ejercicio de reconstrucción de la memoria, desde la perspectiva mencionada, ha sido apoyado en Bojayá por éste proyecto y por otras instancias como la Iglesia, a través de diversos recursos como los alabaos, las obras de teatro, los bordados, los murales, los dibujos, además de los talleres de la memoria y la reconstrucción audiovisual de la historia comunitaria. Estas actividades se articulan a las prácticas colectivas generadas por la comunidad, con el fin de reconstruir y darle significado a lo ocurrido.

Desde esta perspectiva, contar cómo transcurrió la masacre ha implicado que las personas se remonten a la historia de la violencia en su región y ubiquen un antes y un después de la masacre. Ha conllevado un ejercicio de construcción colectiva de versiones coincidentes y contradictorias acerca de cómo vivían y quiénes eran antes y después de la violencia, quiénes estaban y quiénes no, cuáles han sido los mártires, qué se hacía, qué se tenía. Narrar el hecho de la masacre supera la descripción del momento y de sus horrores, en tanto supone un ir y venir del pasado, al presente y al futuro.



Este ejercicio sobre la memoria busca generar actos de encuentro con las contradicciones y paradojas de las situaciones vividas y pretende integrar a los

distintos miembros de la comunidad partiendo del principio de reconocimiento del otro y de lo otro, es decir, de las distintas formas de enunciación desde donde fluye la búsqueda de sentido pues, como advierte Ricoeur (2004:57), “uno no se acuerda sólo de sí, que ve, que siente, que aprende, sino también de las situaciones mundanas en las que se vio, se sintió, se aprendió. Estas situaciones implican el cuerpo propio y el cuerpo de los otros, el espacio vivido, en fin, el horizonte del mundo y de los mundos, bajo el cual algo aconteció”.

5.1. La memoria como campo de disputas: hacia la imposición de una “versión verdadera”

Como se mencionó anteriormente, la memoria es un “campo de disputas” que se expresa, al decir de Ricoeur (2004:96), en “la memoria impedida, la memoria obligada, pasando por la memoria manipulada”. Desde esta perspectiva se despliegan trabajos sobre ella, a través de los cuales se persigue la imposición de un relato verdadero que permita orientar el curso de las acciones hacia fines ajenos o contrarios a los de las víctimas.

En el caso de Bojayá, son múltiples los manejos y los discursos que se han puesto a circular al nivel local y nacional sobre la violencia y la masacre; a través de ellos se busca moldear realidades, disputar lealtades y afinidades.

En Bojayá, a diferencia de otros lugares del mundo en donde han ocurrido acontecimientos similares y se ha impuesto el perdón y el olvido frente a los actos atroces, el hecho de que hayan sido las Farc —en enfrentamiento con los paramilitares— quienes lanzaron la pipeta de gas que ocasionó la masacre (es decir, que haya sido un acto perpetrado directamente por grupos ilegales), fue lo que ocasionó que tanto el crimen como sus directos responsables se convirtieran en noticia nacional y mundial. A raíz de la masacre del 2 de mayo de 2002, el gobierno del presidente Pastrana exigió a la comunidad internacional incluir a las Farc en la lista de terroristas del mundo. Este calificativo niega de plano su condición política y la posibilidad de llevar a cabo una negociación política con el Estado. La escena de la iglesia destruida se incluye ahora en videos y propaganda gubernamental que busca concientizar al pueblo colombiano sobre los actos terroristas de las Farc y así deslegitimar su accionar y procurar la colaboración de la población civil en su desmantelamiento. Una muestra de la manera como se ubica este hecho en el escenario de disputas del conflicto armado, es la inmensa valla colocada por el ejército nacional a la entrada del pueblo, la cual reza:



Sin embargo, los medios de comunicación y los organismos de defensa de los derechos humanos —nacionales e internacionales— han difundido ampliamente los aspectos que precedieron a la masacre, así como los detalles de la misma. En estos informes se responsabiliza al Estado por el abandono histórico al que se encuentran sometidas estas comunidades, por la negligencia manifiesta ante las distintas alertas tempranas emitidas por las organizaciones sociales de la zona antes de ocurrir los hechos, y por la evidente connivencia de las fuerzas militares con las fuerzas paramilitares antes, durante y después de la masacre. También responsabilizan a las Farc por haber lanzado el cilindro de gas en un lugar en el que se refugiaba masivamente la población civil, lugar protegido además por el Derecho Internacional Humanitario. Dicha responsabilidad también recae sobre los grupos paramilitares por haber usado a la población civil como escudo humano.

Al margen de una discusión sobre los principales responsables de los hechos, o sobre los intereses que llevaron a que se publicitara la masacre, las circunstancias mencionadas muestran el interés de diversos agentes por visibilizar el hecho, por registrarlo como noticia nacional y por establecer estrategias que permitan que éste se inscriba en la memoria de las víctimas y de la población colombiana. Los diversos actores se disputan así la instauración del relato “verdadero”, de tal forma que los acontecimientos resultan envueltos en una especie de “relato impuesto” el cual, al decir de Ricoeur (2004:572), “... se convierte en trampa, cuando poderes superiores toman la dirección de la configuración de esta trama e imponen un relato canónico mediante la intimidación o la seducción, el miedo o el halago. Se utiliza aquí

una forma ladina de olvido, que proviene de desposeer a los actores sociales de su poder originario de narrarse a sí mismos”.

Esta situación ha hecho que las víctimas cuenten una y otra vez lo acontecido a cuanto agente institucional o medio de comunicación arribe al lugar, incurriendo en una especie de “exceso de memoria”, y que incluso hayan sido invitados a diferentes escenarios a contar la experiencia vivida. En este caso la memoria se ha convertido en un recurso de agentes e instituciones externas para legitimar o deslegitimar a los grupos armados y/o a las instituciones del Estado. Nos hallamos frente a una memoria que se instrumentaliza indistintamente para presionar la imposición de los actores en disputa, una memoria que se inscribe en la dominación que, como lo plantea Lerner (2004:348), “es el recuerdo manipulado que en ocasiones los poderosos imponen a los más débiles... Son situaciones en que ocurre un falseamiento de la verdad histórica, puesto que se traiciona la experiencia vivida por diversas comunidades, de modo que los vencedores prolonguen la violencia a través de relatos oficiales que pretenden arraigarse como verdad en el orden subjetivo de la convivencia humana [...] esa memoria minuciosa de los agravios que se dirige a motivar la venganza es, en última instancia, un sometimiento del pasado: es una memoria que no libera sino que aprisiona; que no eleva el pasado, sino que degrada el presente”.

Este ejercicio de recordar, en medio de tantos intereses y disputas, tiene diferentes connotaciones e implicaciones psicosociales. Tal y como lo admite la comunidad, el haber sido víctimas del horror ha significado la posibilidad de *existencia* para los otros (autoridades, prensa, ONG, etc.), y en este sentido se es visible “gracias” a la tragedia, la cual, de paso, puede “servir” para recibir a cambio recursos, protección y reconocimiento. Contar entonces la tragedia, volver a hablar de los muertos, resulta ineludible si se accede a recursos y a reconocimiento se trata. Más que una necesidad de elaborar el hecho, se trata de una necesidad de vivir de él. La tragedia es el acontecimiento que les permite recibir el respeto y acceder a unos derechos históricamente negados. A partir de la tragedia se ingresa en la noción de ciudadanía y de derecho, junto a otras nociones contradictorias como las de víctimas, desamparados, desfavorecidos, depositarios, dependientes.

Desde este lugar —el de la memoria como narración victimizante— nos hallamos frente a lo que Portocarrero (2004:36) ha denominado como una memoria herida, es decir, “la prisión de la melancolía donde, sumergidos en

nuestro dolor, no podemos ver a los otros, es una memoria que no nos permite enfrentarnos a nuestros odios y desgarramientos, en ella en realidad, nos quedamos absortos en un duelo sin término, en una eterna repetición del dolor”.

La masacre, entonces, los convierte en ciudadanos o en seres victimizados (o en ambos), los construye como sujetos de derecho y/o como personas desamparadas y sin futuro, los cohesiona y los fragmenta, los fortalece y debilita sus identidades. Lo que resulta no puede preverse, en tanto es un ejercicio lingüístico en el que participan diversos y heterogéneos actores interesados en decir unas cosas y en silenciar otras. El tipo de versión que se haga del suceso es un asunto en disputa, pues tanto legítima como ilegítima.

Aún no es muy claro cuál es el efecto que produce la narración reiterada de los hechos de la masacre, cuáles los sentimientos de culpa que suscita en las personas que se sienten beneficiarios de ella, cuál es la “verdad” que se construye a partir de los acentos, silencios, exageraciones, teatralizaciones a que obligan las preguntas motivadas e interesadas de muchos de quienes allí llegan.

Consideraciones finales

Al igual que los diversos funcionarios y agentes institucionales que acudieron a Bojayá, el equipo de trabajo de la Universidad Nacional de Colombia hizo parte de los llamados agentes externos “de los de afuera”, de los que llegaron como una avalancha a la zona. El desconocimiento del contexto y las adversidades que genera el conflicto armado, obligaron durante el ingreso y la realización del proyecto, ejercicios permanentes para cuestionar y reconstruir los conceptos, las metodologías, los enfoques y los abordajes requeridos para llevar a cabo un trabajo pertinente y respetuoso. Ejercicio que sin embargo, luego de casi tres años de “acompañar” a la comunidad, sigue incompleto y limitado y por lo mismo, no permite aún comprender a cabalidad y de forma integral muchos de los sentidos que se entrecruzan allí sobre la vida, la muerte, las pérdidas, la memoria, el presente, el futuro, la organización y la resistencia, entre otras.

Reconociendo estas limitaciones, el trabajo realizado plantea algunas reflexiones, que provocan cuestionamientos en diversos órdenes, frente al tipo

de procesos investigativos y de acompañamiento que se realizan en estos contextos:

- En primer lugar es necesario, insistir en la dificultad que implica llevar a cabo un trabajo de recuperación psicosocial cuando persisten las condiciones de violencia y de exclusión social en la zona. De hecho, la capacidad de volver a ganar control sobre la propia vida y de incidir creativamente sobre el entorno en el que se habita, principio fundamental de la recuperación emocional, no deja de ser más que un planteamiento, dado que la guerra y la pobreza demuestran que el control y la decisión sobre el quehacer en el territorio, vienen de la mano del poder que generan las armas y el dinero.
- Desde la perspectiva conceptual y metodológica planteada en este proceso, la recuperación emocional, implica además, la construcción de narrativas que permitan la desvictimización y el despliegue de recursos propios, lo cual emerge en un proceso de interacción en donde “los otros”, cumplen el papel de atribuir, afirmar y reafirmar. Sin embargo, la comunidad es objeto de todo tipo de definiciones y denominaciones, que responden más a los objetivos de poder y a la búsqueda de legitimidad de los agentes e instituciones externas, que al propósito de reconocerla en su proceso histórico y sociocultural y en función de sus propios proyectos. De esta manera, las versiones que se construyen acerca de Bojayá, pasan por ubicar la como comunidad: víctima, desvalida, empobrecida y/o como comunidad desorganizada, falta de iniciativa y/o como comunidad conflictiva, caótica y “buena vida”. Estas definiciones generan a su vez, prácticas (asistenciales, mesiánicas, clientelistas, etc.) las cuales entran a ser parte de las relaciones y por tanto, de las nuevas realidades que allí se construyen.
- De lo anterior se desprende la dificultad para superar los procesos de victimización, para construir capacidad de agencia y autonomía, para reconstruir y fortalecer el tejido social, a partir de procesos de afirmación identitaria y de revisión crítica de su historia.
- El presente caso permite constatar la ineficacia de rotular, medicalizar o generalizar las experiencias vividas frente a ese tipo de hechos, debido a los sentidos, significados y trámites personales

les, internos y externos que en él se entrecruzan y que se inscriben en una perspectiva sociocultural y simbólica que requiere un análisis detenido. En esta medida, el enfoque psicosocial debe asumir el reconocimiento de las raíces histórico sociales en las cuales se desarrolla la guerra, a fin de no patologizar a las víctimas y a su sufrimiento. Lo anterior, con miras a entender la forma como la violación sistemática de los Derechos Humanos afecta la dignidad y los soportes sociales y espirituales de la población.

- Así mismo, el acompañamiento psicosocial debe aportar mecanismos que disminuyan el malestar emocional y el sufrimiento a partir de la identificación y el despliegue de recursos individuales y colectivos, internos y externos. La recuperación emocional además de contemplar acciones para la elaboración de los duelos y de los eventos del pasado, debe inscribirse en una perspectiva de derechos, la cual obliga a construir condiciones que hagan posible el ejercicio de éstos y las garantías de reparación integral; condiciones imprescindibles para ganar control sobre el presente y para reconstruir los proyectos de vida.

- Las situaciones críticas relacionadas con hechos violentos que conllevan a la separación y fractura de las redes familiares y comunitarias (desplazamientos, separaciones de núcleos familiares, pérdida de miembros centrales para las comunidades y otros) están determinando un vertiginoso “etnocidio” y el resquebrajamiento de formas de vida de incalculable valor teniendo en cuenta que la pervivencia de estos grupos humanos: afrodescendientes e indígenas, se basa en la existencia de las redes familiares, vecinales, de amigos, de compadrazgo, de paisanaje y de crianza.

- La destrucción de la base social, el copamiento de territorios ancestrales con connotación “sagrada” y el empeoramiento de las condiciones de vida, plantean preocupaciones frente a la sostenibilidad de procesos organizativos que durante más de dos décadas han asumido la lucha por la autonomía y la resistencia en la región. Desde sus orígenes, estas organizaciones sociales han orientado sus esfuerzos a la titulación colectiva del territorio, a la búsqueda del desarrollo comunitario, a la cohesión social y a la reivindicación de derechos, objetivos que se debilitan frente a los

imperativos impuestos por la guerra, ya que los obligan a responder de manera prioritaria a la “emergencia”, a la “crisis humanitaria” y a la “asistencia” de las comunidades.

- De otro lado, en medio de las difíciles condiciones para la sobrevivencia, la comunidad es susceptible de toda clase de manipulaciones y chantajes por parte de las propias instituciones estatales, las cuales deterioran las posibilidades de cohesión y de organización social e incluso, pervierten los fines e ideales colectivos, debido al ofrecimiento de recursos exiguos que puedan representar una alternativa económica o un reconocimiento político individual o grupal.

- Debido a los aspectos mencionados, apreciar logros generados por los procesos de acompañamiento, resulta particularmente difícil, máximo si se insiste en que se requieren transformaciones profundas en las estructuras socioeconómicas y políticas que han condicionado la vida en esta región. Sin embargo, y gracias a que los seres humanos no somos en estricto “moldeados” y determinados por esas estructuras, es posible reconocer, en medio de esta terrible adversidad amenazadora, nuevos lenguajes y relaciones que dan cuenta de un valor y aprecio profundo por la dignidad y por la solidaridad, y que se constituyen en el recurso que posibilita emerger y mantener nuevas realidades más humanas y respetuosas en medio del horror y de la guerra.



EQUIPO DE INVESTIGACIÓN PROGRAMA INICIATIVAS UNIVERSITARIAS PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA - PIUPC

Martha Nubia Bello

Profesora del Departamento de Trabajo Social y coordinadora PIUPC de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Trabajadora Social de la Universidad Nacional, Magistra en Ciencia Política de la Universidad de Los Andes y candidata a Magistra en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Miembro de la Red de Investigadores sobre desplazamiento Forzado REDIF.

Elena Martín Cardinal

Profesora del Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Médico Psiquiatra del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Candidata a Magistra de Educación con énfasis en Educación Comunitaria en la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá. Actualmente, asesora de la Corporación AVRE (ONG pro-recuperación emocional de las víctimas de la violencia sociopolítica en Colombia).

Constanza Millán Echeverría

Trabajadora Social de la Universidad Nacional de Colombia. Candidata a Magistra en Antropología en la misma Universidad.

Belky Pulido Hernández

Trabajadora Social de la Universidad Nacional de Colombia.

Raquel Rojas Isaza

Comunicadora Social de la Pontificia Universidad Javeriana.

Auxiliares de Investigación

Sofía Peláez, Alejandra Martínez y Maritza Romero.

Trabajadoras Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.

equipo

ANEXO No. 1 *
Cuadro cronológico de las medidas preventivas antes del suceso violento del 2 de mayo en Bellavista- Bojayá

FECHA	ORGANIZACIÓN - ENTIDAD	CONTENIDO DE LA ALERTA
14 y 19/12/ 2001	Procuraduría General de la Nación. (Circular 006).	Alerta sobre el agravamiento de la violencia en el Medio Atrato y solicitud de protección para la población civil. Solicitud al gobernador del Chocó para convocar un Consejo de Seguridad.
21/04/2002	Diócesis de Quibdó, organizaciones campesinas e indígenas y agencias internacionales	Alerta dirigida a la Defensoría, ONU, Procuraduría, Ministerio del Interior y al Presidente Pastrana sobre el peligro para las comunidades por la presencia de las AUC.
23/04/2002	Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos	Comunicado al Gobierno Nacional sobre la incursión de grupos paramilitares en Bocas de Curbaradó, Vigía del Fuerte y Bellavista.

anexos

FECHA	ORGANIZACIÓN - ENTIDAD	CONTENIDO DE LA ALERTA
24/04/2002	Defensoría del Pueblo. (Alerta No. 0.40)	Alerta a la opinión pública donde se informa de la presencia de grupos de AUC y FARC en los municipios de Bojayá, Bellavista, Murindó y Carmen del Darién.
24/04/2002	Procuraduría General de la Nación. (Oficio DP 502)	Solicitud de medidas preventivas a los ministros del Interior y Defensa para atención a las poblaciones cho- coanas.
26/04/2002	Defensoría del Pueblo	Alerta temprana sobre los riesgos de posibles enfren- tamientos entre grupos ilegales en la zona del Medio Atrato.

* Los anexos han sido elaborados por el equipo de investigación con base en los datos encontrados en las siguientes fuentes durante el periodo mayo 2002 - junio 2004: Procuraduría General de la Nación; Defensoría del Pueblo; Red de Solidaridad Social; Comunicados de organizaciones sociales y eclesiales de la zona; Revistas: Cambio.com, Noche y Niebla; Periódicos: El Colombiano, El Tiempo, El Espectador.

ANEXO No. 2

Balance de víctimas: muertos, heridos y desaparecidos en la masacre. Cuadro comparativo por fuentes

FUENTE	MUERTOS	HERIDOS	DESAPARECIDOS
Red de Solidaridad Social	Más de 120	160	Número indeterminado
Pobladores	86	111 (15 graves)	80
ACIA, OREWA, OIA, Diócesis de Quibdó	119	20	20
Inspección Policial de Bellavista	117	90	(sin información)
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas	119	98	
Revista Semana	117 (entre ellos 44 niños)	114	
Periódico El Colombiano	117 (entre ellos 44 niños)		
Periódico El Espectador	119		

ANEXO No. 3
Seguimiento a los comunicados emitidos sobre Bojayá después de la masacre

AUTOR-FUENTE	CARACTERÍSTICA DE LA FUENTE	TITULAR	FECHA DE PUBLICACIÓN	TIPO DE INFORMACIÓN
Varios	Documento	Foro solidaridad Chocó	12/072001	Pronunciamiento-análisis.
Comunidad desplazada del corregimiento de Caimanero en Bellavista-Bojayá.	Comunicado comunidad.	El 26 de octubre de 2003 hubo enfrentamientos entre FARC y Fuerza Pública, se desplazaron 22 familias (66 personas), fueron ubicados en la Casa de la Cultura, después de 3 meses no han recibido la ayuda humanitaria, se encuentran en condiciones de hacinamiento y enfermedad.	25/01/2003	Pronunciamiento
Comunidad desplazada del Corregimiento de Caimanero	Comunicado comunidad	Comunicado a propósito de la visita del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados ACNUR	25/01/2003	Pronunciamiento

AUTOR-FUENTE	CARACTERÍSTICA DE LA FUENTE	TITULAR	FECHA DE PUBLICACIÓN	TIPO DE INFORMACIÓN
Comunidad Bellavista	Informe comunidad para Audiencia Defensorial	No es corrinche es nuestra regular realidad	01/05/2003	Pronunciamiento-solicitud
Comunidad de Bellavista-Gobierno Nacional	Acta	Acuerdos entre gobierno nacional y comunidad de Bellavista para una reubicación con dignidad	06/06/2003	Pronunciamiento-Pliego de peticiones Retorno con Dignidad.
Familiares de víctimas y comunidad de Bellavista	Comunicado comunidad	Comunicado a la opinión pública nacional e internacional	20/01/2004	Pronunciamiento-petición
OREWA	Comunicado organización indígena	Comunicado a la opinión pública sobre violación Derechos Humanos.	25/02/2003	Denuncia
OREWA – OIA	Comunicado organizaciones Indígenas.	Congreso Indígena Atrato Medio Declaración final.	17/11/2003	Pronunciamiento

AUTOR-FUENTE	CARACTERÍSTICA DE LA FUENTE	TITULAR	FECHA DE PUBLICACIÓN	TIPO DE INFORMACIÓN
OREWA	Comunicado organización indígena	Desde Do Droma Tái los Embera le hablamos a Colombia y el mundo.	21/11/2003	Pronunciamiento
OREWA	Comunicado organización indígena	Riesgos en la comunidad indígena de PLAYITA del río Opogadó, se encuentra asentado un grupo de paramilitares de las AUC, desde donde están sosteniendo combates con la guerrilla de las FARC.	27/02/2004	Denuncia- Pronunciamiento
OREWA	Comunicado organización indígena	Situación de orden público en los ríos Opogado, Napipí y Bojayá	mar-04	Denuncia- pronunciamiento
OREWA	Comunicado organización indígena	Situación de orden público en los ríos Opogado, Napipí y Bojayá	abr-04	Pronunciamiento
OREWA	Comunicado organización indígena	Violación de derechos humanos en Gengadó y Quirijadó	abr-04	Denuncia

AUTOR-FUENTE	CARACTERÍSTICA DE LA FUENTE	TITULAR	FECHA DE PUBLICACIÓN	TIPO DE INFORMACIÓN
OREWA	Comunicado organización indígena	Solicitud de solidaridad y ayuda para evitar atropellos con los pueblos embera, chamí y katio	may-04	Denuncia
OREWA	Comunicado organización indígena	Congreso Indígena zonal Bojayá	jun-04	Pronunciamiento
COCOMACIA, OREWA, OIA, PCS, Diócesis de Quibdó y Procco	Boletín institucional	Crisis humanitaria en el Atrato Medio – Chocó Colombia- Centros Humanitarios interétnicos	sep-02	Informativo
COCOMACIA	Comunicado organización afrocolombiana	Advertencia sobre la degradación del conflicto armado que viven las comunidades de su área de influencia, los 120 consejos comunitarios locales denuncian los asesinatos selectivos cometidos.	12/02/2004	Pronunciamiento

AUTOR-FUENTE	CARACTERÍSTICA DE LA FUENTE	TITULAR	FECHA DE PUBLICACIÓN	TIPO DE INFORMACIÓN
COCOMACIA, COCOMOPOCA, OREWA, Diócesis de Quibdó	Comunicado organización afrocolombiana	Se señalan las alertas tempranas en octubre de 2003, enero y febrero de 2004 por la situación de las comunidades indígenas y negras de los ríos Opogadó y Napipi, confrontaciones entre AUC y FARC desde el 21 de febrero; imposibilidad de movilización para conseguir alimentos.	4 de marzo de 2004	Denuncia-Pronunciamiento
COCOMACIA OREWA y COCOMOPOCA	Comunicado organizaciones comunitarias	Violaciones a las comunidades del alto y medio atrato	04/03/2004	Denuncia
COCOMACIA	Comunicado organización afrocolombiana	Llamado a la opinión pública-indemnización y reparación de las víctimas	mar-04	Pronunciamiento
COCOMACIA y OREWA	Comunicado organización afrocolombiana e Indígena	Desde Quibdó denuncian presencia de AUC y combates en Bojayá.	18/03/2004	Denuncia-Alerta

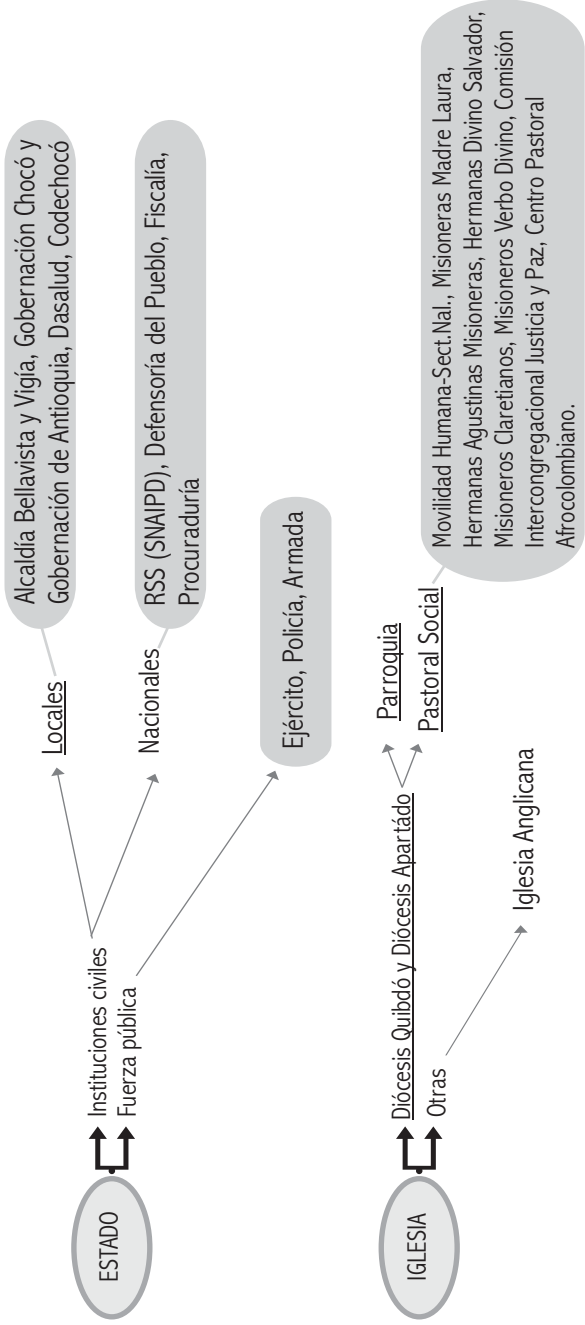
AUTOR-FUENTE	CARACTERÍSTICA DE LA FUENTE	TITULAR	FECHA DE PUBLICACIÓN	TIPO DE INFORMACIÓN
La Asociación de desplazados Afro descendientes Neutrales del Chocó, ADACHO	Comunicado organización afrocolombiana	Denuncia los hechos ocurridos en la Comunidad de Villa España, un pelotón del Batallón Alfonso Mano Salva Flores incursionó, asesino, maltrato y amenazó a pobladores.	04/03/2004	Denuncia
Diócesis de Quibdó- Universidad Nacional de Colombia.	Informe Mesa de trabajo: Caso Bojayá y Medio Atrato	Incremento de las condiciones de riesgo, no se ha tenido el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el pliego del retorno, y tampoco de manera integral y efectiva los compromisos asumidos por el Gobierno.	20/02/2004	Informativo

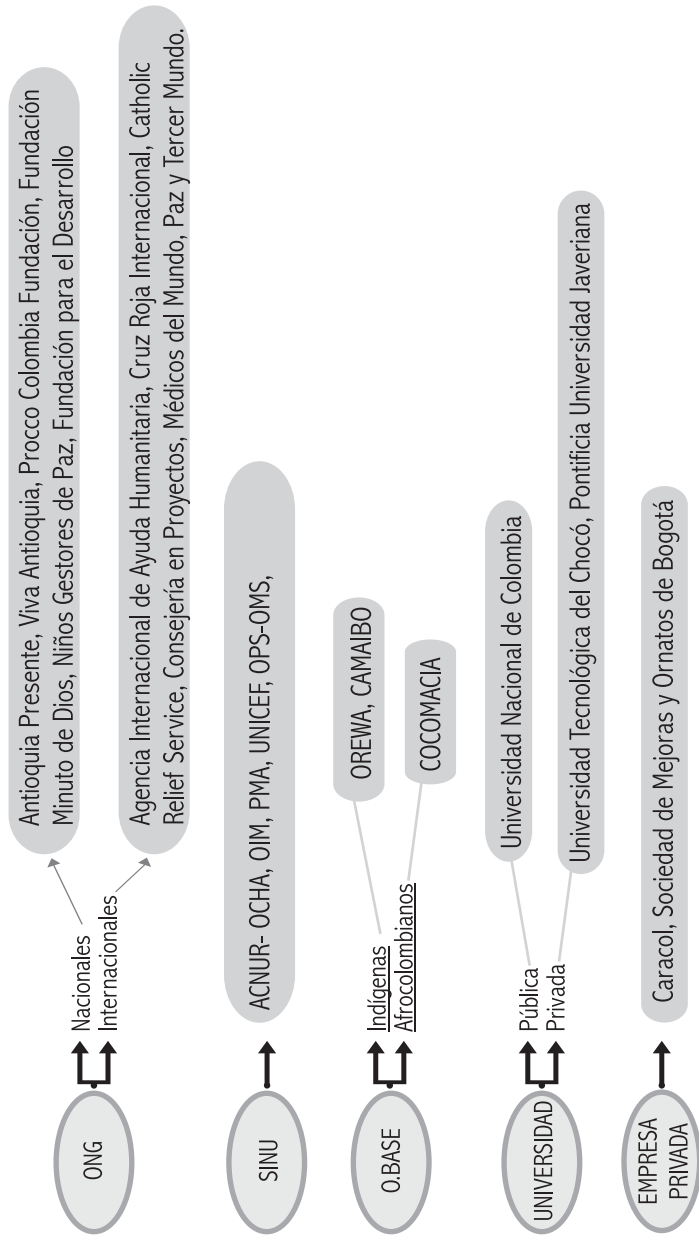
AUTOR-FUENTE	CARACTERÍSTICA DE LA FUENTE	TITULAR	FECHA DE PUBLICACIÓN	TIPO DE INFORMACIÓN
Diócesis de Quibdó, COCOMACIA y OREWA. Entidades Oficales: Red De Solidaridad Social, Centro De Salud De Bellavista y DASALUD - Chocó	Comisión Humanitaria de Verificación al Municipio de Bojayá, Comunidades de Boca de Opogado, Mesopotamia, Egoróquera, Unión Baquiza y Playita del Río Opogadó.	La comunidad indígena de Playita se encuentra desplazada en la comunidad de Egoróquera (32 familias 159personas). Bloqueo de todas las comunidades, saqueo, daño y destrucción de viviendas. Desabastecimiento, ya que los habitantes no pueden visitar sus parcelas, ni salir de las comunidades. Requieren que se les asista y se les garantice alimentos.	29 /02/2004 al 5/03/2004	Informe –Análisis - Contexto
Diócesis de Quibdó, Organización Internacional Paz Y Tercer Mundo Y Corporación Jurídica Libertad.	Denuncia contra el Estado Colombiano ante La Comisión Interamericana De Derechos Humanos.	Violaciones Masivas y sistemáticas de la Convención Americana De DHS, en la zona del Medio Atrato Antioqueño Y Chocoano.	28/07/2004	

AUTOR-FUENTE	CARACTERÍSTICA DE LA FUENTE	TITULAR	FECHA DE PUBLICACIÓN	TIPO DE INFORMACIÓN
Comisión Diocesana Vida Justicia y Paz	Comunicado institucional	Denuncia de incursión paramilitar a Nueva Esperanza.	12/02/2004	Denuncia
Comisión Diocesana Vida Justicia y Paz	Comunicado institucional	Denuncian la grave situación que vienen sufriendo las personas en condición de desplazamiento, asentadas en la zona norte de Quibdó.	05/03/2004	Denuncia
Comisión Diocesana Vida Justicia y Paz	Comunicado institucional-información electrónica		abr-04	Denuncia
Noche y Niebla (Cinep y Justicia y paz)	Informe ONG-DDHH	Bojayá, la otra versión	2002	Análisis-contexto
Noche y Niebla (Cinep y Justicia y paz)	Informe ONG-DDHH	Bojayá, un año y medio después la tragedia continúa	Bogotá, feb-04	Análisis-contexto

AUTOR-FUENTE	CARACTERÍSTICA DE LA FUENTE	TITULAR	FECHA DE PUBLICACIÓN	TIPO DE INFORMACIÓN
Banco de datos de derechos humanos y violencia política — Cinep.	Información electrónica	Bojayá: Una historia para nunca olvidar	s.f.	Noticia-reportaje
Defensoría del pueblo	Comunicado de prensa institucional	Más de 60 muertos y un centenar de heridos deja enfrentamientos entre FARC y AUC Defensoría pide presencia estatal en Vigía del Fuerte y Bellavista	03/05/2002	Petición-pronunciamiento
Defensoría del Pueblo	Comunicado de prensa institucional	Defensoría pide apoyo inmediato a Brigadas de Salud Graves epidemias sufren indígenas desplazados en zona de Bojayá	29/05/2002	Petición-pronunciamiento

ANEXO No. 4
Mapa institucional en la zona (Bojayá, Chocó 2002 - 2004)





Las entidades subrayadas han tenido presencia-trabajo permanente en la zona antes del 2 de mayo de 2002

BIBLIOGRAFÍA

Andrade, Denis Beatriz; Álvarez, Bernardo (1999). *El derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento en Santafé de Bogotá*. Bogotá; Editorial Kimpres.

Antón. Jhon (2000), *Curanderos afrocolombianos y el territorio como escenario religioso*. Bogotá; ICANH, Universidad Nacional de Colombia.

Aponte, D. M.; Scoppetta, O.; González, L. A.; et al. (2000). “Condiciones teórico metodológicas para la realización de un diagnóstico territorial de salud mental en Santafé de Bogotá”. en *Investigaciones en Seguridad Social y Salud*, No. 2, Secretaría de Salud.

Arias, J.; Ruiz, S. (2000). “Construyendo caminos con familias y comunidades afectadas por la situación del desplazamiento en Colombia. Una experiencia de trabajo psicosocial”. en Bello, M.; Martín, E. y Arias, J. (eds.), *Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento*. Bogotá; Unibiblos.

Arias, Jaime Enrique (2003). “El territorio como elemento fundamental de la resistencia al desplazamiento forzado de los pueblos indígenas de Colombia”. en *Destierros y desarraigos. Memorias del II Seminario Internacional “Desplazamiento: Implicaciones y retos para la gobernabilidad, la democracia y los derechos humanos”*. Bogotá; Grafiq Editores.

Balandier, Georges (1994). *El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales*. Barcelona; Gedisa.

Bateson, Gregory (1973). *Pasos hacia una ecología de la mente*. Buenos Aires; Paladin.

Bello, Martha Nubia (ed.) (2004). *Desplazamiento forzado: Dinámicas de guerra, exclusión y desarraigo*. Bogotá; Universidad Nacional de Colombia, ACNUR.

_____ (2002). “Sistematización de la experiencia Proyecto de Apoyo de las Universidades a la Red de Solidaridad Social”. en *Desplazamiento forzado en Colombia: compromisos desde la universidad*. Bogotá; Organización Internacional para las Migraciones.

_____ (2001a). *Desplazamiento forzado y reconstrucción de identidades*. Bogotá; ICFES.

_____ (2001b). "Identidad, dignidad y desplazamiento forzado. Una lectura psicosocial". en *Desplazamiento forzado en Colombia: Conflicto, paz y desarrollo*. Bogotá; Editorial Kimpres.

_____ (2001c). "Desplazamiento forzado y niñez; rupturas y continuidades". en *Conflicto armado, niñez y juventud*. Bogotá; Antropos.

_____ (2000). "Las familias desplazadas por la violencia: un tránsito abrupto del campo a la ciudad". en *Revista del Departamento de Trabajo Social*. Bogotá; Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia.

_____ (2000b). *Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento*. Bogotá; Unibiblos.

Berger, P. y Thomas, L. (1991). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires; Amorrortu.

Berriain, Josexto (1996). *La integración en las sociedades modernas*. Barcelona; Anthropos.

_____ (1990). *Representaciones colectivas y proyecto de modernidad*. Barcelona; Anthropos.

Beristain, Carlos (1999). *Reconstruir el tejido social; un enfoque crítico de la ayuda humanitaria*. Barcelona; Icaria.

_____ (1993). *Afirmación y resistencia: La comunidad como apoyo*. Barcelona; Virus Editorial.

Bioho, Esperanza (comp.) (2000). *Encuentros de africanía*. Bogotá; Fundación Cultural Colombia Negra.

Blair, Elsa (1999). *Conflicto armado y militares en Colombia; cultos, símbolos e imaginarios*. Bogotá; Editorial Universidad de Antioquia, CINER.

Botero Toro, Eduardo (2001). “Desplazamiento o exterminio. Claves indiciarias para iniciar un proceso de averiguación”. en revista *Nova y Vetera*, No. 44, Medellín, Universidad de Antioquia.

Botero Toro, Eduardo; Solís Villa, Rodrigo; López Castaño, Marta y Velásquez R., Enrique A. (2000). *Duelo, acontecimiento y vida*. Bogotá; Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, Instituto de Derechos Humanos “Guillermo Cano”.

Bruner, Jerome (1991). *Realidad mental y mundos posibles*. Barcelona; Gedisa.

_____ (1992). *Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva*. Barcelona; Alianza Editorial.

Caicedo Licona, Carlos Arturo (2002). *Por qué los negros somos así*. Medellín; Dialogar S.A., Editorial Lerner.

Camacho, Juana y Restrepo, Eduardo (1999). *De montes, ríos y ciudades: territorios e identidades de la gente negra en Colombia*. Bogotá; Fundación Natura, Instituto Colombiano de Antropología e Historia y Ecofondo.

_____ (1999a). *Todos tenemos derecho a su parte: derechos de herencia, acceso y control de bienes en comunidades negras de la costa Pacífica chocoana*. Bogotá; Fundación Natura, Instituto Colombiano de Antropología e Historia y Ecofondo.

Castaño, Bertha Lucía (2004). “A propósito de lo psicosocial y el desplazamiento”. en Bello, Martha (ed.), *Desplazamiento forzado, dinámicas de guerra, exclusión y desarraigo*. Bogotá; Universidad Nacional, ACNUR.

Castaño, B.; Jaramillo, E. y Summerfield, D. (1998). *Violencia política y trabajo psicosocial*. Bogotá; Corporación AVRE.

Castillejo Cuéllar, Alejandro (2000). *Poética de lo otro: para una antropología de la guerra, la soledad y el exilio interno en Colombia*. Bogotá; ARFO Editores.

Castro, Angélica y Gachón, Angélica (2001). *Tejido social y construcción de sociedad, Chile*, www.sociedadcivil.cl/accion/portada/info.

Cerbellin, Sante y Uribe, Fanny (2000). *Desplazados: una aproximación psicosocial y abordaje terapéutico*. Bogotá; Editorial Kimpres.

Cobos, Francisco (2001). *Efectos psico-afectivos del desplazamiento*. Bogotá; Com. y Educ. Ltda.

Cohen, Raquel (1999). *Salud mental para víctimas de desastres*. México; Organización Panamericana para la Salud, OPS.

Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (2002). *Medio Atrato. Territorio de vida*. Bogotá; Red de Solidaridad Social, Presidencia de la República.

Durston, John (2002). *El capital social campesino en la gestión del desarrollo rural. Diádas, equipos, puentes y escaleras*. Santiago de Chile; Naciones Unidas, CEPAL.

Espósito, Roberto (2003). *Comunitas. Origen y destino de la comunidad*. Buenos Aires; Amorrortu.

Friedemann, Nina de y Espinosa, Mónica (1993). "Colombia: la mujer negra en la familia y en su conceptualización". en Astrid Ulloa (Editora). *Contribución africana a la cultura de las Américas*. Bogotá; Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Colcultura, Biopacífico.

Geertz, Clifford (1989). *La interpretación de las culturas*. Barcelona; Gedisa.

Gergen, Kenneth (1997). *El yo saturado*. Barcelona; Paidós.

_____ (1996). *La terapia como construcción social*. Barcelona; Paidós.

Gillen, San Juan Cesar (1996). *Intervención psicosocial. Elementos de programación y evaluación socialmente eficaces*. Barcelona; Anthropos.

Giménez Gilberto (2000). "Territorio, cultura e identidades. La región sociocultural". en Martín-Barbero, Jesús; López De la Roche, Fabio y Robledo, Angela (eds), *Cultura y región*. Bogotá; Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, CES, Ministerio de Cultura.

Giraldo, Vilma Sned; Carreño, Laura Sofía; Rojas, Zonia (1999). *De humanos a desplazados. Huellas de nunca borrar*. Bogotá; Editorial Kimpres.

Goffman, Erving (1995). *Estigma: la identidad deteriorada*. Buenos Aires; Amorrortu.

Goolisshian A., Harold; Anderson, Marlene (1994). "Narrativa y Self. Algunos dilemas posmodernos de la psicoterapia". en Schnitman, Dora F. (ed.), *Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad*. Buenos Aires; Paidós.

Gómez Nadal, Paco (2002). *Los muertos no hablan*. Bogotá; Aguilar.

Grando, Luigi; Ferrando, Giuseppe (1998). El fenómeno del desplazamiento en Colombia. Atención humanitaria integral y perspectivas de desarrollo social en Medellín. Medellín; ECOE Ediciones.

Grinberg, León; Grinberg, Rebeca (1980). *Identidad y cambio*. Barcelona; Paidós.

_____ (1984). *Psicoanálisis de la migración y del exilio*. Madrid; Alianza Editorial.

Gutiérrez de Pineda, Virginia (1968). *Familia y cultura en Colombia*. Bogotá; Coediciones del tercer mundo, Departamento de Sociología Universidad Nacional de Colombia.

Guerro R., Carlos (1996). "Sujetos sociales, subjetividad y democracia en América Latina". en *Revista Foro*, No. 28.

Herman, Judith (1997). *Trauma and Recovery*. Nueva York. Basic Books.

Hoffmann, Odile (1999). *Territorialidades y alianzas: construcción y activación de espacios locales en el Pacífico*. Bogotá; Fundación Natura, Instituto Colombiano de Antropología e Historia y Ecofondo.

Honwana, Alcinda (2001). "Guía de Discusión No. 4: conceptos no-occidentales sobre salud mental". en *La experiencia del refugiado. Manual de entrenamiento psicosocial*, Centro de Estudios sobre Refugiados, Universidad de Oxford, Queen Margaret University Collage, Vol. 1. Traducción del inglés: Teresa Santos Rojas. Bogotá; 2004

Lendrum, Susan; Syme Gabrielle (1992). *Gift of Tears*. London and New York; Tavistock/Routledge.

Lerner, Salomón. "Epílogo" en Belay, Raynald; Bracamonte, Jorge; Degregori, Carlos Iván y Joinville Vacher, Jean (eds.), *Memorias en conflicto. Aspectos de la violencia política contemporánea*, Lima, Biblioteca Nacional del Perú.

Linares, Juan (1996). *Identidad y narrativa: La terapia familiar en la práctica clínica*. Barcelona; Paidós.

López Jaramillo, Olga Lucía (2000). "Investigación y trabajo psicosocial con familias víctimas de la guerra en Colombia". en *Revista Colombiana de Trabajo Social*, No. 14, Medellín, Universidad de Antioquia.

Losonczy, Anne Marie (1992). "Les saints et la Foret : système rituel des negro colombiens : échanges inter-ethniques avec les Embera du Chocó (Colombia)". Tesis de doctorado, Université Libre de Bruxelles.

Loughry, Maryanne (2001). "Los paradigmas psicológicos dominantes en la literatura del refugiado y las intervenciones humanitarias" Pág. 140-144 en *La Experiencia del Refugiado. Manual de Entrenamiento Psicosocial*. Centro de Estudios sobre Refugiados, Universidad de OXFORD, Queen Margaret University Collage. 2001. Volumen. 1. Traducción del inglés: Teresa Santos Rojas. Bogotá; Colombia. 2004

Madariaga Orozco, Camilo; Gallardo Bayona, Luz Dary; Salas Fernández, Flavia Marina; Santamaría Barrios, Edna Margarita (2001). "Violencia política y sus efectos en la identidad psicosocial de los niños desplazados: El caso de La Cangrejera". en *Revista Discernimiento*, No. 7, Programa de Psicología, Universidad del Norte.

Madariaga, Carlos (2002). "Trauma psicosocial, trastorno de estrés postraumático y tortura". Cintras, *Serie Monografías*, No. 11. Santiago de Chile.

Marchioni, Marco (1999). *Comunidad, participación y desarrollo. Teoría y metodología de la intervención comunitaria*. Madrid; Popular.

Mardones y Reyes, Mate (2003). *La ética ante las víctimas*. Barcelona; Anthropos.

Mar tín- Baró, Ignacio (1990). *Psicología social de la guerra*. San Salvador; UCA.

Médicos del Mundo (2000), Informe *Evaluación del psicotraumatismo ligado al desplazamiento por la violencia política en el Urabá*. Bogotá.

Meertens, Donny (1999). "Desplazamiento forzado y género: trayectorias y estrategias de reconstrucción vital". en Cubides, F. y Domínguez, C. (eds.), *Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales*. Bogotá; Centro de Estudios Sociales, CES, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, Unibiblos.

Melluci, Alberto (2001). *Vivencia y convivencia. Teoría social para una era de la información*. Madrid; Trotta.

Mingorance, Fidel; Minelli, Flaminia; Le Du Hélène (2004). *El cultivo de palma africana en el Chocó. Legalidad ambiental, territorial y derechos humanos*. Quibdó; Human Rights, Diócesis de Quibdó.

Millán, Constanza y Gil, Edna (2003). "Identidad colectiva y desplazamiento forzado". en *El desplazamiento forzado: compromisos desde la Universidad*. Bogotá; Organización Internacional para las Migraciones, OIM.

Millán, Constanza y Pulido, Belki (2004) Evaluación de los procesos de retorno conducidos por el Estado colombiano. Bogotá, Instituto Latinoamericano de Estudios Legales Alternativos, ILSA, Universidad Nacional de Colombia. Diciembre 2004 – Junio 2005. Documento preliminar.

Millán, Constanza (2004). "Geografía de la despedida". en *Cuadernos de la Maestría del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia*, en impresión.

Moffatt, Alfredo (1997). *Socioterapia para sectores marginados. Terapia comunitaria para grupos de riesgo*. Buenos Aires; Lumen Humanitas.

Montañez Gómez, Gustavo; Carrizosa Umaña, Julio; Suárez Fernández, Normando; Delgado Mahecha, Ovidio y Arturo Lucio, Julián (eds.) (2001). *Espacio y territorios. Razón, pasión e imaginarios*. Bogotá; Universidad Nacional de Colombia, Unibiblos.

Najmanovich, Dense (1995). "El lenguaje de los vínculos. De la independencia absoluta a la autonomía relativas". en Dabas, Eliana y Najmanovich, Dense, *Redes. El lenguaje de los vínculos* Barcelona; Paidós.

Nieto, Lorena y Bolívar, Ingrid (2003). "Transformaciones sociales y procesos de intervención. Comunidades, agentes externos y conflicto armado en el caso de Bojayá, Choco". en revista *Palimpsesto*, No. 3. Bogotá; Universidad Nacional de Colombia.

Organización Internacional para las Migraciones y Pontificia Universidad Javeriana (2002). *Desplazamiento interno y atención psicosocial, el reto de reinventar la vida: Un estado del arte*. Bogotá.

Organización Panamericana de la Salud, OPS/OMS y Programa Salud, Familia y Población (2000). *Promoción de la salud y prevención de la enfermedad de los y las niños y niñas en emergencias complejas o situaciones de desastre*. Bogotá; Organización Panamericana de la Salud, OPS/OMS.

Oslender, Ulrich (1999). "Espacio e identidad en el Pacífico colombiano". en Camacho Juana y Restrepo Eduardo (eds.), *De montes, ríos y ciudades: territorios e identidades de la gente negra en Colombia*. Bogotá; Fundación Natura, Instituto Colombiano de Antropología e Historia y Ecofondo.

Osorio, F. y Lozano, F. (1998). "Horizontes de comprensión y acción sobre el desplazamiento de población rural en Colombia (1995-1997)". en *Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado*. Bogotá.

Osorio, Flor Edilma (2000). “Entre la supervivencia y la resistencia. Acciones colectivas de la población rural en medio del conflicto armado colombiano”. ponencia presentada en el seminario “La sociedad rehén. Estrategias individuales y colectivas frente a la violencia alrededor del caso colombiano”. Marsella, Francia.

Osorio, Flor Edilma (1993). *La violencia del silencio. Desplazados del campo a la ciudad*. Bogotá; Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

Paez, D.; Valencia, J. F.; Pennebaker, J. W.; Rimé, B.; Jodelet, D. (eds.) (1998). *Memorias colectivas de procesos culturales y políticos*. Universidad del País Vasco, Servicio Editorial.

Pakman, Marcelo (1995). “Redes una metáfora para la práctica de intervención social”. en Dabas, Eliana y Najimanovich, Dense, *Redes. El lenguaje de los vínculos*. Buenos Aires, Paidós.

_____ (1997). *La construcción de la experiencia humana*, Vols. I y II. Barcelona; Gedisa.

Pardo, Mauricio (ed.) (2001). *Acción colectiva, Estado y etnicidad en el Pacífico colombiano*. Bogotá; ICANH, Colciencias.

Pérez Sales, P. (2004). *Trauma y resistencia*. Madrid; Escosura Producciones.

Pérez Sales P, Lucena R (2000). “Duelo: una perspectiva transcultural. Más allá del rito: la construcción social del sentimiento de dolor” en *Revista Psiquiatría Pública* No 3, Vol 12. www.dinarte.es/salud-mental.

Petralanda, Víctor; García-García, Jesús (2004). Duelo. www.fisterra.com/guias2/duelo.asp

Portocarrero, Gonzalo (2004). “Perú, el país de las memorias heridas: entre el (auto) deprecio y la amargura” en Belay Raynald; Bracamonte, Jorge; De gregori, Carlos Iván y Joinville Vacher, Jean (eds.), *Memorias en Conflicto. Aspectos de la violencia política contemporánea*. Lima; Biblioteca Nacional del Perú.

Restrepo, Dario Indalecio (2002). "Reestructuración capitalista, formas de organización espacial del Estado y nuevas prácticas políticas" en *La otra política*. Bogotá, Fescol.

Reyes, Mate (2003). "En torno a una justicia anamnética". en Mardones y Reyes, Mate (eds.) (2003). *La ética ante las víctimas*. Barcelona; Anthropos.

Ricoeur, Paul (2004). *La memoria, la historia, el olvido*. Buenos Aires; Fondo de Cultura Económica.

Sánchez Pilonieta, Alfonso (2002). "Dispositivos de empoderamiento para el desarrollo psicosocial". en *Revista Universitas Psicológica*, Vol. 1, No. 2, Medellín,

Sánchez, Gonzalo (2004). "Guerras, memorias e historia". en Belay, Raynald; Bracamonte, Jorge; Degregori, Carlos Iván y Joinville Vacher, Jean (eds.), *Memorias en conflicto. Aspectos de la violencia política contemporánea*. Lima; Biblioteca Nacional del Perú.

Schnitman, Dora F. (1994). *Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad*. Buenos Aires; Paidós.

Semelin, Jacques (2004). "Pensar las masacres". en Belay, Raynald; Bracamonte, Jorge; Degregori, Carlos Iván y Joinville Vacher, Jean (eds.), *Memorias en conflicto. Aspectos de la violencia política contemporánea*. Lima; Biblioteca Nacional del Perú.

Serrano, José Fernando; Arocha, Jaime (1994). "Cuando canta el guaco: La muerte y el morir en poblaciones afrocolombianas del río Baudó, Chocó". monografía de grado. Bogotá; Carrera de Antropología, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia.

Silveira Gorski, Héctor C. (ed.) (2000). *Identidades comunitarias y democracia*. Madrid; Trotta.

Slaikue, Karl (1988). *Intervención en crisis*. México, D.F.; Editorial El Manual Moderno, S.A.

Sluzki, Carlos (1996). *La red social: frontera de la práctica sistémica*. Barcelona; Gedisa.

Strang, Aliso; Ager, Alastair (2003). "Intervenciones psicosociales: algunos aspectos claves que enfrentan los profesionales". en *International Journal of Mental Health, Psychosocial Work and Counselling in Areas of Armed Conflict* (Revista Internacional de Salud Mental, Trabajo Psicosocial y Asesoramiento en Áreas de Conflicto Armado), Vol. 1, No. 3. Traducción del inglés: Teresa Santos Rojas. Bogotá; 2004

Tafalla, Martha (2003). "Recordar para no repetir: El nuevo imperativo categórico de T. W. Adorno". en Mardones y Reyes, Mate, *La ética ante las víctimas*. Barcelona; Anthropos.

Torres Carrillo, Alfonso (2002). "Vínculos comunitarios y reconstrucción social". en *Revista Colombiana de Educación*. Bogotá; Universidad Pedagógica Nacional.

Uribe de Hincapié, María Teresa (2000). "Desplazamiento forzado en Antioquia". en *Aproximaciones teóricas y metodológicas al desplazamiento de población en Colombia*, tomo 0. Bogotá; Secretariado Nacional de Pastoral Social, Conferencia Episcopal Colombiana.

Valladolid, Bueno (2003). "Los derechos de las víctimas" en Mardones y Reyes Mate (2003). *La ética ante las víctimas*. Barcelona; Anthropos.

Vargas, Patricia (1999). *Propuesta metodológica para la investigación participativa de la percepción territorial en el Pacífico*. Bogotá; Fundación Natura, Instituto Colombiano de Antropología e Historia y Ecofondo.

Vásquez, Félix (2001). *La memoria como acción social*. Barcelona; Paidós.

White, M. y Epsom, D. (1990). *Medios narrativos para fines terapéuticos*. Barcelona; Paidós.

Zapata, Laura (2004). "Los desplazados lo perdemos todo menos la dignidad" en Documentos CODHES, *Chocó: agua y fuego*, No. 1.

LISTADO DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Informes institucionales

ACNUR y DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2000). “Masacres ocurridas en Colombia 1998-1999”. Sistema de Alertas Tempranas. Bogotá.

CINEP y DIÓCESIS DE QUIBDÓ (2003). Documento, junio: “Bojayá, la otra versión”.

CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA (2002). “RUT Informa sobre desplazamiento forzado en Colombia”. Boletín especial, Bojayá, julio.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2003). “Informe defensorial sobre la situación de derechos humanos y desplazamiento forzado en el municipio de Bojayá, Atrato Medio”. Bogotá, abril.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO, “Defensoría pide apoyo inmediato a Brigadas de Salud. Graves epidemias sufren indígenas desplazados en zona de Bojayá”. Bogotá, 29 de mayo de 2002.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO, “Más de 60 muertos y un centenar de heridos deja enfrentamientos entre FARC y AUC. Defensoría pide presencia estatal en Vigía del Fuerte y Bellavista”. Bogotá, 3 de mayo de 2002.

FUNDACIÓN DOS MUNDOS (2002). “Informe de labores realizadas para la atención de la población desplazada de la región del Medio Atrato”. septiembre, documento preliminar.

NOCHE Y NIEBLA, CINEP, DIÓCESIS DE QUIBDÓ. “Bojayá, año y medio después la tragedia continúa”, caso tipo 1B., febrero de 2004.

OBSERVATORIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS, VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (2002). “Colombia, conflicto armado, regiones, derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, 1998-2002”.

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS

DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA (2003). “Informe de seguimiento a la situación del Medio Atrato”. junio.

_____ (2002). “Comunicado de prensa con motivo de los trágicos hechos ocurridos en Bojayá el 2 de mayo de 2002”. 2 de mayo de 2003.

ONU (2002). Informe de seguimiento “100 días después de la masacre de Bojayá”. julio.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (2003). Informe sobre los resultados del ejercicio de control realizado sobre el caso Bojayá, “Bojayá un año después de la tragedia”. Bogotá, abril.

RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL (2002). Prensa Red, comunicados No. 042-045-048, mayo.

_____ (2003a). “Acuerdo entre el gobierno nacional y la comunidad de Bellavista para una reubicación con dignidad”. Bellavista, junio.

_____ (2003b). “Informe sobre el estado actual del proyecto de reubicación de Bellavista, cabecera municipal del municipio de Bojayá en el departamento de Chocó”. abril.

_____ (2004a). “Informe de actividades realizadas y por realizar para la reubicación de Bellavista y actividades de apoyo para el municipio de Bojayá”. enero.

_____ (2004b). “Bojayá una comunidad que vive y lucha con esperanza”. Bogotá, marzo.

Artículos en prensa

El Colombiano. “Temen que crezca el éxodo indígena”. Medellín, 25 de marzo de 2004.

El Colombiano. “A Pastrana le reclamaron por el olvido”. Medellín, noviembre de 2002.

El Colombiano. “Advierten riesgo de masacre en Atrato”. Medellín, marzo de 2004.

El Colombiano. “Alertan por posible desplazamiento en Bojayá, Chocó”. Medellín, 16 de marzo de 2004.

El Colombiano. “Bojayá, sepultada en una fosa común”. Medellín, mayo de 2002.

El Colombiano. “Canta el Atrato: no más violencia”. Medellín, noviembre de 2003.

EL Colombiano. “El BEC niega excesos contra civiles”. Medellín, 30 de marzo de 2004.

El Colombiano. “Habitantes temen una nueva masacre en Bojayá, Chocó”. Medellín, 19 de marzo de 2004.

El Colombiano. “La gente del Atrato ya no quiere escapar”. Medellín, 6 de febrero de 2004.

El Colombiano. “No despojaremos a nadie: BEC”. Medellín, 29 de marzo de 2004.

El Colombiano. “Paras” a los ojos de Bill Clinton”. Medellín, marzo de 2004.

El Colombiano. “Por Urabá se mueven barcos con fusiles”. Medellín, mayo de 2002.

El Espectador. “Chocó, en los ojos del mundo”. Bogotá, 30 de marzo de 2003.

El Mundo. “Desembolsarán más de \$14 mil millones para Bojayá”. Medellín, 17 de marzo de 2004.

La Nación. “Las comunidades dicen la tragedia en Bojayá continúa”. Cúcuta, 17 de marzo de 2004.

El País. “El drama del Chocó”. Cali, 20 de enero de 2004.

El Tiempo. “Las heridas del primer mes”. Bogotá, junio de 2002.

El Tiempo. “¡Ya no más reuniones, por favor!”. Bogotá, 2 de mayo de 2003.

El Tiempo. “Alertan sobre posible éxodo de 400 familias de Bojayá (Chocó) por presión de grupos armados”. Bogotá, 16 de marzo de 2004.

El Tiempo. “Anuncian obras en Bojayá”. Bogotá, 28 de marzo de 2004.

El Tiempo. “Armada Nacional recuperó en un 90% la navegabilidad del río Atrato”. Bogotá, 8 de febrero de 2004.

El Tiempo. “Bojayá está otra vez bajo amenaza de los armados”. Bogotá, 15 de marzo de 2004.

El Tiempo. “Bojayá, seis meses después”. Bogotá, 16 de noviembre de 2002.

El Tiempo. “Casi listo, traslado de Bojayá”. Bogotá, 24 de julio de 2002.

El Tiempo. “Diócesis de Quibdó advierte que las FARC se dirigen nuevamente a Bojayá (Chocó)”. Bogotá, 14 de marzo de 2004.

El Tiempo. “El Estado le falló a Bojayá”. Bogotá, 26 de abril de 2003.

El Tiempo. “Fiasco del Estado en Bojayá”. Bogotá, marzo de 2003.

El Tiempo. “Indígenas huyen de posibles combates”. Bogotá, 24 de marzo de 2004.

El Tiempo. “Más ayuda para Bojayá”. Bogotá, 11 de junio de 2002.

El Tiempo. “Nochebuena sin fiesta”. Bogotá, diciembre de 2002.

El Tiempo. “Pastrana regresa hoy a Bojayá”. Bogotá, 29 de julio de 2002.

El Tiempo. “Piedad a boga por las negritudes”. Bogotá, 9 de marzo de 2003.

El Tiempo. “Pliego de peticiones para volver a Bojayá”. Bogotá, 29 de julio de 2002.

El Tiempo. “Recordando la masacre de Bojayá”. Bogotá, 1° de mayo de 2003.

El Tiempo. “Recursos para Bojayá y Vigía”. Bogotá, 30 de julio de 2002.

El Tiempo. “Regreso a la incertidumbre”. Bogotá, agosto de 2002.

El Tiempo. “Segundo retorno masivo a Bojayá”. Bogotá, 16 de noviembre de 2002.

El Tiempo. “Un viaje en el ‘Arca de Noé’”. Bogotá, 2 de septiembre de 2002.

El Tiempo. “Apoyo a las víctimas de terrorismo”. Bogotá, 28 de mayo de 2002.

El Tiempo. “Todos deben responder”. Bogotá, 22 de mayo de 2002.

El Tiempo. “Atrato Medio se queda solo”. Bogotá, 15 de mayo de 2002.

El Tiempo. “No basta con reconstruir el pueblo”. mayo de 2002.

El Tiempo. “Itinerario de una matanza”. Bogotá, mayo de 2002.

El Tiempo. “Cada hora llegan a Quibdó 42 desplazados”. Bogotá, 10 de mayo de 2002.

El Tiempo. “Bojayá debe renacer antes del 7 de agosto”. Bogotá, 10 de mayo de 2002.

El Tiempo. “Abandono del Chocó prende debate”. Bogotá, 9 de mayo de 2002.

El Tiempo. “108 muertes en Bojayá”. Bogotá, 5 de mayo de 2002.

Gómez, Paco (2003). “La segunda muerte de Bojayá”. *Revista Cambio*, No. 931, 25 de abril de 2003.

Neira, Armando (2002). “Agonía sin fin”. *Revista Semana*, No. 1.045, Bogotá, mayo 13-20.

Padilla, Nelson Fredy (2002). “De regreso a Bojayá”. *Revista Cromos*, 6 de septiembre.

Comunicados de organizaciones sociales

COCOMACIA, OREWA y COCOMOPOCA. “Comunicado a la opinión pública nacional e internacional”. Quibdó, 4 de marzo de 2004.

CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO. “Alerta temprana”. Bogotá, 29 de enero de 2004.

CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE. “Presencia en el Medio Atrato”. abril de 2003, Boletín No. 3.

OREWA. “Desde Do Droma Tái, los Embera le hablamos a Colombia y el mundo”. Turbo, 21 de noviembre de 2003.

OIA y OREWA. “Congreso Indígena Atrato Medio. Declaración final”. Vigía del Fuerte, 17 de noviembre de 2003.

OREWA y WOUNAAN. “Comunicado a la opinión pública”. Quibdó, 25 de febrero de 2003.

COMUNIDAD DESPLAZADA DEL CORREGIMIENTO DE CAIMANERO. “Comunicado a propósito de la visita del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR”. Bellavista, 25 de enero de 2003.

FAMILIARES DE VÍCTIMAS Y COMUNIDAD DE BELLAVISTA. “Comunicado a la opinión pública nacional e internacional”. Bellavista, 20 de enero de 2004.

